

ÍNDICE

| | |
|---|------------------------|
| La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la 'ley Celaá'. EUROPA PRESS | Pág 2 |
| Inmersión y coeducación. EL PERIÓDICO de Catalunya | Pág 4 |
| La nueva ley educativa frena la entrega de suelo municipal para colegios concertados. EL PAÍS | Pág 4 |
| Qué significa que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza. LA VANGUARDIA | Pág 5 |
| "Es una barbaridad": La reflexión de un experto en microbiología sobre las auto-tomas PCR. CADENA SER | Pág 6 |
| Los inspectores educativos denuncian que, al quitar la oposición, el PSOE crea "un coladero para el enchufismo". EL MUNDO | Pág 7 |
| PSOE vota junto a Podemos y ERC en el Congreso que el castellano deje de ser vehicular en la educación. LA RAZÓN | Pág 8 |
| Catalunya rectifica y pondrá a sanitarios en las escuelas para supervisar las automuestras de PCR. EL PERIÓDICO de Catalunya | Pág 9 |
| Tiana defiende unos presupuestos "creíbles" para transformar el sistema educativo ante críticas de PP, VOX y CS. EUROPA PRESS | Pág 9 |
| Los sanitarios que guiarán los autotests de los alumnos saldrán de las oenegés. LA VANGUARDIA | Pág 11 |
| Joan Mena: "Los castellanoparlantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística". ELDIARIO.es | Pág 12 |
| Inmersión, mentiras y autosabotaje. EL PAÍS | Pág 14 |
| Educación: la otra trinchera infinita. NAIZ: | Pág 15 |
| El PSOE pide un Plan coordinado con las CCAA para evitar el incremento del abandono escolar por la pandemia. EUROPA PRESS | Pág 16 |
| El Ministerio de Educación deja la Ética fuera de la ESO pese a lo que habían acordado todos los partidos del Congreso ELDIARIO.es | Pág 17 |
| Los efectos psicológicos de la pandemia del Covid en los docentes: "No quiero que mis niños aprendan menos que antes". 20MINUTOS | Pág 18 |
| Europa lucha por mantener sus escuelas abiertas en la segunda ola. EL PAÍS | Pág 19 |
| El problema de la educación en Catalunya no es la lengua. ELDIARIO.es | Pág 21 |
| Madrid endurece los criterios para la escolarización de alumnos con autismo. CADENA SER | Pág 22 |
| Recta final. EL PAÍS | Pág 23 |
| El Gobierno aprueba otros 20 millones para las CCAA del programa PROA+ de ayuda al alumnado vulnerable. EUROPA PRESS | Pág 24 |
| Inés Arrimadas se planta: Ciudadanos no apoyará los Presupuestos si no hay rectificación con el castellano. ABC | Pág 24 |
| Solo tres comunidades resisten con clases 100% presenciales mientras se agudizan las restricciones por la pandemia. ELDIARIO.ES | Pág 25 |
| La concertada reclama de nuevo ante el Congreso la modificación de la 'ley Celaá': "Es un atropello a las libertades". EUROPA PRESS | Pág 27 |
| El PP inicia una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá. CADENA SER | Pág 28 |
| Celaá pide a Ciudadanos "una lectura reposada" de la enmienda sobre el castellano y le acusa de "volver al pasado". EUROPA PRESS | Pág 28 |
| Nuevas claves de la Ley Celaá. EL CORREO GALLEGO | Pág 29 |
| Las cuotas base de la concertada aparte de los fondos públicos: 225 euros al mes en Cataluña y 110 en Madrid EL PAÍS | Pág 31 |
| Más de un 13% de los centros educativos tiene aulas en cuarentena, aunque solo 27 están cerrados por el COVID-19. EUROPA PRESS | Pág 33 |
| Estos son los estudios y sectores más demandados. LA VANGUARDIA | Pág 33 |
| El Gobierno acelera la «ley Celaá»: llega al Pleno del Congreso en tan solo seis días. ABC | Pág 34 |
| El Gobierno pretende que la EBAU en 2021 sea presencial, pero no descarta que sea virtual si la pandemia empeora. EUROPA PRESS | Pág 35 |
| Nacida para morir antes de cumplir los 7 años. CADENA SER | Pág 36 |

| | |
|--|------------------------|
| España se mantiene como el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE pese a la mejora de la última década. EUROPA PRESS | Pág 36 |
| Miles de escuelas siguen cerradas por la covid-19: así es la educación en el mundo hoy. THE CONVERSATION | Pág 37 |
| La Concertada expresa a las puertas del Congreso su rechazo a la ley Celaá. MAGISTERIO | Pág 39 |
| Docentes y sindicatos piden la prórroga de los contratos por refuerzo Covid. MAGISTERIO | Pág 40 |
| José Saturnino Martínez: "En nuestros sistemas se confunde calidad con cumplir el procedimiento". MAGISTERIO | Pág 41 |
| El 63% de los padres admite haber condicionado a sus hijos para estudiar una carrera. MAGISTERIO | Pág 43 |
| El 89 % de la concertada cobra cuotas mensuales, según un estudio de CEAPA y CICAIE. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN | Pág 44 |
| La mala calidad del aire en los centros educativos. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN | Pág 45 |
| Aprovechar la FP para hacer frente a la pandemia. ESCUELA | Pág 47 |
| El castellano dejará de ser lengua vehicular: ¿cambio o vuelta a la normalidad?. ESCUELA | Pág 47 |
| Los PGE recogen 6.000 millones de euros para educación. ESCUELA | Pág 49 |
| «Gracias al impulso de los equipos directivos, las escuelas son de los lugares más seguros de España a día de hoy». ESCUELA | Pág 52 |
| Estructuras y coyunturas: salud mental y sistema educativo, una ecuación sin resolver. ESCUELA | Pág 54 |

europapress.es

La Comisión de Educación del Congreso aprueba eliminar el castellano como lengua vehicular en la 'ley Celaá'

También se ha votado a favor de prohibir la segregación por sexos en los centros concertados

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, ha votado a favor este jueves de eliminar que el castellano sea considerada una lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.

La enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC (que ha salido adelante por 20 votos a favor, frente a 16 en contra y 1 abstención) suprime de la ley educativa (Disposición Adicional 38) la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como de "lenguas vehiculares" tanto al castellano como las demás lenguas cooficiales.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, quedaría así: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

De este modo, la enmienda pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

El proyecto de reforma inicial no recogía en un principio esta opción, al establecer que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios", así como que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

Pero ahora, con esta enmienda, se elimina del proyecto la referencia a las lenguas cooficiales como "lenguas vehiculares" y al castellano como "lengua oficial del Estado".

También la actual ley de educación (la llamada 'ley Wert') recoge que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable".

La iniciativa pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC ha suscitado la polémica entre el resto de fuerzas parlamentarias. De hecho, el PP, Cs y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la denominada 'ley Celaá', en caso de que finalmente incluya la supresión del castellano como lengua vehicular.

"UN PASO IMPORTANTE PARA CATALUÑA"

Tras la Ponencia, el portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Educación del Congreso, Joan Mena, ha destacado de todas las enmiendas aprobadas, cuatro, en las que precisamente ha habido acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Entre ellas, la de inmersión lingüística, ya que permitirá "el blindaje de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística". El diputado ha agradecido el trabajo realizado al PSOE y ERC por haber hecho posible este acuerdo, dado que "hay un consenso amplísimo en la sociedad catalana" con respecto al tema.

"Es un paso importante para Cataluña y para el conjunto del Estado, que da pasos firmes en reconocimiento del plurilingüismo y de la plurinacionalidad".

Con respecto a la voluntad del PP, Cs y de Vox de recurrir ante el Tribunal Constitucional la 'ley Celaá' en caso de que incluya esta medida, Mena ha asegurado: "No me sorprende el enfado de las tres derechas".

NO SEGREGACIÓN DE SEXOS EN LA CONCERTADA

Igualmente, ha salido adelante otra enmienda transaccional entre el PSOE, Podemos y ERC, por 20 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención, para prohibir que en la educación concertada se pueda segregar a los alumnos por sexo. Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar el concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

"Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género", recoge el texto de la enmienda transaccional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, y con el objetivo de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades, la modificación estipula que los centros educativos incorporarán medidas para desarrollar la igualdad "efectiva" entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.

El texto ahonda en que los centros deberán "necesariamente incluir y justificar" en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para "hacer realidad la igualdad".

"En todo caso, las administraciones educativas impulsarán el incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional con menor demanda femenina", destaca la enmienda en su apartado cuarto.

Los tres grupos parlamentarios han llegado a este acuerdo después de que el proyecto de reforma de la ley que redactó el Ministerio solo recogiese que "en los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual".

Mena ha celebrado, tras la aprobación de esta enmienda, que "no se destinará ni un solo euro público a aquellas escuelas elitistas que segreguen por sexo". "Quien quiera que sus hijos, en un delirio fundamentalista y del siglo pasado, estudien separados, se lo tendrá que pagar con su dinero", ha señalado.

OTRAS ENMIENDAS APROBADAS

Igualmente, se han aprobado otras dos enmiendas transaccionadas entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC. Una de ellas permitirá que no haya cesión de suelo público para centros que no sean de titularidad pública, una "práctica muy habitual en la Comunidad de Madrid" así como en la Comunidad Valenciana, según ha anunciado el portavoz de Unidas. "Lo que garantizamos es que el suelo público solo se cederá para las escuelas públicas, evitando el privilegio que tenían algunas escuelas privadas", ha dicho.

Mena también ha avanzado que se ha aprobado aumentar por ley la oferta de plazas públicas para poner a disposición del conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de "equiparar el porcentaje de plazas públicas al resto de países de la UE".

UN TOTAL DE 1.168 ENMIENDAS

La Ponencia de este jueves ha sido la quinta y última. Este grupo de trabajo, que ha analizado un total de 1.168 enmiendas al proyecto, presentará ahora un dictamen a la Comisión de Educación del Congreso, que aprobará o rechazará dicho dictamen, y donde se votarán también las enmiendas que mantengan vivas los grupos parlamentarios que no han conseguido consenso en la Ponencia.

Después, este dictamen será sometido a votación en el Pleno del Congreso, además de las enmiendas que quedaron sin aprobar anteriormente, para pasar después al Senado y, de ahí al Congreso de nuevo, donde se aprobaría finalmente la ley.

Inmersión y coeducación

El Periódico. Viernes, 06/11/2020

El Congreso ha dado este jueves un paso más en la aprobación de la futura ley de educación con la introducción en ponencia de dos enmiendas significativas sobre el texto inicial. A propuesta de ERC y con los votos favorables de PSOE y Podemos, el texto excluye ahora la posibilidad de que las escuelas que únicamente admiten a niños o a niñas puedan recibir fondos públicos a través del mecanismo del concierto educativo, y elimina la referencia a que el castellano deba ser lengua vehicular de la enseñanza en toda España.

La negativa a mantener los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo no tiene nada que ver con los discursos de cuestionamiento del papel de la escuela concertada. La financiación pública debe servir para permitir el funcionamiento en condiciones de calidad suficiente de todos los centros que brindan el servicio público educativo, universal, gratuito y en igualdad de condiciones de acceso. El sistema de conciertos ha de cubrir, sin distinción de la titularidad, a todos aquellos centros que presten este servicio público, facilitando al mismo tiempo la libertad de elección de modelo educativo y confesional. Y no tiene por qué beneficiar a quienes optan por un modelo segregador. Es cierto que una sentencia del Tribunal Constitucional validó en el 2018 la 'ley Werth', que preveía la financiación de los centros no mixtos. Pero ello no impide que una ley como la que ahora se tramita considere que las opciones educativas que rechazan la coeducación no cumplen con la función social a la que se comprometen al aceptar financiación pública.

Tras las enmiendas aprobadas este jueves, el proyecto de ley también establece que se debe garantizar el dominio suficiente de catalán y castellano pero no tiene por qué establecerse desde una ley orgánica el castellano como lengua vehicular, lo que en la legislación vigente impulsada en su día por el PP conducía, en conflicto con el modelo lingüístico elegido por Catalunya en ejercicio de sus competencias, a imponer porcentajes de forma generalizada de asignaturas en castellano. JxCat ha rechazado este acuerdo por considerar que no blindaba en realidad el modelo de inmersión lingüística. El redactado pactado con ERC blindaba el modelo de escuela en catalán vigente en la actualidad, una aplicación flexible de los postulados de la inmersión lingüística que establece que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza y que catalán y castellano tengan (o así debería ser) la presencia necesaria en cada escuela y territorio concreto para garantizar el pleno dominio de ambas.

EL PAÍS

La nueva ley educativa frena la entrega de suelo municipal para colegios concertados

Los Ayuntamientos podrán ceder suelo para construir centros educativos solo si son públicos. Los partidos que integran el Gobierno ven encarrilada la aprobación de la Lomloe, que encara su recta final

IGNACIO ZAFRA. Valencia 06 NOV 2020

Los Ayuntamientos solo podrán ceder suelo para la construcción de centros educativos si estos son de titularidad pública, según el cambio incorporado este jueves al proyecto de ley de Educación que se tramita en el Congreso. La previsión persigue atajar la entrega de solares para la edificación de centros privados y privados concertados que ha sido frecuente en las últimas décadas en comunidades como Madrid, han señalado fuentes parlamentarias a EL PAÍS.

El cambio había sido planteado mediante una enmienda al proyecto legislativo por Unidas Podemos, y ha recibido el apoyo del PSOE y Más País, la abstención de ERC y PNV, y los votos en contra de PP, Vox y Cs en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación) reunida este jueves por la tarde.

Después de la aprobación de la enmienda, la disposición adicional decimoquinta indica en su punto cuatro: "Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos". En el texto original no figuraba la palabra públicos.

Esta disposición adicional es la que regula en la ley la relación que pueden mantener en materia educativa las comunidades autónomas (que son las competentes en la organización escolar y construcción de infraestructuras educativas) con los "municipios, corporaciones o entidades locales". Y al acotar a los centros públicos la colaboración que pueden prestar en cuanto a suelo, se impide que este pueda destinarse a colegios privados, aunque sean concertados, señala el portavoz de Educación del grupo parlamentario de Unidas Podemos Joan Mena.

El proyecto de ley, aprobado en mayo por el Gobierno, ya había eliminado una referencia al uso por parte de entidades privadas de solares públicos. Se trata de la previsión que figura en el apartado ocho del artículo 116 de la ley aprobada hace siete años por el PP, de momento en vigor, que establece: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Cambio polémico

La tramitación de la Lomloe ha cerrado este jueves la fase de enmiendas, que ha incluido el polémico cambio de la eliminación de la referencia a que el castellano debe ser lengua vehicular en toda España (una medida pensada para facilitar los programas de inmersión lingüística), una apuesta por la escuela pública y un reparto más equilibrados del alumnado vulnerable entre esta red y la concertada, o el fin de los conciertos para las escuelas que segreguen a los estudiantes por sexo.

Clima muy distinto

El proyecto afronta ahora la recta final en un clima muy distinto al de julio, cuando el Congreso rechazó la parte social del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, debido al desacuerdo en las cuestiones educativas. Aquella derrota hizo sonar las alarmas en los partidos que integran el Gobierno por la sombra que proyectaba sobre el proyecto de ley educativa. Las últimas semanas, en las que PSOE y Podemos han logrado aprobar el centenar de enmiendas que presentaron conjuntamente y han pactado un número mayor con distintas fuerzas, han cambiado el ambiente, y ahora ambos grupos creen que la ley está encarrilada.

Aprobar la Lomloe, que es una ley orgánica, exige mayoría absoluta. Es decir, más votos afirmativos que los de la investidura del presidente Pedro Sánchez, que fue por mayoría simple. Socialistas y Podemos confían en que tendrán los apoyos. Piensan, de hecho, que gracias al rechazo que la actual norma (la *ley Wert*) despierta en muchos grupos de la Cámara, el resultado podría acabar siendo algo superior al estrictamente necesario. La base con la que esperan contar, y que sería suficiente para sacar adelante la Lomloe, incluye a Esquerra, Más País y PNV, los partidos con los que han sacado adelante la mayor parte de las enmiendas (aunque en el terreno de los conciertos el apoyo no lo han recibido del PNV, sino de Bildu). El apoyo de Cs, que parecía muy difícil (el del PP y Vox no han llegado a contemplarse durante la tramitación) parece descartado tras los últimos cambios introducidos en el proyecto de ley.

Objetivo: llegar a tiempo al próximo curso

PSOE y Podemos esperan que el texto de la ley, actualizado con las enmiendas, se vote la semana que viene en la comisión de Educación y sea aprobado definitivamente en el pleno del Congreso y en el Senado antes de fin de año. Si el calendario se retrasa, advierten, se corre el riesgo de que no dé tiempo a aprobar el próximo curso parte de los cambios previstos en la ley y en el resto de normas que esperan desarrollar una vez entre en vigor la Lomloe.

LA VANGUARDIA

Qué significa que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza

Se introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo

REDACCIÓN / AGENCIAS, MADRID. 06/11/2020

La reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como que es lengua oficial del Estado y, además, fijará que no se podrá financiar aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo. Así se ha acordado este jueves en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que ha concluido sus reuniones tras cinco sesiones estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales al proyecto de la Lomloe.

Las enmiendas que afectan al castellano y a los centros concertados que separaran por sexo han sido sendas transacciones entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. La enmienda sobre el castellano ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra, y el PNV se ha abstenido, tras una fuerte polémica que ha llevado a que el PP, Cs y Vox hayan anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el uso del castellano corre peligro en las aulas.

Se fija ahora que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza “en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable”. De este modo, la enmienda introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

El proyecto de reforma inicial no recogía en un principio esta opción, al establecer que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”, así como que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”. Pero ahora, con esta enmienda, se elimina del proyecto la referencia a las lenguas cooficiales como “lenguas vehiculares” y al castellano como “lengua oficial del Estado”.

Fue en la actual norma, la Lomce o ley Wert, en la que se estableció que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable”. Pero antes de aprobarse esa ley no se especificaba que el castellano tuviera que ser la vehicular.

Al término de la reunión, el portavoz de Educación de Unidas Podemos, Joan Mena, ha mostrado su satisfacción señalando que se “blinda” el catalán sin que se “relegue” el castellano. Desde el mismo grupo, el portavoz Pablo Echenique ha recordado que “lo de que el español sea “lengua vehicular” se lo inventa el PP en la LOMCE (la Ley Wert) y lo saca adelante con el rodillo de la mayoría absoluta, sin hablar con la comunidad educativa. Ninguna Ley anterior lo tenía, ni las del PSOE, ni las del PP”, Por tanto, la enmienda aprobada “lo que hace es algo tan sencillo como volver a la situación anterior a la infame LOMCE del PP. Nada más. Y, en esa situación, por ejemplo, con gobiernos de Aznar, ¿el español estaba marginado y humillado en Catalunya? Parece ridículo afirmarlo”, sostiene.

Sin embargo, los diputados de Junts per Catalunya Sergi Miquel y Ferrán Bel han criticado algún punto de la enmienda, porque exigen que se sustituya “administraciones educativas” por “comunidades autónomas” para que se clarifique que desde el Gobierno no se puede “imponer”, por ejemplo, el número de horas en castellano en Catalunya.

Bildu ha votado a favor, aunque pide “ir más allá y hablar de lenguas oficiales directamente, no de cooficiales”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Marta Marín, ha dicho que la enmienda es “gravísima” y, si se incluye en la ley, lo pararán desde “otras instituciones”. “Con los derechos fundamentales no se mercede y menos si afectan a menores”, ha enfatizado. Y UPN ha señalado que es “una cesión al chantaje nacionalista absolutamente inadmisibles y una clara vulneración de la Constitución”.

Por otra parte, la enmienda sobre los centros con financiación pública que separan por sexos ha recibido 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

El objetivo, según Unidas Podemos, es “garantizar la igualdad en el sistema educativo español, que había quedado mermada con la aprobación de la Lomce”.

La enmienda establece que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.

Joan Mena ha especificado que separar por sexos a los alumnos es “un delirio fundamentalista” y que quien lo quiera deberá pagar colegios privados. El portavoz de Unidas Podemos ha añadido que en la ponencia también se ha votado a favor de que no se reparta más suelo público para colegios concertados y, asimismo, que solo aumente la oferta de plazas públicas.

La reunión ha coincidido precisamente con una concentración de protesta ante el Congreso de la plataforma Más Plurales, Más Iguales, Más Libres, que defienden la escuela concertada y contra la ley Celaá al considerar que ataca la libertad de los padres para escoger la enseñanza que quieren para sus hijos.

Por otro lado, sobre la asignatura de Religión, no ha salido adelante una enmienda transaccionada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre la “reducción de la religión confesional”. El texto de la ponencia debe pasar después por la Comisión de Educación, el Pleno del Congreso y el Senado.



"Es una barbaridad": La reflexión de un experto en microbiología sobre las auto-tomas PCR

Jorge Barrón, médico jubilado y durante 40 años ha sido el jefe del servicio de microbiología del Hospital de Cruces de Vizcaya mostraba su preocupación por la "seguridad biológica" de esta medida

CADENA SER. Madrid. 06/11/2020

La noticia, la de dejar la responsabilidad en manos de docentes y alumnos, ha provocado una tormenta en Cataluña. Distintos colectivos sanitarios y sindicatos han puesto el grito en el cielo y desde el Govern intentan rebajar la polémica.

El tema también provocó la reacción de enfermeros, médicos, investigadores nos escribieron en las redes sociales del programa y también en el teléfono de los oyentes.

Jorge Barrón, médico jubilado y durante 40 años ha sido el jefe del servicio de microbiología del Hospital de Cruces de Vizcaya, mostraba su preocupación *Hoy por Hoy* por la "seguridad biológica" de esta medida. "Toda

manipulación de pruebas biológica supone un riesgo. Hablamos de muestras potencialmente infecciosas y ahora vamos a someter a estudiantes a manipular muestras", añade.

Por otro lado, Barrón recuerda que las enfermeras toman esas muestras con su protección total y que un simple estornudo al realizar la prueba es un alto riesgo. "Es una barbaridad", asegura aludiendo a la propuesta de la Generalitat.

En este sentido, el que fuera jefe del servicio de microbiología en el Hospital Cruces de Vizcaya, incide en que pueden decir que "es una prueba sencilla", pero no quiere decir que "lo pueda hacer cualquiera".

"La prueba no empieza en el laboratorio, empieza en la toma de la muestra, que hay que hacerla con todo rigor", continúa Barrón, quien explica que la sensibilidad de las coanas nasales disminuye mucho respecto a la del naso faríngeo. Asimismo, alude al peligro de realizar mal la prueba, tanto para posibles daños en las fosas nasales como para resultados de falsos negativos. "Sería un absurdo tomar mal la muestra", zanja

EL MUNDO

Los inspectores educativos denuncian que, al quitar la oposición, el PSOE crea "un coladero para el enchufismo"

Advierten que la enmienda aprobada ayer, promovida junto a ERC y Podemos, permitirá "presiones políticas" a los encargados de vigilar el buen funcionamiento de la escuela

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Viernes, 6 noviembre 2020

Los inspectores de educación están en contra de la enmienda transaccional a la Ley Celaá aprobada este jueves por la que se elimina el examen de oposición a este cuerpo de funcionarios y se sustituye por una simple "valoración" de "su capacidad de liderazgo". El sindicato USIE considera que esta medida "es un coladero para el enchufismo a la carta" y provocará que la escuela esté "condicionada por presiones políticas".

Los 1.600 inspectores educativos que hay en España son funcionarios públicos que se encargan de supervisar que todo se desarrolle correctamente en los colegios y vigilan que se cumplan las leyes.

Son nombrados por las autonomías tras pasar por una fase de oposición en donde hay un examen que valora sus conocimientos sobre legislación, funcionamiento de la administración y pedagogía. Además, hay otra fase de concurso donde se analiza la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos docentes o como directivos, y también se tiene en cuenta positivamente su pertenencia al cuerpo de catedráticos.

La ministra Isabel Celaá tiene, desde hace tiempo, ojeriza a la Inspección. Estos profesionales son independientes y han cuestionado varias de las medidas tomadas por el Gobierno, como dar los títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. De la Alta Inspección del Estado, que depende del Ministerio, surgió el informe sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, que Celaá escondió. Y desde entonces tiene a estos profesionales en el punto de mira.

Este jueves, en la última sesión de la ponencia de la Lomloe, salió adelante una enmienda que sustituye el examen para acceder al cuerpo por una mera evaluación de las competencias de los candidatos. Se mantiene el concurso de méritos, pero se elimina la prueba, que existe desde los años 90 y permite dar objetividad al proceso de selección.

Los inspectores se temen que esta modificación consolide lo que ha ocurrido en los últimos años en regiones como en Cataluña, donde la Generalitat no ha convocado oposiciones con la excusa de la crisis económica y ha designado a los llamados "inspectores accidentales", nombrados a dedo por la Administración y muchas veces "de la cuerda" ideológica del Govern. Estas personas son sometidas a "presiones" para no denunciar los casos de adoctrinamiento que se han producido en escuelas catalanas, especialmente tras el referéndum ilegal del 1-O.

"Queremos que las pruebas sean técnicas, objetivas y transparentes para dar oportunidad a todos los que quieren mejorar su profesión", explica Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de la Educación. "No queremos volver a épocas pasadas, donde el amiguismo o el enchufismo permitían acceder a cargos públicos. Queremos transparencia, una inspección técnica y profesional, autónoma, al servicio de la comunidad educativa y no al servicio sólo de ciertos intereses políticos", expresa.

Marrodán insiste en que "la escuela es de todos y está al servicio de todos, y no debe estar condicionada por presiones políticas".

En un comunicado, USIE rechaza rotundamente la enmienda y defiende que el acceso a la función pública docente debe efectuarse con un sistema de pruebas escritas y orales, con criterios de evaluación y calificación públicos y previos objetivos "que se desarrollen con transparencia y publicidad". Así los aspirantes que estén conformes con los resultados podrán recurrir, algo que resulta imposible si el examen se sustituye por una entrevista personal, como ha acordado la Comisión de Educación del Congreso.

"Las valoraciones subjetivas, como propone el texto de la enmienda, favorecen el amiguismo y el nepotismo, lacras que deben desterrarse de la función pública. La enmienda posibilita procesos de acceso basados en la subjetividad y, por tanto, en la arbitrariedad", denuncian.

E interpretan que la enmienda "evidencia el intento de impedir la existencia de un cuerpo docente profesional y técnico, autónomo y con independencia de criterio". "No queremos la subordinación a intereses políticos que trascienden lo educativo", recalcan.



PSOE vota junto a Podemos y ERC en el Congreso que el castellano deje de ser vehicular en la educación

La concertada se echa a la calle para protestar por una ley que la asfixia

Rocío Ruiz. 06-11-2020

Catalanes y vascos han logrado una de sus demandas históricas en el mundo educativo: conseguir el beneplácito del Estado para que sus lenguas sean las que se utilicen en la enseñanza de forma prioritaria. Lo han conseguido después de que la Ponencia de la Ley de Educación que debate el proyecto de la «Ley Celaá» aprobara hoy que el castellano deje de ser vehicular en la educación en aquellas comunidades con lengua propia por 26 votos a favor, 16 en contra (PP, CS, Vox y UPN) y la abstención del PNV. En la práctica, supone la confirmación legal de lo que ya estaba ocurriendo en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo que marca que el 25% de la educación se imparta en castellano (dos asignaturas, una de ellas troncales). Eso ha llevado a muchos padres a tener que acudir a los tribunales para que se cumpla ese mínimo legal.

Con el cambio aprobado, el castellano o la lengua cooficial podrán usarse en función de lo que digan los estatutos de autonomía. Y en Cataluña, la ley de educación autonómica dice que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán, no el castellano.

El PSOE cree que el cambio legal que ha pactado con Podemos y ERC «garantizará el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano», dice su portavoz en Educación, Luz Martínez Seijo. Y también hace hincapié en que las administraciones educativas «aplicarán instrumentos de modo que se garanticen que los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y las cooficiales en el grado requerido». La enmienda aprobada prevé que los centros impulsen medidas para compensar las carencias que pueden existir en cualquiera de las lenguas.

Sin embargo, se excluye la parte contemplada en el proyecto inicial que llevó Celaá a la Cámara y que exponía que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la conformidad de la Constitución y los Estatutos de Autonomía». Es justo éste punto de la enmienda el que ha levantado una enorme polémica hasta el punto de que tanto PP como Cs y Vox han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional por eliminar al castellano como lengua vehicular en contra de lo que marca la Constitución española y de cinco sentencias que lo avalan. Algunos han querido ver incluso en esta cesión del PSOE una «trampa» de los socialistas para que los nacionalistas den su apoyo al Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

Protesta de la concertada

Mientras, la concertada se echaba ayer a la calle para protestar a las puertas del Congreso, y luego en las redes sociales, contra una ley que consideran que trata de asfixiarla y condenarla a la desaparición. El PP, ayer se unió a la protesta. «Es una ley que supone ataques innumerables a la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias», manifestó Jesús Muñoz de Priego, portavoz de «Más Plurales», la plataforma que une a toda la concertada para hacer un frente común contra el «ataque» que consideran que supone la «ley Celaá». «En la concentración hemos expresado nuestro rechazo a una ley que se está tramitando de una manera exprés sin tener en cuenta a la comunidad educativa, necesitamos una ley de consenso, pero lo que está haciendo es dividir y no escuchar al sector», aseguró Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la confederación de padres Cofapa.

Y es que la Lomloe, a su paso por el Congreso, ha radicalizado el proyecto inicial que remitió el Gobierno en su afán por implantar un modelo único de educación: la pública, y en hacer cesiones a las autonomías. Estos son las principales cambios:

Educación infantil

Se incrementa la oferta de plazas públicas en la etapa de cero a tres para generalizar la escolarización de estos niños de manera que luego puedan continuar en la enseñanza pública en niveles superiores. Se prevé un plazo de ocho años para llegar a la generalización esa oferta de las plazas publicas. La concertada entiende el cambio como una forma de cortar a las familias con menos recursos su acceso a la educación concertada.

Plazas públicas

Una de las enmiendas introducidas (109), sobre programación de puestos escolares, establece que la Administración decide qué aulas se abren o se cierra en la pública y la concertada. Se señala que, para garantizar el derecho de todos los alumnos a la educación, «se ofertará un número suficiente de plazas

públicas», especialmente en las zonas de nueva creación, con un progresivo incremento. «Lo que se está haciendo es dejar sentado un nuevo derecho, el de la educación pública, de tal manera que si los ocho millones de niños españoles quisieran ir a un colegio público tendrían que tener una plaza en lugar de en un centro concertado», interpreta Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.

Admisión de alumnos

El proceso ahora va a quedar en manos de lo que se llamaba «comisión de escolarización» que va a distribuir al alumnado según considere para evitar guetos. «Esto es hacer ingeniería social para que todos los colegios tengan el mismo número de inmigrantes...», dice Centeno.

Colegios diferenciados

Una enmienda aprobada ayer impulsada por Podemos, se retira el concierto a los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, un modelo con el que El Gobierno no se identifica, aunque el TC dijo en 2018 que no causa discriminación.

Cesiones a las autonomías

Las autonomías y el centro educativo fijarán el 50% del currículo y reduce un 5% los contenidos que marca el Gobierno.

elPeriódico de Catalunya

Catalunya rectifica y pondrá a sanitarios en las escuelas para supervisar las automuestras de PCR

Sindicatos y directores de centros se habían quejado de que el profesorado se encargara inicialmente de esta tarea

ACN. VIERNES, 06/11/2020

El Departamento de Educació ha confirmado finalmente que habrá personal sanitario en el aula para supervisar las automuestras de alumnos de Catalunya a partir de ESO cuando haya un positivo en la clase.

Sindicatos y directores de centro se habían quejado de que el profesorado se encargara inicialmente de esta tarea. Finalmente se ha decidido poner a personal especializado de forma permanente atendiendo a las quejas de los profesores.

Hasta ahora se desplazaba a los centros una unidad móvil con varios profesionales, y ahora solo irá un sanitario.

En las últimas horas han sido numerosas las quejas que han circulado por las redes.

En declaraciones a los medios tras una visita al Institut La Garrotxa de Olot (Girona), el 'conseller' Josep Bargalló ha afirmado este viernes que ese personal sanitario "vigilará y velará para que la prueba se haga correctamente".

El titular de Educación ha aseverado: "Siempre hemos valorado que tiene que haber personal sanitario" en las tomas de automuestras, ya que serán los encargados de trasladarlas al centro sanitario para su análisis.

Bargalló ha admitido que "quizá hubo precipitación a la hora de explicar" la medida y ha puntualizado que los profesores "no tocarán las pruebas ni participarán físicamente" de las mismas, más allá de tomarse las muestras a sí mismos, como miembros del grupo burbuja.

Bargalló no ha concretado qué perfil concreto, dentro del ámbito sanitario, será el encargado de velar por la correcta realización de la toma de muestras.

europapress.es

Tiana defiende unos presupuestos "creíbles" para transformar el sistema educativo ante críticas de PP, VOX y CS

Cs pide la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y acusa al Gobierno de aniquilar la educación en España

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha defendido unos presupuestos "ambiciosos", "creíbles", "razonables" y "coherentes", que permitirán con 3.623 millones de euros transformar el modelo educativo español con más becas, el fomento de la educación de 0 a 3 años y la digitalización, frente a las críticas de PP y Vox así como de Cs, que considera que la ministra Isabel Celaá debe dimitir.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado para la secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y FP, ha celebrado el incremento histórico de estas partidas que espera empezar a ejecutar las cuantías "al día siguiente" de su aprobación.

Entre alusiones a poemas de Miguel Hernández, ha manifestado tener una sensación de "rayo que no cesa" por las críticas de la oposición que ha dado por "erróneas", "fuera de lugar" y "no ciertas".

El secretario de Estado ha precisado que la Educación contará con un presupuesto de 2.407 millones de euros para contribuir a la igualdad de oportunidades, la digitalización y la formación profesional, con becas, ampliación de la cobertura del ciclo infantil de cero a tres años y a la prevención del abandono escolar. Además, se invertirán en 1.018 millones en digitalización y recursos tecnológicos.

En total, son "prácticamente" 2.300 millones de euros de los que 2.050 millones se destinarán a becas y ayudas al estudio. Asimismo, la secretaría de Estado contará con otros 1.323 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tiana ha desglosado las distintas partidas presupuestarias planteadas por el Gobierno para 2021 y, en líneas generales, "lo más destacado" es el incremento de los créditos para becas de servicio, por 514 millones para reformar el sistema de becas, que alcanza un montante de 2.090 millones, "el mayor de la historia", con un incremento del 35 por ciento respecto a 2020.

En cuanto al reto de la digitalización, ha expresado la voluntad del departamento que dirige Isabel Celaá de reforzar la capacidad del sistema para hacer frente a las necesidades de la digitalización y el aprendizaje a distancia. Así, ha dicho que entre otros proyectos, se destinarán 1,2 millones de euros para mantener el programa 'Aprendemos en Casa' del canal Clan de RTVE, que se puso en marcha "de urgencia" durante el confinamiento en el mes de marzo para escolares de 6 a 12 años y que tras analizarlo con el ente público se ha valorado que valía la pena mantener este programa.

Respecto a la creación de plazas de 0 a 3 años, Tiana ha explicado que el monto ascenderá a 200,96 millones de euros para crear 21.800 plazas de titularidad pública de primer ciclo, especialmente para 1 y 2 años, a través de "adaptación de centros de educación infantil ya existentes".

Respecto a la prevención del abandono escolar, el secretario de Estado ha anunciado 30 millones de euros para crear 618 unidades de acompañamiento al alumnado, con atención personal y familiar en zonas y distritos escolares.

De las cuantías del fondo de ayudas europeo, ha precisado que la secretaría de Estado podrá acceder a 1.010 millones de euros y que el Ministerio aspira a lograr unos 500.000 equipos digitales individuales para préstamos a los alumnos. También emplearán 150 millones adicionales con los que se podrán adquirir 200.000 equipos más y otros 827 millones para el "desarrollo pleno" de la competencia digital de los centros.

Por último, Tiana ha pedido a la oposición que no se dedique a poner "palos en las ruedas" a España en Europa y que "remen en favor del país". "No digo que seamos angelicales, pero sumemos esfuerzos con las discrepancias que haya", ha concluido.

DIMISIÓN DE CELAÁ Y RUPTURA CONSTITUCIONAL

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha advertido al Gobierno de que depende de un presupuesto que implica que España respeta el estado de derecho, los valores democráticos, que fomenta la transparencia y que Europa lo va a medir, de modo que "a lo mejor los fondos no llegan".

En ese contexto, ha acusado al Gobierno de llegar tarde y mal a la pandemia con la tramitación de una ley educativa de "preceptos intolerables" y una tramitación "absolutamente vergonzosa". "Ustedes están demoliendo el sistema educativo a golpes: han atentado contra los inspectores, contra las familias, contra los profesores, pero lo peor es que están atentando contra los niños en cuestiones muy importantes como la equidad", ha acusado la diputada que también ha acusado al Gobierno de "trampear" las cifras de fracaso y abandono escolar. Por ello, ha anunciado que trasladará a sus compañeros en el Parlamento Europeo varias preguntas para saber si la Comisión Europea está de acuerdo con acabar con el abandono escolar eliminando los suspensos.

Del mismo modo, ha anunciado que pedirá a la comunidad educativa que acuda a la comisión de peticiones de la UE porque el Gobierno "no ha hablado" con la comunidad educativa, "lo mínimo en una reforma educativa". Por ello, considera que la ministra Isabel Celaá "debe dimitir".

Desde Unidas Podemos, el diputado Joan Mena ha celebrado que estos presupuestos dicen "adiós" a la austeridad del PP y abren una "nueva etapa" con unos presupuestos expansivos que ponen un "horizonte de futuro" en España, con cambios estructurales del sistema educativo después de una Ley Wert "retrógrada" y "mercantilista".

Mientras, la diputada de VOX Georgina Trías, ha acusado al Ejecutivo de asestar un golpe de muerte a 500 millones de personas que han nacido hablando español, que lo usan como lengua vehicular y que lo han usado, amado y dejado escritas obras de arte en ese idioma --al retirar la prioridad del uso del español como lengua vehicular en la enseñanza en España en la propuesta de ley de educación debatida este jueves--. No obstante, le ha instado a "no cantar victoria" porque no será fácil acabar con la lengua que "conforma el alma de España".

Así, opina que hacer leyes y derogarlas puede ser "relativamente fácil, pero aniquilar una lengua de tan sólido raigambre, vinculado a lo más íntimo de las personas y a su capacidad de expresión y comunicación". "No va a ser tan fácil y, estos dardos contribuyen a despertar las almas que pudieran estar dormidas y reaccionen y el tiempo nos lo dirá", ha vaticinado.

En cuanto a los presupuestos, opina que están "faltos de credibilidad" para un Ministerio "elefantiásico", con cada vez menos competencias pero que aumenta el gasto y que rezuman "falta de realismo".

Por su parte, la diputada del PP, Sandra Moneo, ha sido también muy crítica con el Ejecutivo y sus presupuestos basados en un "optimismo económico inexplicable". Además, opina que el proyecto educativo del Gobierno no es modernizador, ni transformador ni ambicioso pero que además contará con un presupuesto que "no va a poder ejecutar" porque ha convertido al Ministerio de Educación "en un museo" tras renunciar "total y absolutamente" a las competencias de educación que le otorgan los artículos 27 y 149 de la Constitución.

Sobre la tramitación de la LOMLOE ha dicho que incorpora la "ruptura del pacto constitucional y la ruptura total y absoluta del sistema educativo español". "Se lo digo con absoluta amargura. Siempre ha habido una línea que ningún partido ha cruzado y en este momento el pacto constitucional está roto. Lo ha roto su partido", ha lamentado.

Finalmente, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo ha definido como "extraordinario" el presupuesto pero "lamentablemente" la "oposición de la derecha lo único que es capaz de aportar a la educación española es una sarta de mentiras, acusaciones, toxicidad y de rabia contenida sobre una buena política educativa".

LA VANGUARDIA

Los sanitarios que guiarán los autotests de los alumnos saldrán de las oenegés

Educació aconseja mantener las ventanas abiertas de forma permanente

CARINA FARRERAS. BARCELONA 07/11/2020

Los docentes contarán con "todo el apoyo" del sistema sanitario para implementar en el aula el procedimiento de las automuestras de los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional, según se comprometió el secretario general de Salud, Marc Ramentol. "Y durante el tiempo que sea necesario", apostilló.

Para ello se contará con profesionales del ámbito de la salud, incluidos los voluntarios técnicos procedentes de oenegés como los que efectúan los cribados en las escuelas. Se trata de Open Arms y la Cruz Roja, que firmaron un convenio de colaboración para asumir las pruebas masivas en los centros educativos, que seguirán realizándolas en las etapas de infantil y primaria. Ahora, ayudarán a los adolescentes y docentes a obtener la muestra para el PCR, en caso de que se detecte un positivo en el grupo.

De este modo, el Departament de Salut quiere zanjar la polémica suscitada en las escuelas esta semana sobre la nueva responsabilidad de los docentes anunciada por Salut y Educació sin que los directores de centro y los profesores tuvieran conocimiento previo. Sindicatos y juntas de directores presionaron a modificar el protocolo desde que se conoció la noticia.

Ramentol especificó ayer que siempre se pensó en un acompañamiento de un sanitario. Pero ni la consellera de Salut, Alba Vergés, el día anterior, ni la secretaria de Educació, Núria Cuenca, el martes, mencionaron la presencia de profesionales en el aula al explicar en qué consistía la nueva tarea.

El procedimiento, que "ya se ha validado" en institutos, no comporta riesgos biológicos, según Ramentol, que pidió a los docentes "una pequeña supervisión". Así, subrayó que las escuelas siempre han sido una prioridad del Govern y que se han volcado esfuerzos en abrir las escuelas y dar tranquilidad a las familias. La ola actual – continuó– exige concentrar todos los recursos existentes en las tareas asistenciales pero, para no dejar a los colegios, se pensó en la colaboración del profesorado. "Todos estamos haciendo labores que hace un año eran impensables", destacó. La asociación de directores de centros públicos, Axia, exigió en un comunicado la retirada de esta medida. "Reiteramos el colapso que padecemos" por la gestión de los positivos y las cuarentenas. "Todo es lo mismo: la falta de recursos del sistema sanitario y educativo".

Por otra parte, Educació emitió ayer unas orientaciones sobre la ventilación de escuelas en las que pide que las ventanas estén abiertas "permanentemente y con la máxima apertura". Asimismo aconseja realizar educación física al aire libre. Si no se puede dejar puertas y ventanas abiertas, se recomienda ventilar las aulas entre 10 y 15 minutos cada hora con una apertura mínima de 20 centímetros. Para que sea más efectiva, se añade la sugerencia de que se produzcan "flujos de aire cruzados", abriendo también las puertas. Comedores, gimnasios y aseos son espacios de "especial atención" y deben estar ventilados todo el tiempo.

Se insta a los centros a "buscar el equilibrio entre la ventilación y el confort térmico y acústico, teniendo en cuenta que la velocidad de ventilación de las aulas es mucho más alta que la velocidad de pérdida de carga

térmica". En el caso de las aulas con bombas de calor en los módulos prefabricados, debe ventilarse con puertas y ventanas abiertas y los aparatos de ventilación deben estar orientados al techo", según el documento. Los centros que no puedan ventilar, por tener espacios interiores o ventanas bloqueadas, deben dirigirse a Educació.



Joan Mena: "Los castellanoparlantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística"

El portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso defiende el blindaje en la nueva Ley de Educación de la inmersión lingüística en Catalunya, y cree que debería ofertarse la enseñanza de lenguas cooficiales fuera de sus territorios; y reconoce que en este proyecto se han quedado fuera asuntos "importantes" como rebajar la asignatura de Religión o bajar las ratios

Daniel Sánchez Caballero. 7 de noviembre de 2020

Paso a paso, la próxima ley de Educación (LOMLOE) va tomando forma con las enmiendas que el Congreso va introduciendo estos días a un texto redactado originalmente por el PSOE y que ahora se adapta a algunas exigencias de otros partidos, cuyos votos necesita el Gobierno para sacar adelante la ley. Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem (UP-ECP), se felicita en esta entrevista de los cambios introducidos por su partido, como la prohibición de ceder suelo público para centros concertados, el veto a los conciertos a colegios que separen a su alumnado por sexo o el (supuesto) blindaje del sistema de inmersión lingüística en Catalunya, del que dice que "los castellanoparlantes, como es mi caso, somos los principales interesados". "Todos estos temas de los que hablamos hoy ha sido gracias a las enmiendas de UP-ECP porque no estaban en la propuesta inicial del PSOE", afirma.

También admite Mena que se les han quedado cosas en el tintero: él cita la Religión y la fiscalización de los pagos que hacen las familias a la escuela concertada como ejemplos. También concede que la bajada de ratios era necesaria: "No renunciamos a ella", explica, aunque no han sido capaces de introducirla en la ley. Sí cree Mena que es el momento de restar peso a la concertada en el sistema ("es una anomalía que tenemos que corregir que mientras en Europa hay un 90% de escuela pública en España esté en el 67%") y lamenta que la derecha "utilice el comodín del Tribunal Constitucional cada vez que se queda en minoría".

Empezamos por lo más reciente. ¿Por qué era necesario eliminar la referencia al español como lengua vehicular si a priori no va a cambiar nada en las clases?

Creo que era necesario para proteger el modelo de inmersión lingüística y para evitar que el PP y Ciudadanos continúen politizando la lengua y el sistema educativo. Le hemos dado seguridad jurídica al modelo de inmersión en Catalunya, la misma que tenía antes de la LOMCE y por tanto de la incorporación por parte del ministro José Ignacio Wert de la definición del castellano como lengua vehicular, y lo blindamos con un compromiso constitucional: que los alumnos que salgan del sistema educativo tienen que conocer el castellano, la lengua oficial en todo el Estado, y las lenguas de los territorios. Evitamos así que se politice el modelo de inmersión en Catalunya y le damos seguridad jurídica a lo que se lleva aplicando en Catalunya desde los 80 con buenos frutos. Creo que hoy las personas castellanoparlantes, como es mi caso, somos los principales interesados en un modelo de inmersión que nos garantiza que al salir del sistema educativo somos bilingües y tenemos las mismas oportunidades que cualquier otra persona en Catalunya.

Pero sabe que media España, y no necesariamente solo los votantes de la derecha, cree que esto es un disparate, que relega el castellano.

Hay mucho ruido. Cuando Wert impuso aquella disposición adicional para que se le pagase un modelo de castellano como lengua vehicular en Catalunya [una norma que aprobó el Gobierno del PP por la que pagaría la matrícula en centros privados a quien quisiera estudiar en castellano en Catalunya], si no recuerdo mal solo lo pidieron unas 300 familias. La realidad es que el modelo de inmersión en Catalunya tiene un consenso político mayoritario, un consenso pedagógico muy importante y, lo más fundamental, un consenso social. Las encuestas dicen que en torno al 80% de los catalanes defiende el modelo porque no va en detrimento de ninguna lengua, sino en beneficio de garantizar una sociedad bilingüe, que es lo que tenemos.

PP y C's han anunciado que van a llevar la norma al Tribunal Constitucional. ¿Esperan que la derecha dé la batalla en los tribunales?

Ya sabíamos que las derechas lo iban a llevar. No están de acuerdo en el modelo de inmersión ni en que se eliminen los conciertos a las escuelas sexistas, ni en aumentar las plazas públicas como hemos aprobado, ni en incorporar la memoria democrática al sistema educativo... Creo que deberíamos intentar hacer entender a las derechas que no vale que cada vez que te quedas en minoría quieran utilizar el comodín del TC. Lo que hacen es deslegitimar un tribunal que hoy ya está profundamente politizado. No tiene sentido que lo lleven, porque creo que la propuesta está blindada constitucionalmente.

Respecto a la inmersión lingüística, ERC, titular de Educació en Catalunya, decía que había que relajar la inmersión un poco si era necesario, flexibilizarla introduciendo más castellano donde pudiera hacer falta. ¿Hay que superar el modelo de inmersión, se ha quedado obsoleto?

La ley de educación catalana ya permite flexibilizar la inmersión. Yo he dado clase de lengua castellana en algunos centros y hay sitios donde el modelo se flexibiliza. La ley manda que cada centro tenga su plan lingüístico; evidentemente no es lo mismo un centro en un entorno con una mayoría lingüística o con otra. Es bueno que los sistemas educativos se adapten al territorio y sean flexibles, pero eso no es contradictorio con blindar el modelo, que ya permite esta flexibilización y que ya se da en algunos centros.

¿Entonces no hace falta cambiarlo?

Lo que necesitamos, y es lo que exigimos a Esquerra, son más recursos. Si no se flexibiliza más es porque se han despedido profesionales en los últimos años, lo han hecho tanto ERC como JxCat. Lo que tiene que hacer el gobierno de ERC y JxCat es apostar por la escuela pública, financiarla, y eso daría más recursos para flexibilizar el modelo, que estoy de acuerdo en que es una necesidad como lo es blindar la educación pública en Catalunya.

¿Cree que habría que explorar la posibilidad de dar clases de lenguas cooficiales en el resto del Estado?

De hecho, alguna vez hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso. Creemos que enriquecería el modelo plurinacional y plurilingüístico que tenemos en el estado. No es de sentido común que en algunos centros se pueda estudiar inglés, francés, portugués u otras lenguas europeas y en cambio no pueda escoger estudiar catalán si soy andaluz o gallego en el País Valencià. Tendríamos que intentar dar esa posibilidad en el sistema, a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa de cuántos ciudadanos de otras comunidades están interesados en las lenguas que son oficiales también en algunas partes del Estado y seguramente nos cohesionaríamos todavía más desde el respeto a la plurinacionalidad y el plurilingüismo del Estado. Y con la lengua, la enseñanza de la cultura tiene que ir asociada.

Han pactado también eliminar los conciertos a los centros que segregan por sexo. Pero el Tribunal Constitucional avaló la medida cuando el PSOE la denunció en la LOMCE. ¿Temen que lo anulen?

Creo que no. La doctrina del TC estaba hecha después de la aprobación de la LOMCE, que permite que se subvencione con dinero público a centros que segreguen por sexo. Pero creo que en un sistema como el nuestro el principio de la coeducación debe estar blindado constitucionalmente. Hace no mucho hubo un debate en España sobre si se debería modificar la Constitución para darle un lenguaje inclusivo, del que carece. No puede ser que estemos casi consensuando que tiene que haber cambios constitucionales para garantizar un lenguaje inclusivo en la Constitución y en las escuelas estemos segregando alumnos en función del sexo. Creo que eso lo defienden muy pocas personas, no solo en España sino en los países democráticos del entorno.

Han aprobado crear más oferta pública de Educación Infantil. ¿Hasta dónde quieren llegar, se ponen un objetivo?

No solo de Infantil, de todo el sistema educativo. De Infantil hemos aprobado también una disposición adicional para un plan a cuatro años, porque es el principal déficit de plazas públicas en el sistema. Pero hemos defendido, en una enmienda propia de UP-ECP a la que hemos conseguido incorporar al PSOE, un aumento de la oferta de plazas públicas de todo el sistema. Partimos de una realidad que no nos homologa con el resto de Europa: somos uno de los países europeos con menos alumnos escolarizados en la red pública, porque la concertada es muy fuerte y tenemos que homologarnos a los principales países de la UE, que están apostando claramente por la Educación pública.

¿Pero le pone cifras a este aumento de la oferta pública?

La media de escuela pública varía mucho en España en función de las comunidades. Aquellas gobernadas históricamente por la derecha están en torno a 60% de escuela pública y 40% de concertada. La media de España ronda el 80%, pero la europea es 90% [es un 67,1% en la pública, 25,5% en la concertada y 7,4% en la privada, según los datos oficiales]. Esto es una anomalía que los poderes públicos tienen la obligación de modificar.

Irà en detrimento de la concertada, entonces.

La ley introduce una cláusula que dice que la escuela pública es la columna vertebral del sistema educativo. Todos sabemos por qué se introdujo la escuela concertada: en los 80, cuando se universalizó el derecho a la educación, el estado no tenía infraestructura para garantizar plazas en la escuela pública. Pero se hizo desde un punto de vista transitorio y subsidiario de la escuela pública, pero eso se ha pervertido en los últimos años con los gobiernos de derechas. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a la Educación, y bajo nuestro punto de vista ese derecho se garantiza a través de la escuela pública.

Estas plazas públicas de Infantil, ¿serán también de gestión pública? Porque hay muchos modelos de gestión de escuelas infantiles.

Nosotros planteamos una escuela pública, gratuita y accesible. Entendemos que ahí está incorporada también la gestión pública. Es verdad que tenemos una realidad muy dispar en cuanto a la escuela infantil. Muchas escuelas dependen de ayuntamientos, están externalizadas algunas, otras pertenecen a gobiernos autonómicos... tenemos la obligación de ordenar el modelo. Se está vulnerando el derecho a la educación en Infantil porque al final solo pueden acceder a la etapa del 0-3 las familias con condiciones económicas que se lo permiten. Es una obligación de los poderes públicos revertir esta situación. Es un compromiso del Gobierno de coalición. En el último proyecto de Presupuestos, en trámite en el Congreso, hay una enmienda de 200 millones de euros para el 0-3 porque todos los informes pedagógicos demuestran que los alumnos que pasan al menos un año en el 0-3 luego tienen más rendimiento.

Cuando ustedes llegaron al Gobierno se encontraron con esta ley ya redactada, que han enmendado en parte. ¿Cuánto de la ley reconoce UP-ECP como propio?

Mucho de lo enmendado. Todo lo que hablamos hoy han sido gracias a las enmiendas de UP-ECP, porque no estaban en la propuesta inicial del PSOE. No estaba el tema de la escuela 0-3, ni prohibir la escuela que segrega por sexo, ni el blindaje de la escuela pública, ni prohibir la cesión de suelo público, ni estaba la memoria democrática, ni garantizar los derechos afectivos sexuales de los alumnos... Creo que la huella que hemos dejado UP-ECP es importante. También reconozco que no hemos conseguido incorporar elementos importantes para nosotros, como sacar la Religión fuera del curriculum y del horario escolar o fiscalizar más los conciertos porque pensamos que no hay la suficiente transparencia en el modelo de escuela concertada en el conjunto de las comunidades autónomas.

¿Fiscalizar cómo?

Tenemos informes, el último es de hace unos años de la OCU, que dice que 9 de cada 10 familias no saben que los pagos son voluntarios, no obligatorios. Pensamos que una de las obligaciones de las administraciones es informar a las familias de sus derechos y de que no tienen obligación de pagar un importe por llevar a sus hijos a la concertada que muchas veces queda disfrazado en conceptos extraños, por decirlo de alguna manera. Creo que se tendría que hacer una labor de fiscalización por parte de las administraciones educativas, y eso no hemos conseguido incorporarlo en la ley.

¿Por qué no se han bajado los ratios en la LOMLOE? Es una de las principales reivindicaciones de los profesores, bien lo sabe usted como docente.

También de UP-ECP. Se ha pretendido hacer de forma indirecta. El Estado destinó 2.000 millones de euros de los fondos COVID para Educación y nosotros pensamos que se tenía que haber aprovechado para hacer de eso una partida finalista y decir a las comunidades autónomas que eso tendría que ir a la rebaja de los ratios. La rebaja es una necesidad del sistema educativo, no solo por seguridad por la COVID, también por criterios pedagógicos. De todas maneras, no renunciamos a seguir presionando para que se pueda hacer. Es verdad que se podía hacer a través de la ley, pero también es cierto que se puede hacer a través de un decreto que despliegue la ley. Seguiremos intentando convencer al PSOE para que sea una realidad en las aulas.

EL PAIS

Inmersión, mentiras y autosabotaje

La nueva ley de educación no designa al castellano como lengua vehicular ni menciona la oficialidad de esta lengua en todo el territorio nacional

DANIEL GASCÓN. 07 NOV 2020

La nueva ley de educación no designa al castellano como lengua vehicular ni menciona la oficialidad de esta lengua en todo el territorio nacional. Podría señalarse que esta omisión —que pretende contentar a los socios independentistas del Gobierno— es un aspecto simbólico. Pero lo mismo podría decirse de otras cuestiones a las que el Ejecutivo da mucha importancia.

El cambio, que parece naturalizar una práctica que ha merecido el reproche de la justicia, incide en una característica curiosa: fuerzas periféricas con un espíritu nacionalizador y un Estado pudoroso. Unos niegan la diversidad interna; otros parecen confundir la diversidad con la disolución.

El problema no es que el castellano esté en peligro: no lo está el catalán, tampoco lo va a estar el castellano, un idioma global que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Otra cosa son los derechos de los castellanoparlantes. El objetivo de los gestores nacionalistas, escribe Mercè Vilarrubias en *Por una ley de lenguas*, es “lograr que, a través del relato de la lengua propia, la realidad sociolingüística objetiva del bilingüismo quede discursivamente anulada”.

Se habla de “blindar la inmersión lingüística”: la mezcla de metáforas suele indicar que hay mercancía averiada. La inmersión lingüística es un eufemismo para una política que margina el castellano. Para unos es un pilar de un proyecto de construcción nacional: la educación y la lengua. Otros la defendían en nombre de la igualdad de oportunidades: la élite habla una lengua, moverte siempre en ella facilita el ascenso social.

Si normativamente ese segundo argumento es muy dudoso, también lo es en cuanto a los resultados. El estudio *Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña*, de los economistas Jorge Calero y Álvaro Cho, señalaba que la inmersión perjudicaba a los alumnos varones de

hogares castellanoparlantes, sobre todo en ciencias y en comprensión lectora y en particular en los colegios públicos. En una segunda lengua se estudia peor, y eso afecta más a quienes tienen menos recursos para compensar. “Los resultados”, escribían, “apuntan claramente a la existencia de un problema de equidad, que genera *perdedores* de la política de inmersión lingüística en Cataluña”. Parte de la izquierda se engaña o nos engaña y defiende políticas que perjudican a los más desfavorecidos. El Estado se sabotea y no cumple su función: proteger los derechos de sus ciudadanos.

naiz:

EDUCACIÓN: LA OTRA TRINCHERA INFINITA

Nos conviene tener un frente de sanitarios fuerte y descansado y un conjunto de profesores con energía e ilusión. Si no entendemos que junto con las medidas de índole política, la sanidad y la educación son los ejes prioritarios para no colapsar como sociedad, para no entrar en una crisis económica brutal es que tal vez nos lo merezcamos.

2020/11/07

Los centros educativos siempre han sido, son, centros de «cuidados». En ellos, los educadores, además de impartir nuestras materias, lidiamos con desamores, conflictos familiares, angustias existenciales, trastornos psicológicos, adicciones tempranas y un largo etcétera. En las últimas décadas esta «responsabilidad de cuidado emocional» ha ido aumentando al mismo ritmo que la sociedad moderna ha ido trasladando dicha responsabilidad del ámbito familiar al educativo. Lo cierto es que en tiempo de pandemia esta demanda familiar y social de, además de impartidores de conocimientos, ser cuidadores se ha visto quintuplicada. Demanda social para la cual la ayuda gubernamental llegó tarde y pobre: apenas mil profesores más para toda la comunidad, una mísera migaja. Los profesionales lo sabemos: la verdadera ayuda, la verdadera calidad tiene que ver con los ratios por aula, no con la sobrecarga al profesorado. Solo unas ratios bajas pueden garantizar una atención educativa de calidad en lo académico y en lo personal. Y eso se podía haber abordado desde la administración del Gobierno ya en julio, mes en el que sí estuvieron abiertos los centros (y también en agosto, pues los equipos directivos trabajaron) y en el que muchas y muchos profesionales preparaban el siguiente curso en la orfandad de la nada gubernamental.

La tendencia de este siglo XXI, en términos globales, sobre lo que es una educación de calidad es ir hacia una «educación cada vez más personalizada», alejándonos del modelo industrial del XIX, ir hacia un sistema en el que niñas y niños no sean vistos como pollos industriales, sino que sean instruidos, valorados y cultivados desde sus especificidades (y las de sus familias) y con un seguimiento tutorial personalizado. Pero todo eso es imposible con aulas de treinta alumnos, como las que tenemos este curso. Añadamos a esto la sobrecarga que ha traído la pandemia de covid-19: medidas de seguridad que vuelven a colocar en fila de a uno a todo el alumnado y que impiden el contacto social entre ellos; la imposibilidad de usar metodologías más dinámicas y de cooperación; la obligación de abordar los contenidos que se quedaron perdidos el curso pasado con el consiguiente aumento de registros y papeleo; los confinamientos selectivos por aula que hay que atender fuera de horario; la gestión de la angustia propia, la de los adolescentes y la de sus familias, etc. El resultado es un profesorado exhausto de tareas, angustiado por no poder llegar a nada, frágil porque se siente indefenso, desprotegido y además con muy baja autoestima social, pues nuestra sociedad sigue siendo en eso una cateta que solo ve en el profesorado alguien que «tiene muchas vacaciones». Así pues, con este panorama esa tarea vital de «cuidar» a nuestros adolescentes no se puede hacer si no se cuida al cuidador. Y para eso hay que repensar nuestra función social.

¿Cuál debería ser la labor prioritaria del sistema educativo en tiempo de pandemia? En primer lugar, contribuir en la contención de la propagación. El sistema educativo hoy día contiene siete horas diarias a uno de los segmentos de la población de mayor transmisión. Cada adolescente «contenido» siete horas al día es un éxito en las trincheras, tal y como avalan las estadísticas de mínimos contagios intraescolares. Esta contención permite además que el resto del sistema productivo siga funcionando como bien se demostró en marzo. No darse cuenta de esta labor es estar ciego o ser un necio. Si los escolares se quedan en casa y las abuelas y abuelos deciden priorizar su salud en lugar de cuidarlos, una gran mayoría de ciudadanos no puede acudir a su puesto de trabajo, la producción se para, y en consecuencia el mundo, tal y como lo hemos construido, se resquebraja. Significa eso que las profesoras y profesores estamos en primerísima línea de fuego, pero absolutamente ninguneados e invisibilizados.

Otra prioridad del sistema educativo, sea presencial o telemático, ahora mismo debería ser aportar bienestar mental a todos nuestros jóvenes, y proveerlos de mecanismos emocionales y formativos para poder atravesar esta tempestad lo mejor que se pueda. Educar, hoy más que nunca, debería ser cultivar jóvenes con resiliencia mental y emocional suficiente como para ser portadores de salud y responsabilidad en sus hogares y en la sociedad en general. No se trata de aparcir el currículum, ni de dejar a un lado la disciplina cotidiana de las

clases. Al contrario, ambos pueden ser muy buenos aliados para el propósito anterior. Pero sí significa que dejen de ser el fin en sí mismos y que se conviertan en los medios para lograr lo que urge ahora mismo. Cada profesor, profesora sabrá cómo enfocar su área de conocimiento, su sabiduría y experiencia para aportar cierto confort, cierto tiempo y espacio de encuentro y diálogo formativo con sus adolescentes. Pero eso pasa por quitar carga de la mochila. Eso no se puede hacer si no se decide «no hacer» otras muchas cosas. No podemos seguir con la misma carga de trabajo de siempre (que ya de por sí era excesiva) y añadir toda esta nueva responsabilidad. Quizá haya que flexibilizar currículos, horarios, tareas docentes, tareas burocráticas, esto es, echar todo el lastre necesario para garantizar el viaje. Quizá ayudaría que las instituciones, los sindicatos, los medios de comunicación hicieran campañas de concienciación social que restituyan nuestra imagen profesional como agentes fundamentales de salud y formación.

Las sociedades que no valoran los servicios públicos de sanidad y educación como sus mayores tesoros está condenada a un futuro gris y poco esperanzador. Pero, los políticos que ahora nos gobiernan prefieren invertir enormes sumas de dinero en las grandes infraestructuras que reportan beneficios enormes a unos pocos. Llegará dinero de Europa sí, ¿pero qué beneficios reales y efectivos tendremos en el sistema sanitario y en el educativo? ¿Habrá rescate para ciertos sectores laborales como los hubo para la banca?

Aunque sea por puro egoísmo, nos conviene tener un frente de sanitarios fuerte y descansado y un conjunto de profesores con energía e ilusión. Si no entendemos que junto con las medidas de índole política, la sanidad y la educación son los ejes prioritarios para no colapsar como sociedad, para no entrar en una crisis económica brutal es que tal vez nos lo merezcamos. «Poner los cuidados en el centro», rezaba un eslogan feminista que ha calado profundo en nuestra sociedad; habrá que añadir «Cuidar al cuidador, a la cuidadora». Y las profesoras y profesores somos un conjunto enorme de cuidadores. Solo falta que sea visible para todos.

europapress.es

El PSOE pide un Plan coordinado con las CCAA para evitar el incremento del abandono escolar por la pandemia

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate y votación en la Comisión de Educación del Congreso por la que insta a impulsar un Plan, coordinado con las comunidades autónomas, para evitar el incremento del abandono escolar temprano derivado de la situación de la pandemia a causa de la COVID-19.

En concreto, el PSOE insta al Gobierno a incorporar dentro del Programa PROA+, en cooperación con las administraciones educativas autonómicas, un objetivo prioritario destinado a evitar el abandono escolar temprano derivado de la COVID-19 para, en primer lugar, realizar un censo en cada centro de Educación Secundaria de alumnado especialmente vulnerable y que ha estado desconectado del proceso durante el estado de alarma para realizar un seguimiento más personalizado de estos casos.

En segundo lugar, para reforzar la orientación educativa y profesional al alumnado vulnerable en riesgo de abandono y desconexión escolar, para potenciar cauces de comunicación y cooperación con las familias de alumnado vulnerable y en riesgo de abandono detectado; y para introducir medidas de acompañamiento y refuerzo psicológico ante la detección de problemas emocionales, de ansiedad o de autoestima incrementados por los efectos de la pandemia.

Asimismo, el PSOE quiere que el Gobierno promueva que el incremento de efectivos docentes disponibles en los centros educativos atienda como prioridad el destino de recursos humanos a la atención a la diversidad y el refuerzo escolar en la ESO.

Del mismo modo, reclama impulsar la colaboración con distintas entidades, organizaciones de voluntariado, fundaciones y administraciones para ampliar los servicios de ayuda escolar domiciliaria para el alumnado en riesgo de abandono escolar detectado por la pandemia, así como asegurar la dotación de recursos informáticos y conectividad al alumnado en riesgo de abandono escolar, y el seguimiento por parte de los docentes del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia cuando este se produzca.

Igualmente, el grupo parlamentario pretende con esta PNL instar al Ejecutivo a promover una mayor coordinación entre equipos docentes en relación al reparto de deberes o tareas escolares para no sobrecargar al alumnado y en especial a aquel con menos posibilidades de recibir refuerzo en el entorno familiar.

Por último, el PSOE reclama estimular las aspiraciones de continuidad educativa introduciendo información sobre el sistema de becas en la orientación educativa y acción tutorial, y promover estrategias magnet y tándem entre centros ubicados en entornos vulnerables y equipamientos e instituciones culturales para enriquecer las oportunidades de aprendizaje y apoyar el éxito escolar.

eldiario.es

El Ministerio de Educación deja la Ética fuera de la ESO pese a lo que habían acordado todos los partidos del Congreso

La Red Española de Filosofía, que agrupa a profesores y profesionales de la Filosofía, denuncia que el Gobierno ha roto el consenso que se había alcanzado en el Congreso y que ha dejado fuera de Secundaria la Ética; el PSOE replica que se planteará en el desarrollo curricular posterior de la ley en la asignatura de Valores

Daniel Sánchez Caballero. 8 de noviembre de 2020

Si nadie lo remedia en las últimas negociaciones en el Congreso, no habrá Filosofía en Secundaria en la nueva ley educativa. La Red Española de Filosofía denuncia que el Gobierno, concretamente el PSOE, ha roto el consenso que se había alcanzado previamente en la Comisión de Educación del Congreso para recuperar la materia de Ética en 4º de la ESO y crear un ciclo completo de Filosofía junto a las asignaturas de 1º (Filosofía) y 2º de Bachillerato (Historia de la Filosofía).

Según explica Ángel Vallejo, portavoz de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía (REF, formada por la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CSIC y más de cincuenta asociaciones filosóficas de diferentes campos temáticos, niveles educativos y comunidades autónomas), el Congreso aprobó por unanimidad –toda una rareza en España en política educativa– recuperar en la nueva ley educativa la formación filosófica integral, laminada por la LOMCE de José Ignacio Wert. Todos los grupos, incluido el PP, votaron a favor de recuperar las enseñanzas de Secundaria y crear un ciclo completo (un grupo coherente de asignaturas repartidas en cursos consecutivos) sobre la materia. El ahora presidente –entonces no lo era– Pedro Sánchez también había apoyado la medida.

La sorpresa llegó cuando se redactó el proyecto de LOMLOE y este no reflejaba eses acuerdo. El texto, y eso no ha cambiado durante su tramitación en el Congreso, solo contempla una asignatura sobre Valores en 3º de la ESO y luego a pasa a Filosofía en 1º de Bachillerato e Historia de la Filosofía en 2º. No hay ciclo y los estudiantes que tras la ESO opten por la FP o por abandonar los estudios no habrán tocado un libro sobre Filosofía en diez años de permanencia en el sistema.

"La Red española de Filosofía quiere manifestar su sorpresa y su indignación ante la gravedad de este hecho. Por un lado pone en evidencia el desprecio y el poco valor que se da desde el Ministerio de Educación al consenso parlamentario que ya se había alcanzado en este punto de la reforma educativa; por otro lado, muestra que el PSOE, a pesar de sus críticas a la LOMCE y su compromiso para la recuperación de la Ética y la Historia de la Filosofía, no tiene inconveniente en mantener algunas de las medidas más cuestionadas y perjudiciales de la Ley Wert", denuncia la Red en una nota.

Desde el PSOE, la diputada Luz Martínez pide calma, explica que la situación se va a resolver a través del desarrollo curricular de la ley, que se hará a posteriori, y que no se puede realizar una asignatura de cada cosa. "El currículo no es un chicle que se pueda alargar sin fin", sostiene. "No es incompatible una educación en valores con una introducción a contenidos de Ética", añade, y rechaza que el PSOE haya roto ningún consenso. "Ese era el planteamiento de la proposición no de ley de 2018", asegura. Además, dice, la ley "transita hacia un modelo más competencial en el que se pueda trabajar por ámbitos", no de una manera tan estanca en materias. "Toda la innovación educativa recomienda ir a ese modelo de enseñanza", sostiene. Y cierra: "Comparto que la Filosofía es fundamental".

¿Por qué es tan importante la materia? "Eliminar la Ética de 4º de ESO es negar a los jóvenes el derecho a recibir una formación básica y rigurosa en filosofía moral, impartida por profesorado especialista y en línea con lo que la sociedad demanda: un comportamiento ético y responsable, tanto en la ciudadanía como en sus dirigentes, que nazca de la convicción y la asunción libre y crítica de los valores que, como sociedad democrática, compartimos", explica la REF, que rechaza que se trate de un tema de "corporativismo", como aseguran que sostiene Educación. "Esto exige un aprendizaje basado en el diálogo, la reflexión, la argumentación racional y el examen crítico de las doctrinas morales y políticas de las que se ocupa la Filosofía. Es en este marco filosófico donde cabe enseñar a los estudiantes a afrontar los muchos problemas éticos que presenta el mundo contemporáneo: redes sociales, retos de la digitalización, desigualdades sociales, conflictos interculturales, dilemas bioéticos, igualdad de género, ética ecológica, etcétera", añaden.

La discrepancia parece radicar en que el Ministerio se da por satisfecho con la asignatura de Valores de 3º, pero los profesionales sostienen que eso no es Filosofía ni Ética. "Han recuperado la idea de unos valores cívicos y constitucionales y han ido arrinconando la Filosofía", lamenta Vallejo. La asignatura planteada, a falta de conocer los detalles sobre su contenido, será a priori más del estilo de la extinta (y que tanta polémica originó) Educación para la Ciudadanía de Zapatero. "No nos dicen ni qué carga horaria van a tener [esa asignatura]. No acaban de comprometerse con qué profesorado la va a impartir (EpC la podían dar profesores de Sociales o de Filosofía). Pero nosotros no hablamos de dar Ciudadanía, que podría hacerlo los de Sociales perfectamente, nosotros queremos dar Ética", expone el portavoz de la Red y profesor. La REF ni siquiera las ve incompatibles: "Partidos con posturas políticas tan distintas como Unidas Podemos o el Partido Popular

defienden la Ética de 4º de ESO y además una materia de carácter cívico en uno o varios cursos de la ESO. Es fácil de consensuar", explican.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación, sin obtener respuesta. Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos y por tanto soporte del Gobierno –y profesor interino de Filosofía antes de diputado–, recuerda que cuando se llevó la idea de recuperar el ciclo en 2018 "fue una sorpresa" que todos los grupos votaran a favor. Pero luego llegó el debate de la LOMLOE, "y el ministerio siempre lo consideró menor, no le daba la importancia que se le daba desde nuestro grupo y otros ámbitos de la sociedad civil". Unidas Podemos-En Comú Podem presentó una enmienda para introducir la Ética en 4º de la ESO, pero fue rechazada el pasado 20 de octubre con los votos en contra del PSOE y el PNV.

No todo está perdido para los defensores de la materia. Pero van quedando menos balas. "Se va a volver a plantear en la comisión de Educación, no es un tema cerrado y si el PSOE cambiara de opinión se podría resolver en el Senado, pero de momento parece que se mantiene igual", explica Serna. Otra opción es introducirla como asignatura optativa en 4º (el proyecto de la LOMLOE no las especifica), pero eso no resolvería la falta de una asignatura para todos en la etapa educativa obligatoria.



Los efectos psicológicos de la pandemia del Covid en los docentes: "No quiero que mis niños aprendan menos que antes"

El coronavirus obliga a los profesores a enfrentarse a situaciones que les generan tristeza y aumentan su estrés.

"Mi exigencia me lleva a creer que no estoy haciendo bien mi trabajo", cuenta Raquel, maestra de Primaria.

ARACELI GUEDE 09.11.2020

Raquel Casas tiene bien grabado en la memoria el primer día de este curso. Un día muy diferente al de otros años, marcado por el silencio e incluso por el miedo, muy lejos del bullicio, la alegría y los habituales abrazos por los reencuentros. "Era como si a los niños los hubieran apagado. Fueron entrando de uno en uno en el colegio, sin saludar a los amigos. Y ya en clase, ni se movían de las mesas", recuerda con tristeza.

Esta madrileña de 28 años es profesora de educación física y este año además le corresponde ser tutora de un aula mixta. Con el objetivo de facilitar la creación de grupos de convivencia estables de un máximo de 20 alumnos como una de las medidas frente al coronavirus, la Comunidad de Madrid ha permitido mezclar a niños de diferentes niveles del segundo ciclo de Infantil y a los de dos niveles consecutivos de Primaria.

"En mi colegio se ha buscado agrupar a niños con características algo comunes. Los míos de 2º, de 6-7 años, presentan alguna dificultad y les viene bien estar con los de 1º, de 5-6 años. En realidad están casi a la par, podría trabajar con ellos lo mismo, pero por currículum no puedo. Sería más fácil organizar una única clase pero muchas veces es imposible porque cada libro va a un ritmo", lamenta la joven. Esto le obliga a tener que ir a dos velocidades y, salvo cuando cuenta con un compañero de apoyo, le toca dividirse: "Me gusta tenerlo todo muy planificado pero estoy siempre pensando que se me olvida algo. Estoy en clase y de repente no he llevado los exámenes de Matemáticas porque 2º tiene examen pero 1º no. Es muy estresante". A ello se suma que cerca de un tercio son chavales vulnerables que no están yendo a la escuela y a los que tiene que hacer un seguimiento **online**.

El Ministerio de Educación cifra en 1,67% el porcentaje de aulas en cuarentena por la Covid que se viene registrando desde que empezó el año académico. El dato es muy bajo pero no evita que los docentes estén viviendo situaciones que aumentan la ansiedad de un colectivo ya de por sí estresado. Un informe de Affor, consultora especializada en prevención psicosocial, refleja que el 90% de los profesores ha sufrido alteraciones de sueño por la pandemia, un 89,5% nerviosismo, irritabilidad o tensión y un 42,7% se siente poco feliz y deprimido con su trabajo. En este contexto, el 71,3% requeriría ser valorado por un especialista.

Este sondeo se realizó entre abril y junio, meses de fuertes restricciones a la movilidad, pero las dificultades de estos profesionales no desaparecieron con la vuelta al cole. Si antes del verano su preocupación radicaba en cómo adaptarse de golpe a la enseñanza digital y en no saber si estaban llegando bien a los alumnos ni cómo se encontrarían realmente, ahora les genera desasosiego el temor al contagio, la incertidumbre sobre si volverá a ser necesario algún tipo de confinamiento, el no poder expresar afecto a los pequeños y las dudas sobre si están haciendo bien su trabajo.

"Yo me exijo que todos mis niños tengan las mismas oportunidades. No quiero dejar a ninguno descolgado ni que aprendan menos que en un curso normal. Me da mucha rabia que estos niños no puedan aprender como lo han hecho otros en esa etapa. Pero llega un momento en el que o dices 'hasta aquí' o estallas", reconoce Raquel y admite que está siendo su psicóloga quien la está ayudando a ponerse límites y a no caer en una depresión: "Muchas veces me pregunta si creo que lo estoy haciendo bien y mi grado de exigencia me lleva a responder que no. Pero cuando lo piensas fríamente te das cuenta de que no puedes hacer más".

"Es un sector con un perfil muy exigente. Les estamos transmitiendo que en la incorporación que han tenido necesitan su periodo de adaptación y cuando estamos en ese periodo, el nivel de exigencia no lo podemos

tener a tope. No pasa nada si un día la clase se me desborda y me hacen menos caso o si un día me he sentido muy triste y no he sido capaz de llevarla a cabo como hubiera querido", señala Carmen Rodríguez, directora del área de Intervención Psicológica de Affor. "A los que están con los más pequeños les preocupa mucho el tener que dejar de consolar a sus alumnos con un abrazo y con ellos trabajamos maneras alternativas de expresión de las emociones", añade Amaya Prado, vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, entidad que, en colaboración con el Ejecutivo regional, ha puesto en marcha un servicio de atención para profesores.

Tener que cortarse en las muestras de cariño a Raquel también le pesa: "Vienen, me abrazan y tener que levantar las manos y decirles que se aparten me parte el alma". "Está siendo todo muy complicado y a ver cómo va", afirma ante el desconocimiento de cómo evolucionará la pandemia. Ella es consciente de que su exposición al virus es alta pero se ha impuesto dejar relegado el miedo a una infección: "Entiendo la fobia de no poder ir a trabajar. Entre nosotros hay pacientes de riesgo, personas que viven con familiares vulnerables... y siendo profesores, el contacto con la Covid es inevitable. Pero no me queda otra que olvidarme de ese miedo".

Amaya Prado: "Deben aceptar que hay factores ajenos a ellos"

Amaya Prado es vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y psicóloga en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Valdemoro.

¿Cuáles son los principales problemas psicológicos que presentan los profesores?

Los miedos y el estrés que tienen son por el contagio, por que los alumnos cumplan las normas... Manifiestan que se les ha cargado con responsabilidades que no les corresponden y para las que no tienen herramientas. También las aulas mixtas les suponen una complicación añadida.

¿Algún caso le ha llamado especialmente la atención?

Algún docente ha presentado fobia por ir a clase, por enfrentarse a 20 niños que pueden tener el coronavirus. Se han sentido muy mal porque por un lado está su vocación y por otro el miedo al contagio tan excesivo... Hemos tenido que trabajar con ellos la incorporación paulatina al aula.

¿Qué pautas les dan?

Es importante que sepan que es normal que se sientan mal y que compartan sus emociones tanto con los compañeros como con los alumnos. Tienen que aceptar que no es que estén haciendo mal su trabajo sino que hay circunstancias ajenas a ellos que no pueden modificar.

EL PAIS

Europa lucha por mantener sus escuelas abiertas en la segunda ola

Pese al confinamiento por áreas o domiciliario impuesto en algunos países europeos, los dirigentes educativos coinciden en la necesidad de garantizar la presencialidad

IGNACIO ZAFRA/ ANA CARBAJOSA/RAFA DE MIGUEL/DANIEL VERDÚ/MARC BASSETS. VALENCIA / BERLÍN / LONDRES / ROMA / PARÍS - 09 NOV 2020

Desde que los contagios empezaron a multiplicarse y la segunda ola de covid campó en Europa, la mayoría de países han mantenido que cerrar los centros educativos sería la última frontera a cruzar en la lucha contra el virus. Los expertos están cada vez más convencidos de que los niños contagian poco y de que los colegios no son focos de propagación. Aunque Francia, el Reino Unido, Alemania o España han aprobado medidas muy restrictivas, esta vez han dejado los colegios abiertos, a diferencia de lo que sucedió en marzo, en respuesta a las advertencias de los pedagogos sobre la enorme fractura académica y de desarrollo emocional que supondría para los niños volver a clausurarlos.

En países como el Reino Unido, a pesar del nuevo confinamiento nacional impuesto desde el pasado jueves, la gran mayoría de centros escolares siguen funcionando. Boris Johnson, como el resto de dirigentes europeos, convirtió la apertura de colegios y universidades en la prioridad a defender frente a la segunda ola del virus. Desde que los colegios se reabrieron en septiembre (en Escocia o Gales se adelantaron a agosto), se han registrado cientos de casos de infección por todo el país, y muchos centros han tenido que cerrar todas o parte de sus instalaciones durante al menos dos semanas. Aunque el número de contagios ha aumentado en los últimos dos meses, principalmente entre los alumnos de educación secundaria —entre los 11 y los 16 años— son cifras muy controlables. Cuestión diferente es el absentismo, que en ese país ha crecido con la pandemia. Según el último sondeo realizado por Education Policy Institute (una fundación independiente), un 87% de los alumnos asiste estos días a clase regularmente.

Los centros educativos europeos "se están comportando bien", sostiene Salvador Peiró, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. "El nivel de transmisión en estas comunidades es mucho más bajo que el de la población general. Los niños son en general asintomáticos, tienen cargas virales bajas y poca capacidad

para contagiar. Para que los colegios vayan tan bien entendemos que los maestros y las familias deben estar comportándose mejor que el conjunto de la sociedad. Muy mal tienen que ponerse las cosas para que tengamos que cerrarlos”, reseña. En Israel, prosigue Peiró, sí se convirtieron en un foco de contagio y se cerraron. “Pero habían abierto sin apenas medidas de seguridad. Ahora vuelven a intentarlo a nuestra manera: con mascarilla, distancia y ventilación en las aulas”.

En Alemania, el cierre de las escuelas también se ha considerado el último recurso en esta segunda ola. La canciller alemana, Angela Merkel, repite en cada intervención que mantenerlas abiertas es una prioridad. Eso, pese al aumento vertiginoso de contagios en Alemania —que registra máximos diarios muy superiores a los de la primera ola—, incluso en los centros educativos. Aunque todavía no hay datos nacionales sobre la propagación de la pandemia en las escuelas, un análisis reciente de la televisión pública alemana refleja que, por ejemplo, en la región de Renania Palatinado han pasado de 98 casos entre los alumnos a final de octubre a 522 positivos una semana después. Tres escuelas tuvieron que cerrar por completo y hasta 57 de manera parcial. El número de alumnos y profesores en cuarentena se cuenta ya por decenas de miles en todo el país.

Por ello, el sindicato alemán de educación GEW mostraba recientemente su preocupación ante el aumento de contagios en la comunidad educativa en Berlín y pedía que se alterne la educación presencial con la *online*, como antes del verano. “No hay ningún otro sitio en el que tanta gente se junte en espacios cerrados, sin distancia física y en la mayoría de los casos, sin mascarilla”, recordaba el presidente regional del sindicato, Tom Erdmann. En Berlín, 586 escuelas se han visto obligadas a reforzar sus medidas higiénicas y hasta 154 se encuentran en el llamado “nivel naranja”, que obliga a medidas aún más estrictas como el uso de mascarilla en las aulas.

‘Online’ en secundaria

En las sucesivas reuniones mantenidas en los últimos meses entre los dirigentes educativos de la Unión Europea, ha habido consenso sobre la necesidad de garantizar la presencialidad, pero ante el aumento de los contagios, muchos países han empezado aplicar excepciones en la etapa de secundaria.

Italia es uno de ellos. El desbocado aumento de los casos en las últimas dos semanas y el hecho de que la franja de entre 14 y 18 años sea, según los virólogos, responsable de gran parte de las transmisiones, han llevado al Gobierno a ordenar las clases *online* para los mayores de 14 años y el uso obligatorio de mascarillas en todo momento para los demás. Además, el nuevo decreto que divide al país en tres zonas —rojas, naranjas y amarillas, según su incidencia y ocupación— con distintas restricciones, tan solo mantiene presencial la educación primaria para las zonas en rojo, que incluyen Lombardía, Piamonte, Calabria y Valle d’Aosta, por “la gran importancia que tiene el contacto físico en esas edades”, según aseguró el primer ministro, Giuseppe Conte. De momento, también mantienen abiertas las escuelas infantiles. Austria es otro de los países que ha aprobado las clases 100% *online* para los alumnos de secundaria; allí afecta a todas las regiones.

En Francia, después de días de protesta de estudiantes y profesores, y con la amenaza de una huelga de docentes este martes, el Gobierno ha aceptado flexibilizar la presencia en clase para los alumnos de secundaria —a partir de 14 años—. En vista del rápido avance del virus y al temor de que las aulas se conviertan en un núcleo de contagio, los centros educativos podrán organizar como lo consideren las clases de los alumnos a partir de 15 años, siempre asegurando una asistencia física del 50%. Para descongestionar las aulas, podrán asistir a la escuela a media jornada, uno de cada dos días, o en semanas alternas. El resto del tiempo, seguirán los programas *online* desde casa.

Desde el final del primer confinamiento, a principios de mayo, la prioridad del ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, fue el regreso a las aulas. En septiembre todos los alumnos se reincorporaron. Los centros han seguido abiertos pese al segundo confinamiento nacional, vigente desde el 30 de octubre.

En España, donde la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que apostará “firmemente” por que los centros se mantengan abiertos para no poner en peligro la formación de toda una generación y porque están siendo referentes en la detección de la covid —un 1,7% del total de grupos están cuarentenados—, la mayoría de las comunidades mantienen una docencia semipresencial en la segunda mitad de la ESO o, al menos, en bachillerato y Formación Profesional.

A pesar de sus limitaciones, la escuela presencial cumple una función educativa “irremplazable”, recuerda Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia. “Es esencial no solo en el cultivo y desarrollo de hábitos mentales, sino también en la socialización y el desarrollo emocional y afectivo, así como para reducir las desigualdades”, añade.

Después del prolongado cierre del curso pasado —España fue uno de los países donde más tiempo duró, ya que el resto abrió en mayo—, la mayoría de los sindicatos de profesores mantuvieron un mensaje claro a favor de la vuelta a la presencialidad, aunque exigieron medidas de seguridad y fueron a la huelga en varias comunidades para reclamarlas. Ahora, con la segunda ola, algunos matizan su mensaje, como están haciendo otros sindicatos europeos. “La presencialidad hay que mantenerla lo máximo posible, pero debe prevalecer por encima de todo el criterio de la salud. Si esto sigue avanzando y vamos a un confinamiento domiciliario llegará un momento en que posiblemente sea inviable. No tiene sentido mantener los centros abiertos si el objetivo es reducir el contacto social para reducir la expansión de la pandemia”, dice Ramón Izquierdo, portavoz del sindicato de profesores ANPE.

Francisco Lires, presidente de los directores de colegios públicos de infantil y primaria de Galicia, asegura que hoy la situación no tiene nada de dramática: “Es verdad que se confinan algunas clases, pero de momento,

toquemos madera, es llevadero. En la enseñanza no presencial no se llega igual. La interacción con los niños no se puede sustituir por una pantalla de ordenador. Creo que deberíamos acabar el curso presencialmente, por el bien de todos”.

Las asociaciones españolas de familiares de alumnos comparten su idea. Después de cierto ruido en verano, y los avisos de las autoridades educativas como la Fiscalía de que la asistencia a clase es obligatoria, el absentismo por la covid ha resultado testimonial, asegura el Ministerio de Educación, que no aporta datos oficiales. “La presencialidad es la única manera de garantizar el derecho a la educación. Si en la atención presencial está habiendo lagunas, por ejemplo con centros de Madrid donde en el mes de noviembre todavía no han llegado los docentes, imagínate en la enseñanza a distancia”, dice Mari Carmen Morillas, presidenta de la federación Giner de los Ríos. “Los centros educativos son las únicas herramientas que muchas familias tienen para conciliar”, destaca.

RUMANIA CLAUSURA LOS COLEGIOS DURANTE 30 DÍAS

Rumania, que tiene uno de los sistemas sanitarios más precarios de Europa, ha doblado el número de contagios diarios en dos semanas, por lo que el Gobierno anunció el viernes un paquete de medidas que se implementan hoy e incluyen un toque de queda entre las 23.00 y las 5.00 y el cierre de los centros educativos. Los colegios permanecerán cerrados 30 días en todo el país, que alcanzó ayer un máximo de casos en 24 horas (9.714 contagios) y tiene ingresados a más de 1.000 enfermos de covid en sus UCI, informa Reuters. “Tenemos que ser realistas. Se necesitan medidas más y más duras para contener la expansión de la epidemia”, dijo el presidente, Klaus Iohannis, a sus ministros el jueves. República Checa, el país con la tasa de contagios por habitante más alta de Europa, también ha cerrado sus colegios de primaria, institutos y universidades, informa María Hervás. Para frenar la sangría de contagios (ayer registraron 7.722 en 24 horas, según su Ministerio de Sanidad, pero el miércoles registraron un pico de 15.000) el Gobierno decretó el estado de emergencia el 1 de octubre y lo ha prolongado hasta el 20 de noviembre; y solo mantiene abiertas las clases en preescolar, al igual que ha hecho la vecina Polonia, donde ayer se alcanzaban los 25.000 nuevos infectados en un país de unos 38 millones de habitantes. El sábado, el Ejecutivo polaco anunció nuevas restricciones, que incluyen por primera vez desde marzo el cierre de los colegios de primaria. Las clases de secundaria y universitarias llevan semanas impartándose *online*. En Eslovaquia, están abiertas las clases de preescolar y hasta cuarto de primaria (9-10 años). El resto de cursos académicos de primaria y secundaria se impartirán *online* hasta el 27 de noviembre.



El problema de la educación en Catalunya no es la lengua

En Catalunya existe segregación en la escuela pero no por el idioma sino por la renta familiar. El problema no es la lengua, es el fracaso escolar, el abandono prematuro y la falta de recursos

Neus Tomás. 09/11/2020

En 1982, en Santa Coloma de Gramanet, un grupo de padres y madres iniciaron una movilización para reivindicar que el catalán se convirtiese en lengua vehicular en sus escuelas. Muchos de ellos eran nacidos fuera de Catalunya, vivían en una ciudad en la que todavía hoy se habla mucho más castellano que catalán, y en la que Lluís Hernández, un alcalde del PSUC conocido como *el cura rojo*, les apoyó en su petición. Hernández fue el primer alcalde que tuvo esta ciudad en democracia, un sacerdote que ocupó el cargo durante tres mandatos seguidos, que se enfrentó a la púrpura eclesiástica en más de una ocasión, y que luchó por la dignidad de muchos barrios de Santa Coloma donde las condiciones de muchas viviendas eran vergonzosas.

La Generalitat estaba ya entonces presidida por Jordi Pujol. Convergència no era partidaria de la inmersión lingüística. Prefería el modelo de líneas educativas en función del idioma. Clases en catalán y clases en castellano, o lo que es lo mismo, segregar a los alumnos en función de la lengua. El PSUC, entonces partido de referencia de la izquierda, el PSC y ERC consideraban que el modelo pujolista implicaba crear una división no solo en la escuela sino también fuera de las aulas. El objetivo era asegurar la convivencia y también garantizar que la lengua débil no siguiese retrocediendo en su uso. La Ley de Normalización Lingüística (1983), la de Política Lingüística (1998) y la Ley de Educación (2009), establecen que “los niños y niñas no serán divididos ni en aulas ni en escuelas diferentes en función de su lengua” y que el objetivo es que todos los alumnos conozcan y dominen tanto el catalán como el castellano.

El expresident José Montilla, que conoce bien la realidad metropolitana, explicó de manera muy acertada que la inmersión debe entenderse como un método, no un objetivo. Como tal, puede ser revisado allí donde se considere que por el contexto social es necesario un refuerzo en catalán o en castellano. En Catalunya no

existe un conflicto social por la lengua pese a que desde la derecha ya hace tiempo y últimamente desde algunos sectores radicales y minoritarios del independentismo se pretenda utilizar como munición partidista.

Identificar lengua con nacionalismo es un error. El catalán es la lengua materna de muchos ciudadanos que no solo no se consideran nacionalistas sino que abominan de un movimiento político de este tipo. Es una confusión interesada que ha alimentado la derecha, primero el PP y después Ciudadanos, y que Convergència, el partido nacionalista y hegemónico durante más de dos décadas, nunca atajó porque ya le iba bien. El catalán sigue siendo la lengua débil y, por lo tanto, la que requiere mayor protección en las grandes ciudades, empezando por Barcelona y su área metropolitana. Eso no significa que en aquellas escuelas rurales o de municipios en los que el catalán sea la lengua más habitual no haya que reforzar el castellano si se considera necesario desde el punto de vista educativo. Los pedagogos así lo reconocen, más aún en una sociedad cada vez más multilingüe. Y no solo eso, puesto que la conselleria de Educación, controlada por ERC, ha abierto la puerta a flexibilizarlo en esta línea. También el PSC ha propuesto superar el modelo después de 40 años. Es un debate que hay que abordar pero con argumentos pedagógicos y lingüísticos y no con peleas partidistas y mediáticas.

Las notas de los alumnos de esta comunidad permiten comprobar que el problema no es la lengua. La media en Lengua castellana y Literatura en la Selectividad del 2019 fue de 6'61. Es una calificación superior a la media del conjunto (5'65) y mejor, por ejemplo, que la de los alumnos de Madrid, Navarra, La Rioja o Galicia. Si se mira en perspectiva, desde el 2015 la puntuación ha ido mejorando año tras año. Además, a finales de la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano y superan el número 70, que es el indicador que la Generalitat utiliza para certificar que se ha alcanzado la competencia necesaria.

El texto acordado ahora entre PSOE, UP y ERC sobre la inmersión lingüística en Catalunya a través de la LOMLOE (la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la llamada 'ley Wert' cuyo propósito fracasado era "españolizar" a los alumnos) elimina la referencia a que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" y establece que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". No es ninguna barbaridad y se ajusta a la realidad de lo que ya sucede en las escuelas catalanas. A la derecha le parece una atrocidad mientras que una parte del independentismo considera que la norma se queda corta. La nueva ley ocupará de nuevo portadas, como viene ocurriendo desde hace años, más en los medios editados en Madrid que en las cabeceras catalanas, también en las que tienen doble edición, en catalán y en castellano. Otra vez aparecerá en los discursos políticos y más ahora con elecciones a la vista.

Ojalá el debate fuese sobre el fracaso escolar, la falta de financiación de la educación pública o los conciertos (por fin eliminados) a los centros que segregan por razón de sexo. Según el Instituto Catalán de Estadística (IDESCAT) el porcentaje de abandono escolar es del 19%. La media española es del 17,3% y la de la Unión Europea es del 10,3%. Y sí, en Catalunya existe *segregación en la escuela*, pero no por el idioma sino por la renta familiar. El problema no es la lengua, es la pobreza.



Madrid endurece los criterios para la escolarización de alumnos con autismo

El gobierno de Ayuso cambia en plena pandemia los criterios para conseguir una plaza en un centro preparado

LAURA GUTIÉRREZ. Madrid. 09/11/2020 - 10:15 h. CET

La Comunidad de Madrid, que de puertas para afuera ahora mismo está intentando convencer a la población de su lucha encarnizada por la defensa de la educación especial, de puertas para adentro acaba de cambiar los criterios para que uno de los sectores más vulnerables, los alumnos con autismo, consigan una plaza en centros ordinarios con aulas preferentes, con aulas preparadas con recursos y profesionales para atenderles. El gobierno regional ha modificado los requisitos y el *modus operandi* para que los niños con este trastorno accedan a una de llamadas aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) y lo ha hecho en plena pandemia y una vez iniciado el curso escolar.

A partir de ahora, las familias tendrán que acudir al especialista o al pediatra para conseguir un diagnóstico clínico del menor que hasta ahora no era necesario, porque en los casos más urgentes ese informe lo facilitaban los Equipos Específicos de orientadores dedicados al autismo. Ahora, la función de estos profesionales cambia, y no consistirá como hasta ahora en hacer un estudio directo del niño al que observaban en su entorno escolar y familiar de primera mano. Estos equipos, según educación, asesorarán y seguirán trabajando en otros asuntos pero el diagnóstico se dejará en manos únicamente de los médicos, a pesar de la situación de saturación que se vive ahora mismo, en plena pandemia, en los centros de salud y en las especialidades médicas. Esto, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras, va a sobrecargar aún más las consultas médicas y va a complicar también la burocracia que atraviesan las familias afectadas.

Despojando al equipo de orientadores de una de sus misiones más importantes, quien tendrá la llave única para permitir la entrada de estos alumnos en un aula con más recursos será una comisión formada por funcionarios que la administración elige a dedo. Una comisión que ni siquiera ha sido constituida todavía, pasados ya dos

meses desde el inicio del curso escolar, aunque según un portavoz de la consejería de educación su formación se realizará en breve. Comisiones Obreras destaca que esta comisión solo fue capaz, el curso pasado, de dar 114 informes favorables a niños con TEA, mientras que el equipo específico emitió casi 400. "Esto perjudica mucho al alumnado con autismo, en la práctica va a suponer un aumento significativo del tiempo necesario para su escolarización en un tiempo preferente", explica Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO-Madrid, "se prescinde del equipo de orientación especializado en la atención a este alumnado y se centraliza todo en una comisión que no está formada por expertos ralentizando y burocratizando el proceso".

Como la comisión interterritorial aún no se ha constituido, no es posible saber a fecha de hoy cuántos expedientes de alumnos TEA se quedaron sin tramitar desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento domiciliario en la región. Aseguran desde la Consejería de Educación, que esa actualización de casos pendientes de evaluación será una de las primeras tareas que acometa esta comisión una vez arranque sus trabajos.

LAS FAMILIAS, ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA PREOCUPACIÓN

Tener un hijo con autismo y conseguir que pueda estudiar en un centro educativo ordinario, sin necesidad de acudir a la educación especial, es ya, de por sí, una tarea titánica para las familias, que ahora, aseguran desde la Plataforma TEA Incluye, se va a complicar todavía más a raíz de estos últimos cambios. Según Lucía Martínez, portavoz de esta plataforma, "parece que quieren boicotear el modelo de centros preferentes y aulas TEA; nos da mucho miedo que nuestros hijos e hijas estén sin los apoyos que necesitan en el día a día". Crean las familias que las necesidades de estos menores, que ya las tienen desde que nacen, obligan a la administración a atenderles desde el momento en el que se detecta el trastorno. "Lo que están haciendo es precisamente lo contrario, retrasar esa atención a la necesidad".

Sobre el cambio de funciones del equipo específico de orientadores, desde la Plataforma lamentan esta pérdida, "valoraban y evaluaban a los niños en su entorno natural, en su colegio, conocían al niño y lo veían", explica Martínez, "y ahora va a decidir una comisión de personas que no van a conocer a nuestros hijos e hijas y no van a saber lo que es mejor para ellos". En cuanto a la necesidades de conseguir un diagnóstico clínico por la vía sanitaria, Lucía Martínez asegura que será muy difícil que los más pequeños, de edades más tempranas, puedan conseguirlo, "porque si los profesionales médicos no están seguros no van a dar un diagnóstico de autismo y más ahora en la situación de pandemia en la que estamos donde el acceso es más difícil todavía". Comisiones Obreras cree que este nuevo requisito va a aumentar la brecha social, porque, según Isabel Galvín, "habrá familias que puedan permitirse un médico privado y conseguir ese diagnóstico con menor tiempo de espera". El sindicato asegura que dará la batalla en los tribunales para frenar estos cambios y volver a la situación que había hasta ahora.

EL PAÍS EDITORIAL

Recta final

La nueva ley educativa tiene aspectos positivos, pero necesita mayor consenso

EL PAÍS. 10 NOV 2020

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox, la nueva ley de educación que se discute en el Congreso, la octava desde 1978, enfila la recta final de tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor el próximo curso. La Lomloe deroga gran parte de los cambios introducidos por la controvertida *ley Wert* (Lomce), entre ellos los itinerarios que segregaban a los alumnos o las reválidas de fin de etapa. Sería deseable, no obstante, que la nueva ley alcance el mayor consenso posible, de forma que se puedan evitar los vaivenes legislativos que tanto perjudican a la educación.

Existe un amplio acuerdo sobre aspectos importantes, como la reforma de la carrera docente, la autonomía de centros o la implantación de mecanismos de evaluación. La negociación de las enmiendas ha permitido introducir retoques destinados a reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades, entre ellos un reparto más equilibrado del alumnado vulnerable entre la red pública y la concertada mediante comisiones de matriculación y criterios preestablecidos de admisión. En estos momentos, los centros públicos tienen el 67% del alumnado, pero acogen al 79% de los niños de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja. Se trata de evitar que los centros concertados eviten a alumnos desfavorecidos mientras los públicos se convierten en guetos.

También es razonable que los centros que segreguen a los alumnos por sexo no puedan recibir financiación pública, lo que afecta a más de ochenta de ellos, en su mayoría religiosos, que imparten educación diferenciada. Aunque el Tribunal Constitucional sostiene que este tipo de educación no es discriminatoria,

choca con los principios de equidad y coeducación que la ley defiende. Del mismo modo, resulta lógico que no pueda destinarse suelo público a la construcción de centros privados.

Más polémico es el acuerdo para eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional que figura en la *ley Wert* y dejar al criterio de las autoridades educativas el tratamiento concreto que tendrá cada idioma en las comunidades con lengua cooficial. La supresión no tiene por qué perjudicar al castellano, dada su condición de lengua oficial. Lo que procura es blindar el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña. Los partidos de la oposición ya han anunciado que lo recurrirán ante el Constitucional, pues estiman que deja desprotegido al castellano.

La inmersión lingüística ha demostrado hasta ahora ser un instrumento eficaz para proteger al catalán, la lengua minorizada, sin perjudicar al castellano. Las pruebas de nivel o de acceso a la universidad indican que la inmersión no hace que los alumnos catalanes acaben sus estudios con un menor nivel de castellano que el resto de los alumnos españoles. Es importante insistir, en todo caso, en una aplicación flexible del modelo de inmersión lingüística. Eso significa reforzar el castellano como lengua vehicular en las zonas de dominio social del catalán y reforzar el catalán en los lugares de preeminencia social del castellano. No se trata tanto de fijar porcentajes rígidos y homogéneos de materias en castellano o en catalán, sino de asegurar que se alcance el objetivo de que al final de la escolarización todos los alumnos alcancen un nivel de bilingüismo que les permita dominar por igual, y al máximo nivel posible, ambas lenguas.

europapress.es

El Gobierno aprueba otros 20 millones para las CCAA del programa PROA+ de ayuda al alumnado vulnerable

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha validado este martes los criterios de distribución acordados por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 21 de octubre, por los que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) distribuirá 20 millones de euros entre las comunidades autónomas del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+). Estos fondos, destinados a ayudar al alumnado más vulnerable, se suman a los 40 millones ya aprobados en julio.

El MEFP distribuirá estos fondos entre las comunidades autónomas para que puedan atender las necesidades educativas del curso escolar 2020-2021, consecuencia de la emergencia sanitaria, en función de la evolución de la pandemia y de las características y singularidades de los centros educativos, del profesorado y del alumnado.

El criterio de distribución entre regiones se ha establecido atendiendo a las siguientes variables: el número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (poderación de 50%); el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (20%); la tasa de idoneidad a los 15 años (20%); y la dispersión de la población (10%).

El propósito del programa PROA+ es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con fondos públicos que afrontan mayor complejidad educativa.

Entre sus objetivos destaca el de garantizar la continuidad y el avance educativo en el curso 2020-21, con especial atención a los más vulnerables educativamente; reforzar y mejorar el funcionamiento de los centros educativos en las condiciones especiales de este curso escolar; reforzar la equidad educativa en la red de centros; y reforzar la dotación y formación de los equipos docentes y de los profesionales de la orientación.

ANDALUCÍA, LA CCAA QUE MÁS RECIBE

Las comunidades que más fondos recibirán serán Andalucía, con 2.646.056 euros, seguido de Cataluña, con 2.277.103 euros, y la Comunidad de Madrid, que recibirá 1.904.699 euros.

Por su parte, Aragón recibirá 859.048 euros; Asturias, 771.691 euros; las Islas Baleares recibirá 1.001.457 euros; Canarias 973.380; Cantabria 707.122; Castilla y León 1.060.883 euros; Castilla-La Mancha 1.075.274; la Comunitat Valenciana recibirá 1.839.728; Extremadura 823.172; Galicia 1.179.203; Murcia 1.083.346; Navarra 1.006.973 euros; y La Rioja 790.865. La financiación de la aplicación de este programa en el País Vasco se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico.



Inés Arrimadas se planta: Ciudadanos no apoyará los Presupuestos si no hay rectificación con el castellano

Juan Casillas Bayo. MADRID 10/11/2020

Ciudadanos (Cs) evita el portazo y no romperá las negociaciones con el Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero hoy su líder, Inés Arrimadas, ha avisado a Pedro Sánchez: si quiere el «sí»

de los suyos en las cuentas estatales, tendrá que rectificar en la «ley Celaá» y recuperar el carácter vehicular del castellano en la educación de Cataluña.

Esta es una de las cuatro condiciones sin las que el Ejecutivo no podrá aspirar, en principio, al «sí» de Cs. El partido, con este movimiento, opta por un escenario de equilibrio en el que no quema los puentes de la negociación, pero en el que advierte ya del sentido de su voto si no hay un giro de Sánchez. Eso sí, no ha desvelado si optaría por una abstención o un rechazo a las cuentas. En un principio, los liberales desvincularon el «atropello» al castellano de las conversaciones sobre los Presupuestos, pero el malestar interno ha provocado una reacción.

Este diario ya adelantó el sábado que el Comité Permanente de Cs estudiaba cómo afrontar los próximos pasos tras una cuestión inasumible para ellos, como es atacar la libertad de elección de la lengua en la que se escolarizan los niños en Cataluña. El enfado es mayúsculo, porque en el partido se entiende que con la enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y ERC se lleva a la ley la marginación del castellano que se ha producido, en la práctica, en las «últimas décadas».

«Le ha llegado a Sánchez la hora de elegir qué vía quiere: la España moderada o la vía de concesiones al separatismo», ha aseverado Arrimadas en la rueda de prensa posterior al cónclave de la dirección del partido. La recuperación del castellano como lengua vehicular no es la única petición en clave antiindependentista: la líder de los liberales también ha reclamado al presidente del Gobierno que se comprometa por escrito a no habilitar un referéndum de secesión en Cataluña. Extremo que ya se recogía en el famoso pacto del abrazo suscrito en 2016 entre el secretario general del PSOE y Albert Rivera.

eldiario.es

Solo tres comunidades resisten con clases 100% presenciales mientras se agudizan las restricciones por la pandemia

Navarra, Castilla y León y Euskadi van contracorriente y Canarias mantiene su modelo habitual, que incluye oferta semipresencial en algunas etapas, mientras el resto limitan la asistencia de alumnos a partir de Secundaria; y aunque se descarta un cierre total de las aulas, la situación enfrenta a familias que piden más presencialidad y docentes ven difícil de conjugarla con la seguridad con los actuales medios

Daniel Sánchez Caballero. 10 de noviembre de 2020

La educación se acerca a una encrucijada. Las cifras de contagios suben con carácter general, las familias (y muchos docentes) protestan por el modelo de enseñanza semipresencial e incluso lo denuncian en los tribunales (en el caso extremo de Murcia, que la aplica a todas las edades) o el Defensor del Pueblo, pero otros profesores alertan contra la inseguridad que supondría pasar a uno 100% presencial. Todo a la vez no puede ser, y la tendencia apunta a que si hay una evolución en algún sentido, va a ser hacia más restricciones a la hora de acudir a los centros de estudio: comunidades como Catalunya, que empezó el curso con todos los alumnos en clase, han pasado a la semipresencialidad en Bachillerato y FP. Aunque otras, como Castilla y León, Navarra, Canarias y Euskadi, resisten con un 100% de presencialidad. A estas tres comunidades se suman Canarias –que mantiene su modelo habitual que incluye una parte de oferta educativa semipresencial– y Cantabria que ha logrado mantener la Secundaria en el aula, pero no la Formación Profesional (FP). A nivel local también se han dado casos de colegios que han pasado de la semipresencialidad a la presencialidad absoluta.

De momento, las administraciones educativas –Ministerio de Educación incluido– defienden que clausurar las escuelas como en marzo es la última opción. "Los colegios serían los últimos en cerrar si la situación empeora", ha dicho la ministra Isabel Celaá en alguna ocasión. Pero todas las comunidades tienen –o deberían– escenarios de cierre previstos a los que quizá tengan que recurrir. Los docentes, un cuerpo heterogéneo donde los haya, están divididos. Podría afirmarse que (casi) ninguno considera que la educación semipresencial sea una buena solución, pero muchos la ponen en la balanza y creen que "es la menos mala" ante la pandemia y "mucho mejor que meter más alumnos en las aulas" con los datos de incremento de los contagios en mano. En Europa, la situación es bastante similar: las escuelas deben resistir.

"Estamos en estado de alarma", explica un docente su rechazo a una mayor presencialidad. "En Aragón hemos pasado en un mes de 300 a más de 1.000 casos por 100.000 habitantes (cuando la Universidad de Harvard recomienda cerrar por completo un colegio con más de 25 casos por 100.000), una positividad del 8% a más del 20% (cuando la OMS considera que con más de un 5% la situación está descontrolada), dentro de poco vendrá el frío de verdad y será muy complicado ventilar las clases, tenemos confinamiento perimetral, reducción de aforos en todos los ámbitos (menos en el escolar, en el que no se aplican las mismas leyes que para todos).... ¿Y lo único que se les ocurre es meter aún más alumnos en las aulas, sin distancias de

seguridad, sin EPIs para los docentes, con una vigilancia epidemiológica desbordada y sin recursos suficientes, con unos adolescentes que en algunos casos incumplen las normas? ¿No se han enterado que estamos en una pandemia?", resume el pensar de muchos.

Los datos de Sanidad no contribuyen a la tranquilidad de los docentes. El mensaje oficial, en base a los fríos números de contagios en los centros educativos, es que las escuelas son lugares seguros. Los docentes rechazan esta afirmación bajo el argumento de que si no se hacen pruebas no se pueden detectar positivos: "El Gobierno de Aragón [y tantos otros] no hace pruebas en Secundaria cuando hay un caso positivo en la clase (yo ya he tenido varios alumnos positivos y hemos seguido las clases como si tal cosa, sin tomar ninguna medida)", explica Daniel, docente en Zaragoza.

Los datos periódicos que ofrece Sanidad sobre brotes (que no contagios) refuerzan esta percepción de inseguridad: los centros educativos son el segundo entorno en el que más brotes se detectan, con un 13,82% del total y 211 brotes en la última semana, por encima del laboral (el ámbito de trabajo registra 172 brotes, el 11,72%) y solo por debajo, pero no tanto, del denostado ámbito familiar (248 brotes, 16,25% del total), destinatario de casi todas las medidas de contención. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que la mayor parte de los brotes en el sistema educativo se producen en la ESO, justo donde se da la semipresencialidad.

Y, sin embargo, lo que para algunas comunidades es un imposible es bien real en otras: Castilla y León, Euskadi, Canarias y Navarra han hecho una apuesta y un esfuerzo por mantener la presencialidad de todo el alumnado a base de profesorado y protocolo. En Navarra ya han anunciado que no planean renunciar a ella bajo ningún concepto.

800 profesores en Castilla y León

Castilla y León es una de las pocas autonomías que ha apostado por las clases presenciales en todos los niveles educativos, incluida la enseñanza de Bachillerato, informa Alba Camazón. Los estudiantes dan clase con distancia de seguridad, mascarilla y las ventanas abiertas e incluso se han organizado clases por la tarde en algunos centros para evitar las aglomeraciones. También se han establecido diferentes horarios de entrada y salida, además de los recreos. La Junta de Castilla y León ha establecido ratios de hasta 22 para Infantil y Primaria (antes 25) y 25 para Secundaria (30 hasta ahora) y Bachillerato (35), para lo cual contrató 800 profesores al principio de curso.

Sí son constantes, como en el resto de las comunidades, los estudiantes cuarentenados por contacto reciente, aunque eso no afecta a sus compañeros. Las clases no se cierran hasta que no haya un confirmado en el aula. En ese caso, la dirección se hace cargo cuando existe un alumno en clase con síntomas compatibles de COVID-19 y se le realiza una PCR en el sector privado, puesto que la mutua es la responsable, pero el análisis corre a cargo de las universidades. Si el progenitor o tutor lleva al menor al centro de salud, se hace cargo Atención Primaria. En el momento en el que se confirma, se aísla a toda la clase.

Actualmente hay 201 aulas en cuarentena, el máximo hasta ahora según los datos de Transparencia de la Junta. Este número de aulas confinadas crece a medida que aumenta la incidencia acumulada en Castilla y León, que es de 832 casos por cada 100.000 habitantes. Desde que comenzó el curso, se han confirmado 276 alumnos contagiados y 30 profesores con COVID-19.

El único cambio registrado en la región en los últimos días afecta a la Formación Profesional, siempre con esa imagen de *hermana pobre* de la educación académica. Las prácticas de esta etapa formativa se adaptarán a la situación sanitaria, según ha comunicado la Consejería de Educación castellanoleonesa, por la vía de reducir sus horas al mínimo legal.

Navarra consultó con las familias

Navarra, a pesar de ser una de las comunidades con mayor incidencia acumulada de contagios del país, ha conseguido mantener la educación 100% presencial en todos los niveles educativos: desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, informa Rodrigo Saiz. Este era el principal objetivo del Departamento de Educación cuando en el proceso de desescalada se comenzó a preparar el inicio del presente curso escolar. Para no "truncar la oportunidad formativa de ningún ciudadano", el Departamento consideró que era "fundamental" la vuelta a las aulas de todo el alumnado y para ello se elaboró un protocolo de prevención y organización del curso académico 2020-2021.

Un protocolo que fue acordado con los centros educativos y las asociaciones de madres y padres, que pudieron plantear y añadir modificaciones, y que establece cuatro escenarios en función de "la realidad sanitaria del momento": los dos primeros, contemplan la educación 100% presencial; el tercero, semipresencial, combinando clases en el aula con otras a través de internet; y el cuarto y último escenario un cierre de todos los centros educativos y la vuelta a las clases a través de internet. En estos momentos se está en el segundo escenario, así lo han decidido el Departamento de Educación y el de Salud, que permite unas ratios máximas de 25 en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 33 en Bachillerato (manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos siempre), con un aumento proporcional del profesorado en función de cuánto se excedan los 20 alumnos por aula recomendados.

De esta forma, el 100% de las clases se están desarrollando en el aula, incluso en aquellos municipios con mayor incidencia de COVID-19 y que están cerrados perimetralmente. Esto se ha podido lograr en gran parte por la elevada trazabilidad que hay en Navarra, en torno a un 70%. Es decir, que se tiene localizado el origen de la infección del 70% de los positivos, y es posibilita detectar rápidamente los brotes y confinar a los positivos

y sus contactos antes de que la cadena de contagio se haga más grande. También ha influido el que se hayan creado grupos de convivencia entre los alumnos, se haya fijado la jornada continua y se hayan cancelado las actividades extraescolares. Así, se ha conseguido convertir los centros escolares "si no como feudos, como lugares seguros y no vulnerables", en palabras del consejero de Educación, Carlos Gimeno.

En la actualidad y según el último dato disponible apenas un 3,6% de todo el alumnado navarro se encuentra confinado por ser positivo o contacto de un positivo (2.232 escolares en total) y, además, la gran mayoría de estos contagios no se han producido en el entorno escolar. Por ello, la intención del Gobierno foral es mantener el 100% de la presencialidad en las aulas, incluso en escenarios más duros de confinamiento. "Si no hay una evidencia científica contundente que indicase que habría que ir a una fase tres, con reducción de ratios generalizada y una semipresencialidad, Educación abogaría por mantener esa situación dos y tener actuaciones concretas y localizadas en determinados centros en los que se perdiese por parte de los técnicos de salud la trazabilidad", señalaba el consejero de Educación.

Las familias piden a Euskadi que relaje el protocolo

El País Vasco se mantiene en el escenario 1, con el que inició el curso, de presencialidad total en las aulas, incluida la Universidad. El metro y medio de distancia entre alumnos, uso obligatorio de mascarillas cuando esta distancia no sea posible se articulan como principales medidas de seguridad. Y de momento están funcionando: solo hay un centro clausurado, y se cerró ayer por un brote, informa Iker Rioja. En total hay en la comunidad 115 centros afectados y 192 aulas clausuradas, un 1,09% del total. De hecho, el protocolo de seguridad hasta les parece excesivo a las familias, que han solicitado al Gobierno vasco que lo suavice para dar una educación "más humana y que garantice el bienestar integral" a sus hijos. Entre las reivindicaciones de las familias, que puedan salir más al exterior y hacer ejercicio físico sin la mascarilla.

Está por verse la respuesta del Ejecutivo vasco a esta cuestión, aunque de momento lo que sí parece es que no tiene intención de tocar la presencialidad mientras pueda. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó hace dos semanas que continuarán manteniendo la apuesta por la educación presencial porque todos los agentes de la comunidad educativa piensan que "es la mejor opción", ya que garantiza "la equidad y la igualdad" de los alumnos.

Los casos canario y cántabro

Canarias podría considerarse la cuarta comunidad que mantiene la presencialidad al 100%, aunque su sistema habitual presenta una amplia oferta formativa de educación semipresencial, tanto en la Formación Profesional, a partir de los grados medios, como en el Bachillerato, explican desde la Consejería de Educación. Pero en las etapas obligatorias sí están acudiendo los alumnos a clase. El número de grupos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato cerrados a consecuencia de la COVID-19 en Canarias subió hasta 51 la semana pasada frente a los 47 de la anterior, según informó el viernes el Gobierno Autónomo, destacando, en todo caso, que solo suponen un 0,3 % de los más de 17.000 que suman los centros públicos, concertados y privados de las islas.

Cantabria está casi en la presencial al 100% también, aunque los sindicatos auguran un temprano paso al escenario 2 de semipresencialidad. Solo ha faltado la FP, de la que la consejera de Educación afirmó que "el número de alumnos era muy elevado" y desde un principio funcionó bajo el escenario 2. Para el resto de etapas, la consejería no estableció unas ratios mínimas por clase excepto en Infantil y Primaria, donde los fijó en 25. En el resto, tantos como quepan en clase siempre que mantengan 1,5 metros de separación entre ellos. La mascarilla es obligatoria para todos, excepto Infantil, que aún así la debe utilizar en el comedor y el transporte público. La comunidad tiene 12 aulas en cuarentena de un total de 2.654, apenas un 0,45%, según datos de la Consejería de Educación.

Estos casos demuestran que, si se quiere, se puede (al menos hasta que los datos lo desmientan). La situación que se ha vivido al menos en unos cuantos colegios en zonas con no mucha densidad de población en Aragón, a los que bien entrado el curso escolar les permitieron pasar de semipresenciales a 100% presenciales, también apunta al trazo grueso con el que se diseñaron las políticas educativas en verano, denuncian los profesores. Nadie sabe hacia dónde va a evolucionar la situación educativa, pero la consigna es clara, repetida desde todos los ámbitos: cerrar las escuelas es la última opción. Aumentar la presencialidad en estos momentos también parece descartado.

europapress.es

La concertada reclama de nuevo ante el Congreso la modificación de la 'ley Celaá' : "Es un atropello a las libertades"

MADRID, 10 NOV (EUROPA PRESS)

El sector de la educación concertada ha vuelto de nuevo a concentrarse este martes frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma educativa, coloquialmente llamada 'ley Celaá'. "La Ley es un atropello a las libertades porque limita la libertad de los padres a elegir el centro que desean para sus hijos y es un atropello desde el punto de vista académico, por la rebaja de los niveles educativos, y porque no recoge ninguna medida para los trabajadores", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el secretario general del sindicato FSIE, Francisco Javier Muñoyerro.

La concentración ha sido convocada nuevamente por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada. Esta misma plataforma ya salió a la calle el pasado jueves para mostrar su rechazo a la nueva ley.

Tal y como critican, la tramitación del proyecto se está haciendo sin tener en cuenta a la comunidad educativa, ya que hace unas semanas se rechazó en el Congreso su participación en el proceso mediante comparecencias. "Lo que pedimos es que se modifique la ley en los aspectos más lesivos y que demuestren con hechos su voluntad de consenso y su voluntad de que gobiernan para todos y de que quieren contar con todos para mejorar la educación", indica por su parte el presidente de CECE, Alfonso Aguiló.

El texto que pretende modificar la actual ley educativa, la LOMCE, contempla, tanto en su origen como a través de enmiendas, cambios en la educación concertada, como por ejemplo, la retirada del concierto a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, o la prohibición de ceder suelo público a la construcción de centros que no sean de titularidad pública, entre otras medidas. Según comenta Aguiló, el respaldo ciudadano que están teniendo en el sector de la concertada está siendo "enorme". "No pedimos que retiren la Ley, nos parece bien que hagan una ley, pero no que se aproveche la ocasión para legislar contra la educación concertada, la especial o la diferenciada", lamenta.



El PP inicia una campaña de recogida de firmas contra la ley Celaá

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este martes que, de manera simultánea a la recogida de firmas para aprobar una ley antiokupación, su partido va a iniciar una campaña contra la llamada ley Celaá

EFE. 10/11/2020

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este martes que, de manera simultánea a la recogida de firmas para aprobar una ley antiokupación, su partido va a iniciar una campaña contra la llamada ley Celaá, que los populares llevarán también al Tribunal Constitucional.

Según García Egea, que ha inaugurado el seminario virtual "#StopLeyCelaá: Defendemos la Libertad", se trata de un texto que no garantiza la libertad de elección de centro por parte de los padres, ataca la educación concertada y la educación especial y "sepulta el valor del esfuerzo".

"La educación forma ciudadanos críticos y libres, algo que no consiente un Gobierno del PSOE y Podemos, que pretende coartar la libertad a través de comités de la verdad y leyes como esta", ha denunciado.

El dirigente del PP ha avanzado que el partido "no va a dejar solos a los padres" a los que, en su opinión, quieren arrebatar un derecho, como es el de elección de centro para sus hijos.

"¿Cómo es posible que el Gobierno haya sido capaz de tramitar sin consenso una ley educativa tan importante que va a condicionar la formación de las futuras generaciones y no lo haya hecho con el plan alternativo que le ofreció Pablo Casado para no tener que recurrir al estado de alarma?", se ha preguntado.

europapress.es

Celaá pide a Ciudadanos "una lectura reposada" de la enmienda sobre el castellano y le acusa de "volver al pasado"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al PP y a Ciudadanos de pretender "volver al pasado" con su oposición al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá ha criticado, por un parte, al PP la recogida de firmas iniciada en contra de la reforma educativa y a Ciudadanos por condicionar su apoyo a los presupuestos a la retirada de la enmienda transaccional que suprime el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y dejará de figurar como lengua oficial del Estado en la reforma educativa.

"Esta enmienda transaccional es absolutamente respetuosa con la Constitución, con los estatutos de autonomía y, sobre todo, es una enmienda que acierta a poner el centro de gravedad en el desarrollo competencial de los alumnos en las competencias lingüísticas", ha indicado Celaá en una entrevista en Ser

Catalunya recogida por Europa Press en la que ha recomendado a la formación de Inés Arrimadas hacer "una lectura reposada de lo que dice la enmienda transaccional".

En su opinión, la decisión de la formación naranja de condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado es "una vuelta al pasado". "Mientras unos miran al futuro otros miran a los debates existencialistas", ha asegurado la titular de Educación quien ha recordado a Ciudadanos que "el proyecto presupuestario es magnífico, son presupuestos para la transformación que van a apuntalar el Estado de bienestar, modernizar el sistema productivo y merecen el respaldo de todas las fuerzas políticas".

Celaá se ha mostrado convencida de que los recelos hacia la inmersión lingüística son "por razones políticas y no educativas, ni pedagógicas" y ha calificado de "curioso" que quienes "tildan la inmersión lingüística de algo no conveniente, no objetan cuando se lleva a un niño a un colegio francés, alemán o al extranjero". "Tenemos que procurar que la inmersión sea compensada, que en aquellas zonas que hay una lengua prevalente, hacer que la otra lengua que es objeto de pleno dominio se pueda llegar a compensar y viceversa", ha indicado la titular de Educación.

En cuanto a la posibilidad de que puedan modificar la enmienda sobre el castellano para conseguir el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado, Celaá ha reivindicado la autonomía de la educación. "El presupuesto es merecedor, por sí mismo, de enmiendas parciales pero la educación merece un respeto, es autónoma, ese es el ambiente en el que tenemos que trabajar y no tiene mucho que ver con lo que significa el debate presupuestario", ha indicado.

Por otra parte, Celaá ha lamentado "la vuelta al pasado" del PP con la recogida de firmas contra la Lomloe. "Estamos impulsando un proyecto de ley progresista que está orientado a la modernización del sistema educativo y enfrente nos encontramos una vuelta a la rueda del hamster que nos lleva a tiempos de no muy buen recuerdo, que es la recogida de firmas, utilizar la educación para la diatriba política".

En su opinión, "el proyecto de ley tiene elementos suficientes como para poder incorporar opiniones diversas y sacar, si no es un pacto educativo, sí desde luego una suma de acuerdos". Asimismo, ha expresado su voluntad de "mantener las puertas abiertas también a la enseñanza concertada". Precisamente, sobre la educación concertada, la ministra ha precisado que la reforma "no empuja un debate sobre el deslinde entre pública y concertada, para nada es el objetivo de la ley, sino impulsar un debate sobre la calidad de la educación y la excelencia para que todos lleguen al máximo de su talento y con equidad".

elCorreoGallego.es

Nuevas claves de la Ley Celaá

PILAR RODRÍGUEZ VEIGA. 11 NOV 2020

La Comisión de Educación del Congreso vota este viernes el dictamen de la reforma de la Lomloe o Ley Celaá, que incluye novedades que crearon polémica al afectar al castellano como lengua vehicular en la educación o al papel de la enseñanza concertada, entre otras. Las enmiendas al articulado de los diversos grupos parlamentarios provocaron cambios al proyecto que presentó en su día el Ministerio de Isabel Celaá, en especial las acordadas entre PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Afectan a temas relacionados con la lengua, ya que el castellano deja de ser vehicular en la enseñanza, o a la oferta de plazas, ya que se quita peso a las concertadas. Novedades criticadas duramente por PP, Ciudadanos y Vox.

Estas son algunas de las nuevas claves incorporadas al informe de la ponencia de la Comisión de Educación sobre la ley Celaá, que consta de 112 páginas y sobre el que se trabajó en cinco reuniones entre el 20 de octubre y el pasado 5 de noviembre:

CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA

Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad con el fin de asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.

CASTELLANO

Las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

LENGUA PROPIA

En el área de Lengua propia y Literatura, en aquellas comunidades que posean dicha lengua propia con carácter oficial podrán establecerse exenciones de cursar o de ser evaluados de dicha área. Lengua propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades afectadas determinen, garantizando en todo caso el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales.

SEPARACIÓN DE ALUMNOS POR SEXO

Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.

IGUALDAD DE GÉNERO

Las administraciones impulsarán el incremento de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y en las enseñanzas de FP con menor demanda femenina. Del mismo modo promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

Se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. En concreto, en primaria se propone conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS

Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres y la renta per cápita familiar.

COMISIONES DE ADMISIÓN

Las administraciones educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos.

ELIMINAR CUOTAS EN CONCERTADOS

Los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias.

SUELO PARA CENTROS PÚBLICOS

Se promoverá un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Los municipios cooperarán con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.

PLAZAS EN INFANTIL

Las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años. El segundo ciclo de Infantil será gratuito y las administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en centros públicos y concertarán con centros privados. Se promoverá la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas posteriores. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se elaborará un plan de ocho años para la extensión del primer ciclo de Infantil hacia una oferta pública suficiente.

REPETICIÓN DE CURSO

Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

CERTIFICACIÓN EN SECUNDARIA

Todos los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.

INSPECTORES

En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos, mientras que la fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Podrán incorporarse a la educación de personas adultas, además de quienes cumplan 18 años, los mayores de 16 años que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

CAMBIO DE PUESTO DE DOCENTES

Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado.

PLAN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

El Ministerio en colaboración con las comunidades definirán un modelo de plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa. Incluirá aspectos organizativos y de funcionamiento del centro y las medidas que garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado.

EL PAÍS

Las cuotas base de la concertada aparte de los fondos públicos: 225 euros al mes en Cataluña y 110 en Madrid

Una consultora demuestra con visitas a 336 centros que en el 89% se abonan “aportaciones voluntarias” aunque la enseñanza es gratuita. En seis de las ocho regiones analizadas se paga menos de 60 euros, aunque se suman otros conceptos

ELISA SILIÓ. Madrid - 11 NOV 2020

A muchos padres de la escuela pública, agrupados en la confederación CEAPA, les subleva que el dinero de sus impuestos sufrague colegios concertados que, a su juicio, discriminan a los alumnos que no pueden pagar sus cuotas “voluntarias”. Y a la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que reúne a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), le irrita la “competencia desleal” de la nueva escuela concertada, cuyos sueldos y mantenimiento se abona con fondos del Estado y que, sin embargo, cobra a las familias cantidades sustanciosas. Por eso, como hacen desde hace cinco años, CEAPA y CICAE suman fuerzas y a través de una consultora analizan las cuotas que se pagan, que van de los 15 euros de mínimo en Aragón a los 950 euros mensuales máximos en Barcelona. Existen grandes diferencias entre los colegios de las comunidades analizadas. Las mayores tarifas base se cobran en Cataluña (225 euros de media al mes), seguidas de Madrid (110 euros) y País Vasco (97 euros). En el resto de las comunidades analizadas —Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra y Galicia— la cuota media base está por debajo de los 60 euros. Luego hay que sumar en casi todos los casos otras actividades.

Miembros de la consultora Garlic B2B se hicieron pasar por padres interesados en matricular a sus hijos en 336 centros entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Solo el 45% de los colegios aportó algún tipo de documento con los precios de las cuotas complementarias y apenas el 22% especificó las actividades, conceptos y horarios por los que cobra es tarifa. Los precios, además, varían según preferencias en algunos centros, de forma que si no contratas el comedor aumenta el complemento voluntario, o existe un pack de actividades que salen más caras si se escogen por separado. Más difícil de demostrar —la consultora ha hecho un “testeo de voluntariedad”— es que los alumnos que no pagan la cuota no pueden acudir a las actividades. Según el estudio, ocurre en el 10% de los centros en España y en un 28% de los madrileños.

A la Comunidad de Madrid no le consta que se fuerce a pagar estas cuotas. Hace unos meses explicó a EL PAÍS que su Consejería de Educación ha remitido desde 2015 más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador. Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, ha explicado en rueda de prensa que harán llegar a todas las Administraciones este informe. “Todos los años recibimos quejas y denuncias de padres. Incluso en el confinamiento han seguido cobrando. Exigimos que se cumpla la ley y actúe la Alta Inspección”. Elena Cid, directora de CICAE, ha insistido en que muchos centros “no abusan” de los conciertos, pero “algunos han desvirtuado el modelo y no hay un buen uso de los fondos públicos cuando no puede ser que sean un negocio rentable”. Recuerda que muchos son fundaciones que se desgravan fiscalmente.

El colegio más caro es el St Pauls de Barcelona (950 euros). El centro declina hacer declaraciones a EL PAÍS pero en 2018 por correo electrónico explicó que las familias abonaban 850 euros por la “media pensión, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, natación...), mutua escolar o seguro de accidentes”, entre otros. E indicó que la matrícula eran otros 2.800 euros. Mientras que al Consorcio de Educación de Barcelona le constaba que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por “actividades complementarias” (extraescolares) y 175 euros de comedor.

Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE nueva concertada) cree que el informe es “tendencioso” y busca “sostener una tesis previa” pero reconoce que estos precios en algunos casos son “demasiado altos”. “El informe no aporta nada que los padres no sepan. Conocen los precios y pagan o no. Saben que las cuotas son voluntarias y que los servicios de comedor, extraescolares y

complementarias las suscriben quienes lo desean. Por ejemplo, el concierto en infantil y primaria cubre cinco clases al día y la mayoría de los centros atienden ocho horas con cuotas bastante reducidas para el servicio que se da". Y el también presidente de la Fundación Arenales precisa más: "Si son colegios tan malos, con la bajada de la natalidad hay plazas libres en los centros". Desde CECE, asegura, animan a las escuelas a colgar en las webs los precios y a ser "transparentes". Recuerda que el Estado "hace tiempo debería de financiar los costes".

Esta radiografía de precios es muy ilustrativa porque dibuja dos tipos distintos de escuela subvencionada en España, donde se destinaron a conciertos 6.342 millones de euros en 2018. La tradicional —gestionada por la Iglesia o colectivos de profesores, no tiene ánimo de lucro (el dinero revierte en el centro)— y la conocida como "nueva concertada", en manos de empresas o colectivos ultra religiosos, que funciona como una compañía (aunque sea una fundación) y se concentra en las grandes ciudades. Según cálculos de Escuelas Católicas —que representa al 60% de concertada (2.008 centros) y son muy contrarios a una reforma educativa— el 82% de sus colegios cobran "aportaciones voluntarias" de entre 10 y 50 euros, porque aseguran que la cuantía que reciben por unidad en el centro (grupo) es insuficiente para su funcionamiento.

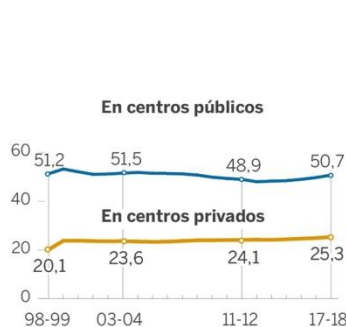
Este informe y la mirada del Gobierno no se centran en esta concertada de toda la vida, sino en la nueva subvencionada que ofrece por cifras desorbitadas grandes instalaciones. El coste de cada puesto escolar subvencionado es una incógnita que ningún gobierno (ni de izquierdas ni de derechas) desvela, pero cualquier político reconoce sin cámaras que no es muy generoso y que hay que actualizarlo. El Departamento de Educación de Cataluña, por ejemplo, admitió el pasado febrero que la escuela concertada está infrafinanciada y calcula en 145 millones la aportación necesaria para asegurarse que estos centros avancen hacia la gratuidad.

La ley educativa de 2006 (LOE) establece que "en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas", pero el Estado central no puede perseguir que los colegios no cobren una cuota encubierta en distintos conceptos (servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar o proyecto pedagógico). Es competencia de los ejecutivos autonómicos hacerlo, a través de Inspección, pero rara vez sancionan a los centros infractores. Así que al Gobierno le queda solo la baza de aprobar una ley —que se debate este viernes en el Congreso— que fuerce a repartir de otra manera a los estudiantes. Hoy los colegios e institutos públicos concentran al 67,1% del alumnado no universitario (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%), pero acogen al 79% de los niños de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja.

PRIMARIA



SECUNDARIA



El interés del Gobierno es deshacer los guetos. Por ejemplo, en sus enmiendas plantea que las actividades complementarias estables de pago no se puedan programar en la jornada lectiva, que el criterio prioritario en la elección de centro sea la proximidad al domicilio (para que los colegios no puedan discriminar) y que existan comisiones de escolarización para dirimir los casos en que existen más peticiones que plazas o que se establezcan porcentajes (marcados por las comunidades) de alumnado con necesidades especiales para cada colegio. El

Consortio de Educación de Barcelona ya ha logrado que aumente un 37% la acogida de estudiantes vulnerables en sus escuelas concertadas gracias a un nuevo plan de reparto del alumnado.

La escuela concertada nació gratuita y subsidiaria para llegar a donde no podía el Estado, porque los socialistas en 1985 alargaron la escolarización hasta los 14 años y no había suficientes plazas en la pública. Y ahora su intención y la de Podemos es no auspiciar que siga creciendo. Por eso su norma quiere prohibir que los ayuntamientos cedan suelo público para levantar colegios privados que luego se concierten. En la mente de todos están los negocios millonarios del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y la trama Púnica en la capital (con réplica en Valencia), hoy judicializados, a costa de los colegios concertados.

En Madrid, según estimaciones de UGT, se cedieron entre 2000 y 2013 unas 80 parcelas que suman más de millón y medio de metros cuadrados de terreno. Esta idea contraviene los planes de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en diciembre pasado anunció: "Vamos a retomar, e incluso incrementar, los conciertos educativos, porque solo podremos asegurar la libertad de elección si existe una oferta educativa amplia".

La ministra Isabel Celaá remarca una y otra vez que las familias van a poder seguir matriculando a sus hijos en la concertada si sale adelante su ley—"Esta escuela está perfectamente contemplada, respetada y acreditada", repite—, pero la guerra mediática parece imparable. El PP recogerá firmas y acudirá al Tribunal Constitucional y las críticas al texto incendian las redes diariamente para preocupación de la ministra pues parte de su electorado escoge estos colegios para sus hijos. El viernes en el Congreso, el siguiente capítulo de un serial que se prevé larguísimo.

europapress.es

Más de un 13% de los centros educativos tiene aulas en cuarentena, aunque solo 27 están cerrados por el COVID-19

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.337 centros de 14 comunidades/ciudades autónomas de España tienen actualmente aulas en cuarentena, lo que constituye el 13,73% de los centros de esas 14 regiones, según datos del Ministerio de Educación y FP a fecha 6 de noviembre, facilitados a CCOO durante la Mesa de Negociación que ha mantenido este miércoles el Ministerio con los sindicatos.

Según CCOO, el Departamento que dirige Isabel Celaá también ha informado de que solo 27 centros educativos se encuentran cerrados por incidencias causadas por la COVID-19 o por estar la actividad presencial suspendida por encontrarse en cuarentena el municipio donde se ubica (con información de 18 comunidades/ciudades autónomas), lo que supone el 0,09% del total de centros que imparten enseñanzas del régimen general.

Asimismo, hay 6.217 grupos en cuarentena en 18 comunidades/ciudades autónomas, incluyendo las clases organizadas como Grupos de Convivencia Estable (GCE), lo que suponen un 1,5% del total de grupos/aulas de enseñanzas de régimen general. Esto significa que el 98,5% de los grupos está funcionando con normalidad.

Con respecto al número de positivos confirmados, hay 14.062 positivos de alumnos (información de 16 comunidades/ciudades autónomas), lo que representa el 0,27% del alumnado de esas 16 regiones, mientras que hay 1.678 positivos en 14 comunidades/ciudades autónomas (el 0,38% del profesorado).

En cuanto a número de personas en cuarentena, CCOO indica que, según el Ministerio, actualmente guardan cuarentena 138.278 alumnos, el 2,37% del alumnado en 15 comunidades/ciudades autónomas, cuando en el caso de los profesores, se encuentran connotados 5.893, el 1,71% (con información de 11 regiones).

LA VANGUARDIA

Estos son los estudios y sectores más demandados

Según Adecco, se prevén contrataciones en el sector farmacéutico e informático, y más ofertas relacionadas con la administración de empresas

REDACCIÓN. 11/11/2020

España es uno de los países europeos más afectados por la pandemia del coronavirus. El alto grado de incertidumbre ha acarreado una crisis económica y laboral que ha generado un gran número de desempleados y trabajadores en ERTE. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se ha registrado una tasa de paro del 16,26% en el tercer trimestre, cuando en 2019 era del 13,92% en el mismo periodo.

Durante los dos meses posteriores a la entrada del estado alarma, el volumen de oferta de empleo publicada por las empresas se redujo un 70%, al pasar de publicar más de 233 mil ofertas en 2019 a tan solo 69 mil en 2020. Sin embargo, las expectativas son más optimistas para el 2021.

El Informe Infoempleo Adecco 2019 da respuesta a la cambiante y compleja realidad del empleo en España, y desvela qué sectores tendrán más contrataciones en 2021, así como los vínculos existentes entre la formación académica y el mundo laboral.

Según el estudio del portal Infoempleo y la consultora de recursos humanos Adecco, los sectores económicos en los que se producirán más contrataciones son: industria farmacéutica, informática, los servicios de consultoría general, recursos humanos, industria alimentaria, servicios sociales, empresas de limpieza, y transporte de mercancías y logística.

Con respecto a la distribución regional en 2020, la comunidad que se mantiene líder en el ranking de oferta laboral es Madrid, acaparando el 24,91%. Le sigue cerca Catalunya, con el 17,67% de la oferta nacional total. En tercera posición se sitúa Andalucía con el 11,3%, y en la cuarta el País Vasco, que registra una ligera bajada con el 9,52% tras el paso de la COVID-19.

Un aspecto que destaca el informe es que se ha igualado la oferta laboral para titulados de FP y universitarios. Las ofertas de trabajo que requieren titulados de FP se sitúan ligeramente por debajo de las que demandan un grado universitario. Además, el 23% son ofertas para titulados de ciclos formativos de grado superior, frente al 15% de los ciclos de grado medio.

Las titulaciones de FP que más empleo han recibido el último año son: Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, e Informática y Comunicaciones.

La titulación con mas demanda sigue siendo Administración y Dirección de Empresas (ADE), que recibió un 10,6% de las ofertas de empleo en España en 2019, indica el informe.

La Ingeniería Industrial se sitúa en la segunda posición del ranking de las carreras más demandadas. El 4,6% de los empleos se dirigieron a personas graduadas con esta titulación. Además, el estudio indica que ha subido ligeramente la oferta durante el último año.

La tercera titulación universitaria con más empleo es la Ingeniería Informática, que supone un 3,8% de las ofertas laborales. Y en cuarta posición se encuentra el doble grado de ADE y Derecho, que ocupa un 3,6% de las ofertas.

Por debajo de estas cuatro carreras universitarias, se sitúan las titulaciones en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos humanos; Comercio y Marketing; Enfermería; Economía; Ingeniería Mecánica; y Derecho.

Los sectores que requieren una especialización extra en la formación del estudiante suelen ser las áreas de marketing y comunicación (26,2%), legal-jurídica (25%), I+D (21%), ADE (19%) y tecnologías (12%).

Tras estos datos, el portal de *Emagister* propone una serie de másteres online que pueden ayudar al usuario a crecer profesionalmente y a encontrar empleo en la era post Covid-19.

El centro Select Business School imparte un Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico para aquellas personas que estén interesadas en la gestión de planes de marketing, la presentación de productos en la red, y *social media strategy*.

Para los que quieran digitalizar su negocio, la Escuela de Liderazgo ELBS oferta el Máster Superior en Nuevas Tecnologías para la Gestión Integral de la Empresa. Este programa da a conocer a los estudiantes cómo instalar el sistema RED, las estrategias de implantación de las TIC en las empresas, así como las nuevas tecnologías para directivos de PYMES.

Otra opción tecnológica es el Máster en Big Data y Business Intelligence del Instituto Superior Europeo de Barcelona (ISEB). Con conocimientos sobre Big Data, el usuario podrá a gestionar e interpretar grandes cantidades de datos e información en el ámbito empresarial. La formación online, que tiene una duración de 12 meses, da a conocer también las herramientas del campo de *Business Analytics*, así como técnicas de marketing relacionadas con Big Data.



El Gobierno acelera la «ley Celaá»: llega al Pleno del Congreso en tan solo seis días

Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado

Josefina G. Segmann 12/11/2020

A las polémicas cesiones del Gobierno a los nacionalistas (ERC) con la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado en « ley Celaá », se unen otros guiños en esta polémica norma, también a Podemos, como el ensañamiento contra la concertada y la educación diferenciada. Esto sin mencionar las facilidades para obtener el título en Bachillerato o para evitar las repeticiones en toda la enseñanza obligatoria que promete la ley que lleva el nombre de la ministra de Educación.

Pero la «ley Celaá» también es polémica por la rapidez con la que está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados. La Ponencia (grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación) se reunió tan solo cinco veces para analizar 1.162 enmiendas.

El ya mencionado dictamen será votado (junto a las enmiendas que no entraron en él, llamadas «vivas») en Comisión de Educación mañana viernes. Todo esto será llevado y votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26, como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento).

Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

Por poner una referencia, cuando se tramitó la ley educativa vigente (Lomce), las sesiones terminaron un 26 de septiembre y se votó el dictamen en Pleno 15 días después; ahora no se llega ni a una semana entre una votación y otra. «Lo que hacen ahora con la Lomloe es una locura porque no da tiempo a trabajar el dictamen; es una ley metida con calzador que representa el rodillo en las formas parlamentarias», denuncian fuentes del Congreso.

«La falta de tiempo para trabajar con rigor una ley y el atropello que se ha cometido con los tiempos en su tramitación da cuenta de qué es la educación para el sanchismo: la moneda de cambio más útil por ser la más valorada por quienes quieren destrozar este país (los secesionistas y los populistas). Es bochornoso ver cómo

el PSOE lo permite en silencio y cómo se ha prestado a este juego», apunta Marta Martín, portavoz de Educación de Cs en el Congreso.

Ley en tres meses

Después de la tramitación en el Senado (que se estima que durará unos dos meses) el texto volverá al Congreso para convertirse en ley definitivamente. Lo que podría producirse en tan solo tres meses.

También supone una gran dificultad para los grupos parlamentarios la votación que tendrá lugar mañana en la Comisión de Educación. El dictamen con las enmiendas incluidas (las transaccionales más todas las de Podemos y PSOE), además de las que no se incluyeron y que aún pueden ser incorporadas, se votarán en una jornada maratónica, es decir, en un solo día.

Volviendo a la referencia de la Lomce, la Comisión de Educación empleó en su momento tres sesiones para votar unas 700 enmiendas. Ahora es un día para más de 1.000.

La primera vez que saltaron las alarmas respecto a las prisas en la tramitación de la ley fue cuando se dejó afuera a la comunidad educativa del debate parlamentario. PSOE y Podemos se mostraron contrarios a la intervención de la sociedad civil (al igual que el resto de grupos parlamentarios con la excepción de PP, Cs, Vox y UPN).

Se trató de la primera vez en la historia de que una ley educativa no tenía comparecencias.

Hay que recordar que desde la instauración de la Democracia en nuestro país se han aprobado siete normas: (LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013; y LOECE, 1980 (aunque ésta no se llegó a aplicar).

europapress.es

El Gobierno pretende que la EBAU en 2021 sea presencial, pero no descarta que sea virtual si la pandemia empeora

La orden, en fase de borrador, establece que las pruebas de Selectividad deberán finalizar antes del 18 de junio de 2021

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno pretende que la próxima Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad, que se celebrará en 2021, sea presencial, pero no descarta del todo que se pueda realizar de manera virtual si las condiciones sanitarias por la pandemia de coronavirus empeoran.

Así lo recoge el Proyecto de orden del Ministerio de Educación y FP y del Ministerio de Universidades, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.

"Si estuvieran en vigor medidas sanitarias excepcionales que impidiesen la realización de las pruebas en las condiciones habituales de presencialidad dentro del plazo previsto, los órganos responsables podrán, en ejercicio de sus competencias, establecer, para la totalidad o parte del alumnado inscrito en dichas pruebas, un procedimiento virtual y fiable para su realización", recoge el borrador de la orden ministerial.

Pese a ello, fuentes del Ministerio de Educación y FP aseguran a Europa Press que la intención tanto de este Departamento como de Universidades es que la Selectividad sea presencial, como ya se hizo este año, manteniendo todas las medidas sanitarias y de prevención.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN JUNIO O EN SEPTIEMBRE

Dicha orden, que se encuentra desde el 6 de noviembre en fase de audiencia e información pública, también pone fecha a la realización de los exámenes: "Las pruebas deberán nalizar antes del día 18 de junio de 2021".

Esto supone realizar los exámenes en las fechas habituales y no en fechas tan tardías como las de este 2020, ya que se retrasaron las pruebas hasta el verano por el Estado de Alarma, que decretó el cierre de todos los centros educativos el 16 de marzo. Así, la Selectividad de este año dio inicio el 23 de junio, alargándose en la mayoría de comunidades autónomas hasta las dos primeras semanas de julio.

Asimismo, las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria, según este borrador, podrían celebrarse en julio o en septiembre, según lo decida la Administración educativa competente. En el caso de celebrarse en el mes de julio, los exámenes tendrían que realizarse antes del 9 de julio, mientras que si se realizan en septiembre, tendrían que ser antes del 16 de septiembre.

"UNA ÚNICA PROPUESTA DE EXAMEN" Y PREGUNTAS TIPO TEST

Con respecto al tipo de preguntas que contendrán los exámenes, establece que cada una de las pruebas constará de "preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez".

Pero además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también "preguntas de opción múltiple", es decir, de tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%".

Sin embargo, para 2021, las opciones de examen por materia se reducirían con respecto a este año, al establecer que en cada una de las pruebas que se realicen por asignatura, el alumnado dispondrá de "una única propuesta de examen con varias preguntas" y no de varias como había venido sucediendo hasta ahora.

La redacción de esta orden no es definitiva ni está aprobada. Tras pasar el trámite de audiencia, la orden tendrá que ser evaluada por el Consejo Escolar del Estado (órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo) y por la Comisión General de Educación (reunión técnica que se celebra con carácter previo a las Conferencias Sectoriales, y que está presidida por el secretario de Estado de Educación y a la que asisten los consejeros de educación y universidades de las comunidades autónomas).



Nacida para morir antes de cumplir los 7 años

La educación es el tema menos indicado para formar parte del toma y daca de una negociación presupuestaria
IÑAKI GABILONDO. Madrid. 12/11/2020

Aquí está de nuevo el debate sin debate sobre la educación. Es el *deja vú* más persistente de nuestra democracia. Repasemos: la LOECE, 1980; la LODE, 85; la LOGSE, 90; la LOCE, 2002; la LOE, 2006; la LOMCE, 2013... Cada una de estas leyes nacía siempre para eliminar la sobredosis de ideología de su rival y era acusada siempre de sobredosis de ideología contraria. Nacidas todas ellas para morir y para morir antes de cumplir los 7 años.

Es imposible no sentir una fatiga infinita al iniciar un camino que la experiencia nos dice que no tiene salida, o lo que es más irritante, que tendría salida si no la cegara la cerrazón partidista y algunos fundamentalismos, porque los obstáculos son siempre los mismos, tan resabidos y superconocidos que no puedo creer que presenten dificultades técnicas insuperables, que no admitan compromisos, que no ofrezcan zonas de acuerdo.

No somos el único país del mundo en el que hay creyentes, agnósticos y ateos, o izquierdas y derechas. No somos el único que alberga distintos pueblos con distintos idiomas y no somos menos inteligentes que los demás. Nuestra impotencia no es técnica, es falta de voluntad política. Con Ángel Gabilondo se demostró. Se logró, consensuar prácticamente todo, pero ni así se obtuvo el acuerdo final.

El mayor enredo procede ahora de Cataluña y la eliminación del castellano como lengua vehicular. Un problema que no lo pareció (o no lo pareció tanto) durante más de veinte años, cuando el nacionalismo inspiraba un recelo de baja intensidad. Desde la hoja de Ruta de la Independencia en 2014, que pisó a fondo todos los aceleradores, el temor a que se quiera eliminar el español en Cataluña ha elevado la desconfianza al máximo y a día de hoy es un asunto vidriososísimo que sólo se puede abordar con calma y con tiempo. Desde luego, es el tema menos indicado para formar parte del toma y daca de una negociación presupuestaria. Ya se acerca la nueva ley, como sus hermanas, nacida para morir y antes de los 7 años.

europapress.es

España se mantiene como el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE pese a la mejora de la última década

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono prematuro de la educación y la formación profesional, con un 17,3%, lo que supone un nivel siete puntos superior a la media del bloque (10,2%) a pesar de que el porcentaje ha disminuido "a un ritmo constante" durante la última década.

Así se desprende del informe sobre España del Monitor de la Educación y la Formación de 2020 que este jueves ha publicado la Comisión Europea para todos los Estados miembro. El documento resalta que alcanzar el objetivo nacional de reducir la tasa de abandono escolar al 15% este año "parece inalcanzable".

El informe también destaca las diferencias regionales, con Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia reduciendo el abandono prematuro de la educación y Cantabria, Cataluña y Navarra aumentándolo. También recoge que esta realidad afecta más a los chicos (21,4%) que a las chicas (13%).

En la comparación con el resto de socios europeos, sólo Malta se acerca a la tasa de abandono escolar de España (17,2%) y el tercer país con una cifra mayor es Rumanía (15,3%). Tras ellos se sitúan Bulgaria (13,9%), Italia (13,5%), Hungría (11,8%), Portugal (10,6%) y Alemania (10,3%).

Por el contrario, los Estados miembro con menor tasa de abandono prematuro de la educación son Lituania (4%), Grecia (4,1%), Eslovenia (4,6%), Irlanda (5,1%), Polonia (4,6%), Suecia (6,5%) y República Checa (6,7%).

INVERSIÓN INFERIOR A LA MEDIA EUROPEA

Otro aspecto del informe sobre España es que el presupuesto en educación se mantiene por debajo del promedio en la UE. En 2018 España dedicó a educación el 4% del PIB y el 9,6% del gasto público total. Ambos porcentajes fueron inferiores a la media del bloque, del 4,6% y del 9,9% respectivamente.

Durante todo el periodo entre 2010 y 2018 el gasto general de la administración pública española en educación cayó un 3%, con la mayor reducción observada en educación terciaria, mientras que el gasto medio en la UE creció un 4%.

La mayor reducción en esos ocho años se produjo en la formación bruta de capital (-39%) y en consumo intermedio (-22%).

La remuneración de los trabajadores, en cambio, "no presentó ningún cambio significativo". De hecho, los salarios de los profesores representan el 68% del gasto en educación, mientras que la formación de capital aglutina el 4% de los fondos.

Las escuelas concertadas reciben en España un 12,5% del presupuesto (cerca de 6.300 millones) y un 4,4% del mismo se destina a becas y ayudas al estudio. España, además, es el país de la UE con el mayor porcentaje de gasto privado en educación (un 19% del total).

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS NO HAN MEJORADO

Con respecto al nivel de los alumnos españoles en las competencias básicas, el texto de Bruselas advierte de que no ha mejorado. El rendimiento medio según el informe PISA para 2018, recuerdan las autoridades comunitarias cayó en 10 puntos en ciencias y en 5 puntos en matemáticas.

Así, la tasa de alumnos con bajo rendimiento fue superior a la media de la UE en matemáticas (24,7%) y cerca de la media comunitaria en ciencias (21,3%), pero ambas siguen "muy lejos" del valor de referencia, situado en el 15%. Además, el documento señala que en España hubo "relativamente pocos alumnos" con rendimiento alto.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario apunta que el origen socioeconómico de los estudiantes tiene una "gran influencia" en los resultados educativos. En concreto, la probabilidad de repetición de curso en España es cuatro veces mayor entre los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo.

También remarca el texto que España ha reducido la brecha entre alumnos nativos y alumnos de origen migrante, aunque se debe "principalmente" a un peor rendimiento de los primeros.

LEY CELAÁ

Por otro lado, el informe se hace eco de la reforma en marcha de la ley educativa en España, también conocida como 'ley Celaá' y recuerda que ya hace meses la Comisión Europea subrayó que el éxito de las medidas que puedan adoptarse en este ámbito "dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero".

En la misma línea, apunta que el éxito de la reforma también estará relacionado con la aplicación de otras modificaciones paralelas, por ejemplo, sobre la profesión docente, la formación profesional y la enseñanza superior.

Asimismo, remarca que "medidas tales como los límites a la repetición de curso deben velar por la coherencia con los objetivos generales", y cita en concreto la mejora de los resultados educativos de los alumnos españoles.

Sobre las repeticiones de curso, el informe destaca que este indicador se mantiene elevado en la mayoría de las comunidades autónomas (por encima del 25% de los alumnos de 15 años) y enfatiza que Madrid y Navarra vieron aumentar sus tasas de repetición de curso en 2019 en un 1% cada una.

THE CONVERSATION

Miles de escuelas siguen cerradas por la covid-19: así es la educación en el mundo hoy

Javier M. Valle. Director del Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales, Universidad Autónoma de Madrid. 10 noviembre 2020

La Covid-19 golpea por segunda vez en menos de un año. Y lo hace con fuerza especial en Europa y España. Nuevas medidas para evitar los contagios se ponen en marcha y revolotea la sombra de un nuevo confinamiento domiciliario. En medio de esa situación emerge una pregunta: ¿Cerrarán los colegios?

No hay postura clara sobre la conveniencia de hacerlo, ni por parte de profesores, ni de epidemiólogos; menos aún entre las familias, abrumadas por la incertidumbre ante la disparidad de criterios.

Según un informe de la UNESCO, el virus supuso la mayor interrupción escolar de la historia: 1 600 millones de estudiantes en más de 190 países de todo el mundo (94 % de la población mundial de estudiantes y 99 % en los países más desfavorecidos).

Esa interrupción tiene consecuencias educativas (ausencia de enseñanza), personales (carencias de socialización) y familiares (imposibilidad de atender escolarmente a los hijos en muchas familias).

Infraestructura para aprender en el hogar

Para desarrollar la enseñanza en el hogar se necesita infraestructura digital suficiente, formación adecuada del profesorado para la docencia virtual y una red familiar con un mínimo de formación y con posibilidades de dedicación. Todas estas circunstancias no se dan siempre. Pero en todo el periodo de escolarización de un niño (10 o 12 años como mínimo), y según el paradigma del aprendizaje permanente, la recuperación de una ausencia escolar limitada en el tiempo podría recuperarse posteriormente.

La falta de contacto con iguales tendrá consecuencias que sería imposible determinar sin un seguimiento a quienes la han padecido. Pero es evidente que establecer relaciones sociales a edades tempranas resulta crucial para un desarrollo psicológico y afectivo equilibrado. Eso fundamenta que la escolaridad se inicie lo antes posible.

El cierre de escuelas obliga a una atención permanente e intensa por parte de las familias hacia los hijos escolarizados y un mínimo de formación para ayudarles en su aprendizaje. La atención necesaria es incompatible en el caso de progenitores que trabajan, incluso si se hace con la fórmula de teletrabajo. El confinamiento de la primera ola dejó esto patente. Y no todas las familias cuentan con formación adecuada para apoyar en todos los contenidos escolares.

El contexto latinoamericano

Los contagios entre niños tienen una incidencia menor que en adultos y la gravedad con que cursa la enfermedad a edades tempranas suele ser menos dramática.

¿Conviene, pues, cerrar las escuelas? Según esas reflexiones, parece que no. Pero muchos países sí lo han hecho, sobre todo en el contexto de Latinoamérica. Y no sin consecuencias.

En Argentina, con un confinamiento social de los más largos y severos de todo el planeta, el curso comienza en marzo y en ese mes de 2020 el presidente anunció el cierre de todas las escuelas (de manera centralizada a pesar de la estructura federal del país) y la puesta en marcha de una plataforma para recursos de aprendizaje (www.seguimoseducando.gob.ar).

Han pasado 7 meses, grandes áreas del país no tienen los recursos digitales adecuados para seguir la enseñanza en línea y las cifras de la pandemia no parecen mejorar.

Otro país federal que decidió de forma centralizada cerrar completamente las escuelas desde el primer momento fue Brasil. Hoy ya son muchas las voces que solicitan su reapertura toda vez que otros sectores de la actividad han comenzado a funcionar. Y las cifras de contagios no paran de crecer.

Con un cierre total de las escuelas desde marzo, que continua aún vigente, se encuentra también Colombia, donde diferentes resoluciones del gobierno central han pretendido implantar sistemas docentes a distancia.

Se han realizado encuestas a los padres colombianos y parecen estar de acuerdo con la medida, así como los sindicatos, que se han opuesto a regresar a la modalidad presencial, sobre todo teniendo en cuenta que el promedio de edad del magisterio en Colombia se encuentra en el rango de riesgo de complicación de la enfermedad.

Paraguay sufre un cierre total de sus escuelas desde el 11 de marzo. La medida afectó a todo el país y, sin embargo, existían y siguen existiendo varias zonas, sobre todo rurales, donde prácticamente no hay contagiados. Muchos creen que en aquellas zonas las clases presenciales deberían haber continuado.

Por su parte, Uruguay cerró sus escuelas el 17 de marzo, pero las reabrió en junio, primero en las zonas rurales y después en las urbanas. El regreso escalonado a las aulas tuvo en cuenta criterios de edad y relevancia de los cursos.

Los cierres tienen consecuencias graves. Estos países se caracterizan por vivir realidades con mucha desigualdad interna. La pandemia ha evidenciado en mayor medida las brechas sociales. Por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de computadores o teléfonos móviles en casa y el acceso a internet.

Ello ha dificultado que muchos alumnos sigan las enseñanzas alternativas a la escolarización.

En Colombia, por ejemplo, un 22,3 % de instituciones educativas cerraron y no ofrece clases virtuales, y un 21 % de escuelas ofrecen clases virtuales, pero las familias no cuentan con dispositivos para seguirlas. Y en Paraguay solo el 20 % de la población accede a internet desde un dispositivo como un ordenador personal o tableta.

EE UU, Rusia y China

Otros países no han adoptado esa medida de manera tan drástica. Gigantes como EE.UU., Rusia o China nos sirven de ejemplo. Allí, los gobiernos centrales han delegado la decisión en los gobiernos federales y los cierres han sido mayoritariamente parciales, eso sí, con numerosas medidas de prevención, como la toma de temperatura, la ventilación constante de las aulas, la desinfección entre los turnos de clase, la obligación de mascarillas, etc.

¿Qué ocurre en Europa?

También en el entorno europeo el cierre de escuelas ha sido una medida tomada solo durante los momentos más duros de la primera ola de la pandemia. Actualmente, a pesar de medidas de confinamiento social más o menos estrictas, Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido mantienen sus escuelas abiertas.

No obstante, las medidas llevan al cierre temporal de algunos grupos concretos en los que se detecta algún caso de la enfermedad. Los denominados “grupos burbuja” (mantener a los niños en grupos de contacto reducidos) permiten aislar a un número menor de estudiantes cuando un caso aparece.

Aumento de la desigualdad

Es evidente que un cierre de escuelas sin condiciones sociofamiliares adecuadas aumenta la desigualdad. El derecho universal a la educación consagrado en la declaración universal de Derechos humanos y en tantos otros documentos de política educativa supranacional se ve manifiestamente vulnerado para millones de menores. Además, algunos seguimientos epidemiológicos permitirían afirmar que los colegios no son un foco principal de contagio en el caso de menores.

Todo ello reafirma la posición de que no parece adecuado cerrar las escuelas, siempre que se sigan escrupulosas medidas de prevención de contagios y de seguimiento de los casos detectados.

Así las cosas, conviene alertar sobre el riesgo de un colapso en el sistema educativo. Nos hacemos eco del informe mencionado de la UNESCO que nos recuerda que la educación, más allá de un derecho fundamental en sí mismo, es la llave para poder ejercer otros derechos fundamentales. “Cuando el sistema educativo se colapsa, la paz, la prosperidad y las sociedades productivas se hace inviables”.

El autor agradece la colaboración de Guillermo Ramón Ruiz (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Leandro de Campos Caldeirao (Universidad Autónoma de Madrid); Beatriz Macedo (Uruguay); Vanessa Monterroza Baleta (Colombia); Wilson Daniel Palacios García (Colombia); Amanda Fulford (Edge Hill University, Reino Unido); Carmen Tortosa (EE.UU.); María Sokolova (Universidad Estatal Técnica del Don, Rusia); Francisco Javier Giménez Duarte (Universidad Nacional de Pilar, Paraguay); Anton Vorochkov (Universidad Autónoma de Madrid) y Vlademir Marim (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil).

MAGISTERIO

La Concertada expresa a las puertas del Congreso su rechazo a la ley Celaá

Ante la imposibilidad de expresarse en el Congreso, la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, ha promovido una concentración frente al Congreso para mostrar su rotundo rechazo a la ley Celaá.

REDACCIÓN. Viernes, 6 de noviembre de 2020

Durante la concentración, a la que han asistido los representantes de las organizaciones que componen la Plataforma Más Plurales, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la asociación de padres Cofapa, ha leído un comunicado en el que se resumen los porqués fundamentales de la oposición a la Lomloe.

“Una ley que nacerá sin consenso, segregadora, partidista, que condena a la enseñanza concertada a una progresiva desaparición, que impone la enseñanza pública arrebatando a los padres su derecho a la pluralidad, una ley que omite cualquier mejora para los profesionales del sector, que mantienen el déficit de su financiación, que relega la asignatura de Religión, que condena al cierre a los centros de educación especial y que aprovecha la peor pandemia de los últimos cien años para ser aprobada”, según la Plataforma.

Los convocantes se quejan de que esta ley afectará a más de 260.000 profesionales, a cerca de cuatro millones de familias, a más de cinco millones de alumnos que cursan la asignatura de Religión y a más de 9.300 centros de la red concertada y privada.

250.000 firmas contra la ley Celaá

Este ha sido uno de los primeros actos de protesta previstos con motivo de la Campaña “Más Plurales, Más Libres, Más Iguales”, que ya ha recogido alrededor de 250.000 firmas de apoyo pese a las dificultades técnicas que surgieron inicialmente por un ataque informático.

La Plataforma ha convocado también para la tarde, de 18 a 20 horas, una “quedada digital” en Twitter.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, ha trasladado en nombre de su partido el apoyo a la concentración ante el Congreso en defensa del derecho de los españoles a elegir “libremente” la Educación de los hijos y que no se hable de “Pública o Concertada” sino de “Educación plural”. Lo ha dicho Gamarra en declaraciones a los periodistas en la concentración de la Plataforma “Más Plurales, Más Iguales, Más Libres”.

Para la portavoz del grupo popular y diputada por La Rioja no cabe duda de que España lo que no necesita es una “única Educación impuesta por un Gobierno ideologizado”. Gamarra ha afirmado que en la concentración frente a la Cámara Baja también ha querido apoyar a las familias, a los profesionales de la Educación y a toda la comunidad educativa, que defiende el derecho de los españoles a que nadie imponga “a través de la ley Celaá, un único modelo educativo”.

Preguntada por el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Republicano para que la reforma educativa prohíba a los colegios concertados “segregar” por sexo, Gamarra ha insistido en que lo que se está buscando es “atacar” el derecho de los padres a poder elegir la Educación que quieren para sus hijos.

A juicio de la portavoz parlamentaria del PP, la reforma educativa corre “tanta prisa” al Gobierno para “garantizar un acuerdo presupuestario”. “Denunciamos que se está entregando la Educación a cambio de votos para afianzar un presupuesto y los españoles no merecen pagar ese alto precio para que el presidente del Gobierno siga en La Moncloa”. Asimismo, ha criticado que se esté negociando que el castellano no se contemple como la lengua oficial en España y ha recordado que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional si la reforma se culmina.

Docentes y sindicatos piden la prórroga de los contratos por refuerzo Covid

La Plataforma de docentes refuerzo Covid puso en marcha una petición de firmas. Por su parte, los sindicatos defienden que los contratos se mantengan.

DOLORES SÁNCHEZ JAIME Miércoles, 11 de noviembre de 2020

La Plataforma de docentes refuerzo Covid puso en marcha una petición de firmas, a través de *change.org*, con el fin de que los contratos por dicho refuerzo no acaben el 22 diciembre y, por el contrario, se prorroguen para todo el curso 2020-21. Esta demanda está dirigida a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los puntos que demanda el grupo de docentes interinos de la Comunidad encargado de esta iniciativa, los cuales trabajan cubriendo puestos como refuerzo Covid, es que se defina “claramente” dicho trabajo. “No puede ser que seamos meros parches y acabemos desempeñando todo tipo de labores menos la de la docencia. Pedimos instrucciones claras con nuestras funciones”.

De igual modo, manifiestan que su labor “es compensadora de múltiples necesidades que han aflorado durante la pandemia, pero que ya estaban ahí”. En definitiva, “queremos reivindicar el refuerzo educativo como medida de atención a la diversidad, absolutamente necesaria, que debe estar disponible de manera estable para el alumnado que lo requiere. No se puede dejar tirados a estos alumnos a mitad de curso”.

Por ello, ruegan a la Consejería de Educación que recapacite y mantenga los puestos de refuerzo Covid en horario lectivo durante todo el curso escolar.

Sindicato ANPE-Madrid

Desde MAGISTERIO, hablamos con el presidente del sindicato ANPE-Madrid, Andrés Cebrián, el cual consideró que los contratos de los docentes por refuerzo Covid deben mantenerse durante todo el curso.

“Estos profesores fueron contratados, en principio, para reforzar los contenidos que no se habían podido impartir adecuadamente en el último trimestre del curso pasado, debido al confinamiento. Pero la realidad es que, en la mayoría de los centros, han tenido que cumplir otro tipo de funciones: sustituciones, tareas de tutor o especialista, en el caso de Primaria, y guardias u otras labores en Secundaria”.

En este sentido, Cebrián expresó que un alto porcentaje de estos docentes no ha podido dedicarse a atender las carencias que debía subsanar. “En consecuencia, esto sigue siendo una asignatura pendiente en buena medida y, por su envergadura, este cometido no podrá completarse en lo que resta de año”.

Así, desde ANPE-Madrid defienden que se mantenga la figura del refuerzo Covid hasta la finalización del curso. “Es la única decisión que puede contribuir a lograr un objetivo que la propia Administración se ha planteado: asegurar la continuidad del proceso educativo en los centros madrileños con una calidad suficiente para que, en los cursos venideros, este alumnado, que está soportando tan dura situación, no porte, adicionalmente, el estigma de haberlo sido en los tiempos de la Covid-19”, finalizó Cebrián.

Postura de CCOO y UGT

Por su parte, Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO-Madrid, defiende, “sin ninguna duda”, mantener la figura de estos docentes durante todo el año. “La primera razón es que los centros van a seguir teniendo esas necesidades a la vuelta de las navidades. En este sentido, los centros necesitan tranquilidad y seguridad para saber que va a perseverar lo que han planificado”.

En segundo lugar, Galvín expresó que no “hay justificación alguna” para la discriminación que sufren los docentes de refuerzo Covid, “cuando han llegado a los centros con absoluta disposición y se han encargado de tareas que no les competían, es decir, han estado realizando las mismas funciones que todos”.

Así, considera “injusto” que el profesorado Covid, aquel que ha sido contratado para los desdobles y las bajadas de ratios, se mantenga durante todo el curso, pero los docentes de refuerzo Covid sean despedidos el próximo 22 de diciembre.

Por último, desde UGT-Madrid también piden que la Consejería de Educación de la Comunidad prorrogue los contratos. De esta manera, Ricardo Marchand, responsable de Enseñanza Pública del sindicato, explicó a MAGISTERIO: “Hay muchos alumnos que tienen un desfase significativo curricular debido al confinamiento y los refuerzos Covid están actualizando y poniendo al día a esos alumnos. Están haciendo una labor realmente esencial”.

José Saturnino Martínez: “En nuestros sistemas se confunde calidad con cumplir el procedimiento”

Dejó los ‘papers’ de Sociología por los expedientes a la espera de su firma. Y hoy comprueba desde el otro lado algunos de los males de un sistema que lleva décadas analizando.

SARAY MARQUÉS Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Una semana le llevó a José Saturnino Martínez decidirse a abandonar la docencia y la investigación en la Universidad de La Laguna y aceptar el cargo de director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee). “Me costó porque era bastante feliz como profesor de categoría media, como el hombre feliz sin camisa del cuento de Tolstói, pero me pudo la oportunidad de aplicar cosas que llevo 20 años investigando”, relata. Así, desde julio es el máximo responsable de una de las 11 agencias de este tipo que existen en España y que en Canarias funciona como subsección de la Dirección General de Universidades: “Nosotros también somos auditados externamente, no somos Administración. Aunque dependemos del Gobierno de Canarias funcionamos como agencia independiente”.

¿En qué consiste la labor de la Accuee?

—Cuenta con dos facetas que en otras comunidades y a nivel de Ministerio están separadas: evaluación de la calidad universitaria y diagnóstico en no universitaria. En la primera parte, las universidades nos presentan propuestas de nuevos títulos y nosotros se las remitimos a un grupo de expertos evaluadores, que deciden si son viables. En este periodo hemos evaluado ya cuatro títulos en universidades privadas, tres de Educación en la Universidad del Atlántico Medio y uno de Formación en Riesgos Laborales. También hacemos un seguimiento de esos títulos una vez que se implantan, vemos si pueden seguir abiertos, y acreditamos al profesorado universitario para acceder a una determinada plaza. En la segunda parte hay varias patas: somos el organismo que colabora con PISA y otros informes internacionales, nos encargamos de las pruebas de diagnóstico y evaluamos los programas de innovación.

¿Eran necesarios esos cuatro nuevos títulos?

—Esto mismo abordamos en el Consejo Universitario de Canarias: si son necesarias más titulaciones de Magisterio y más universidades que ofrezcan el máster del profesorado. “Ya está cubierto por las públicas”, sostiene la Universidad de La Laguna. Yo políticamente puedo estar de acuerdo, pero como director de la agencia si unos expertos dicen que hay margen, que reúnen unos requisitos, esa viabilidad sale adelante, y no mi voluntad. La agencia es un organismo muy técnico y surge aquí un debate interesante desde el punto de vista de la política universitaria, porque hemos construido un mecanismo ciego a la hora de orientarla.

¿También lo es en la evaluación del profesorado universitario?

—Sí, porque nosotros evaluamos el currículum, con baremos: años de clase, grupos, puntos... El reto de toda evaluación educativa es hacerla sensible a aspectos sustantivos, en vez de un ritual administrativo burocrático. Esto es lo que menos conflictividad genera. A nivel judicial, si hay un problema, sería muy difícil decir “Aquí se enseña mal” o “Este profesor es un inútil”. El juez dirá: “Yo sé de leyes. Haga un reglamento para que la gente lo impugne si no se cumple”. Esto no solo pasa en España. Cuando me nombraron estaba elaborando un **papel** con un compañero argentino y en él veíamos cómo varios países cuentan con modelos muy formalistas de acreditación, en los que se confunde calidad con cumplir el procedimiento. Ahora que estoy dentro estoy viendo qué se puede hacer, pero compruebo que es muy difícil, porque estás muy atado por la normativa.

¿Sería partidario de formar solo a los profesores que el sistema sea capaz de absorber?
—¿Qué tenemos que primar, la demanda del alumnado o la oferta de trabajo? ¿Y si hay gente que querría estudiar Magisterio en la Pública y no puede? Desde la Universidad de La Laguna se decía que dar el visto bueno a más títulos era generar más sobrecualificación. En los informes técnicos se dice: “Canarias tiene aun margen para crecer más en Educación y el informe técnico de la universidad privada cuenta con el visto bueno de los expertos”. La universidad privada alega: “Hay evidencias de que hay margen”. Con el máster del profesorado es muy difícil sostener que no hay margen, cuando tenemos este curso una ley que permite impartir la docencia sin él.

Además, la demanda del sistema no es tan fácil de saber. A mí me gustan los números, pero ojalá el mundo se pudiese llevar con un ordenador. Las planificaciones no son tan fáciles, y hay gente que puede que haga la carrera de Magisterio o el máster y que no necesariamente ejerza la docencia. Puede que se dedique a elaborar materiales didácticos, o a asesorar a un centro... Ya no es aquella épica de las escuelas normales de Magisterio en que acababas y empezabas a dar clase en un colegio. Eso ya no es tan mecánico.

Basar la Educación en la evidencia, ¿tampoco es sencillo?

—Uno de los problemas es que las universidades de Canarias están viviendo de espaldas a la política educativa. Hace tres meses estaba al otro lado, y creo que parte del problema es que no hay un estímulo del Gobierno de Canarias para la investigación educativa. En este tiempo hemos establecido varias líneas de acuerdo con las universidades: sobre financiación del sistema universitario, sobre desigualdad de oportunidades educativas, sobre FP y orientación, y también me gustaría dar un meneo a los centros del profesorado, hacer un diagnóstico y una propuesta, porque creo que ahí tenemos un potencial no bien aprovechado.

¿Cómo unir investigación educativa y política educativa?

—Los compañeros de las direcciones generales nos dicen que la gestión del día a día se come todo en una situación normal, mucho más en tiempos de Covid. Pero hay que sentarse con ellos, ver sus inquietudes, quizá ellos saben qué quieren mejorar pero no saben cómo. Creo que es importante que la investigación sea continuada en el tiempo, y que en el proceso se hagan reuniones entre investigadores y técnicos, desde el primer borrador. A veces se hace investigación sin sensibilidad hacia la gente a pie de obra, y esta la recibe como “una marcianada de la universidad”, y se convierte en un informe que acaba en un cajón. Los investigadores deben tener autonomía, pero debe crearse una cultura de colaboración entre el experto que lee *papers* en inglés y el técnico que quizá sabe que esa propuesta tan interesante del Reino Unido no es aplicable en España.

¿Por ejemplo?

—Los grupos de refuerzo fuera del horario escolar. Para los investigadores es una idea estupenda, pero la gente de Personal puede ver un problema en abrir el centro fuera de horario, cómo se contrata ese profesorado, cómo computan esas horas, la gestión Covid si hay niños de varios grupos de convivencia... y quizá se resuelva que es más fácil contar con un profesor de refuerzo en las aulas.

¿Cómo podría reducirse el abandono educativo temprano?

—En Canarias está en torno al 20%. Hubo una tendencia a la baja y se interrumpió. Creo que el abandono, en vez de afrontarse como problema, debería descomponerse en muchas partes y abordarlas de forma separada. Una es titular o no en ESO, y ahí deben emprenderse políticas educativas para convencer al alumnado de que siga estudiando. Pero hay otra parte de formación para el empleo, de analizar cómo mejorar los programas de formación fuera de la Educación formal. Mi abordaje sobre el abandono está en otro *paper* que estaba preparando antes de venir.

¿Y llevando la Educación obligatoria hasta los 18?

—He visto que se propone a izquierda y a derecha. Gabilondo lo proponía en su día y Francisco López Rupérez, que me parece un tipo muy sensato, lo defiende también. Creo que es algo que está tanto en las enmiendas de Podemos como en las del PP, o sea que es un tema que supera la frontera partidista. A mí no me convence por el fracaso de la experiencia Logse de ampliar la obligatoriedad hasta los 16 con un tronco común. De hecho es algo que me parecía muy interesante y he estado documentándome. En 1970 la Ley General de Educación (LGE) ya hablaba de Educación obligatoria hasta los 16 años, pero no se hizo efectivo. Al acabar a los 14 no se hacía seguimiento de si los alumnos iban a FP, no hubo voluntad o capacidad administrativa de asegurarse que de que tras la EGB se iba a FP o BUP. Hay una orden de 1974 que habla de la Educación hasta los 16 años, lo que demuestra la limitación de las leyes educativas.

La diferencia entre la LGE y la Logse es que la segunda lo hace comprensivo y efectivo. Con la LGE esos dos años se podía estar en Bachillerato o en FP1, con la Logse están todos en el mismo sistema. A mí cuando ocurrió esto me chocaba: ¿Alguien que no titule en la ESO con la Logse no va a poder seguir estudiando? Y eso fue lo que pasó. La Logse, lo he investigado, se lo ha puesto más difícil a alumnado de sectores populares, gente que antes iba a FP1 ahora se veía en la calle, porque la FP era más selectiva, dejaba fuera a gente que sí se podría haber enganchado a través de FP1.

Sobre el dato de cuánta gente está fuera del sistema a los 18, creo que no es tan alto, creo que no hay tanta gente que con 16 sale corriendo, que aun se quedan uno o dos años remoloneando o repitiendo. Es más importante un sistema atractivo hasta los 18 que un sistema obligatorio hasta los 18. Si es atractivo puede

haber un porcentaje residual de alumnado, de un 4 o 5%, que permanezca y requiera un tratamiento diferenciado, porque tiene más dificultades de aprendizaje, o porque es más disruptivo. Ya veremos cómo lo tratamos, porque yo no obligaría a gente en una edad conflictiva a estar en una institución en la que no quiere estar. Soy partidario primero de cambiar la institución y después de cambiar la norma, no al tiempo, porque es lo que se hizo con la Logse y no funcionó. En una situación ideal todos deberían estar formándose a los 18 años, pero el mejor camino es primero transformar el sistema y luego hacerlo obligatorio.

¿Cree que España necesita un organismo similar al 'Education Endowment Foundation'?

—Ya tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una subdirección general. Quizá sería mejor que funcionara como agencia. Creo que es bueno que Canarias tenga un mismo organismo que evalúe todo el sistema, tanto la parte de universitaria como de no universitaria. A mí me complica la vida, porque son ámbitos muy distintos y las repercusiones administrativas son diferentes: Si un centro de Primaria o Secundaria sale mal en la prueba de diagnóstico irá la Inspección y deberá elaborar un plan de mejora. Si a una universidad le digo que no, alguien no hace negocio. La agencia puede influir en la carrera del profesorado o en la capacidad de negocio de la universidad. Desde el punto de vista administrativo las dos son importantes y mejoran el sistema.

Somos una agencia rara, tiene un cariz extraño pero tiene sus ventajas. La agencia, que está en el Consejo Universitario y de FP, tiene además un papel interesante a la hora de integrar mejor la Educación Superior (FP y universidad). Pero nos queda mucho por recorrer. En esto Cataluña está más avanzada. La agencia debe aportar una visión más integrada de todo el sistema.

¿Qué opina de la meritocracia?

—Hay una parte en que sí creo en el mérito. Tengo un discurso que no es el típico de un lado u otro. Yo creo que en la escuela sí hay un reconocimiento del mérito, pero también que ese reconocimiento no opera en igualdad de condiciones. Pero no creo que sea arbitrario. Por ejemplo, el mes de nacimiento influye en los resultados y no tiene nada que ver con el origen social o la procedencia de una minoría. Los pibes que nacen en enero tienen en la escuela más nota que los que nacen en diciembre porque cognitivamente tienen un año de madurez más, algo que con ocho o nueve años es una locura, es mucha diferencia. Este es un elemento que no hay que obviar de la escuela que reconoce el mérito. Y es injusto, porque la escuela no reconoce la diferencia entre personas. No hablo de renta, de clase, hablo de algo biológico que genera desigualdad de resultados educativos.

La escuela construye un discurso a través del mérito porque parte de su trabajo es reconocer el mérito, pero ese reconocimiento está estructurado de forma que reconoce a unos más que a otros. Yo sí creo que el mérito interviene en la mecánica escolar. Por eso me interesa PISA. Y creo, con la sociología crítica, que un reconocimiento tan fuerte del mérito oculta todas esas desigualdades. Si equiparamos diferencia de resultado con diferencia de mérito estamos ocultando que las diferencias sociales introducen diferencias de condiciones. Y, desde luego, vivimos en una sociedad que justifica las desigualdades de partida que existen porque reconoce el mérito. Alguien socialmente pobre lo tiene más difícil. Hay mucha mitología del hombre hecho a sí mismo, de personas con mucho mérito que heredaron un banco, y ese misticismo del mérito tiene algo de crueldad.

El 63% de los padres admite haber condicionado a sus hijos para estudiar una carrera

El 66% de los españoles preferiría que sus hijos estudiaran una carrera universitaria frente al 23% que primaría que estudien Formación Profesional, y el 63% admite que les ha condicionado para estudiar en la universidad.

REDACCIÓN Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Lo concluye el *I Estudio sobre el papel de los padres en la orientación profesional de sus hijos*, una investigación presentada este miércoles y realizada con preguntas a más de 2.000 familias con el objetivo de conocer la visión que tienen sobre su papel como orientadores de sus hijos. El informe ha sido presentado por Dualiza Bankia y Gestionando Hijos, coincidiendo con la Semana Europea de la FP.

El 40% de los españoles orienta a sus hijos basándose en su propia experiencia y el 52% recurre a docentes y orientadores, siendo el segundo canal más utilizado internet (47%). Un 5% reconoce que no se ha informado porque cree que no es necesario hacerlo. Por otra parte, 9 de cada 10 españoles afirma echar en falta más apoyo para orientar a sus hijos, tanto del centro educativo como de la Administración.

Respecto a la FP, el 75% de los españoles piensa que en España seguimos teniendo muchos prejuicios. Aunque cuando se les pregunta directamente si ellos tienen prejuicios, solo el 25% reconoce tenerlos, o cree tenerlos. Un 70% piensa que las personas que estudian FP tienen menos éxito profesional que las que estudian una carrera universitaria. Además, el 63% de los padres reconoce haber condicionado a sus hijos

para que estudien una carrera universitaria, y un 65%, además, cree que las empresas valoran más positivamente las carreras universitarias que la FP.

El estudio ha destacado que estos datos “chocan con la realidad”, pues, según Adecco, las ofertas para técnicos de FP superaron el pasado año a las de universitarios, o el de la Fundación Bankia con Fundación SEPI, donde se constata que las empresas que cuentan con técnicos FP son más innovadoras, competitivas y productivas.

EL DIARIO de la EDUCACIÓN

El 89 % de la concertada cobra cuotas mensuales, según un estudio de CEAPA y CICAIE

Desde hace un par de cursos, la confederación de familias de la pública y la asociación de colegios privados, vienen realizando estudios sobre las cuotas que se cobran en centros concertados por medio país. En esta edición, han realizado su investigación en ocho comunidades. El 89 % de los centros estudiados obligan, de una manera u otra, a pagar cuotas mensuales. Solo un 11 % afirma que no hay que pagar estas cantidades. La ley dice que son ilegales.

REDACCIÓN. 11.11.2020

«No es obligatoria, pero todo el mundo la paga y viene bien». Esta podría ser una de las explicaciones que una familia recibe durante el periodo de matriculación en un centro educativo concertado. Es, de hecho, una frase que recoge el estudio de CEAPA y CICAIE, elaborado por Garlic B2B, empresa con la que vienen trabajando en este tipo de estudios desde el curso 2018-2019.

Nuevamente, los centros concertados (se ha hecho el informe con datos de 336 de ocho comunidades), aparecen en el punto de mira. Casi la mitad obligan al pago de una cuota mensual no adscrita a actividades como extraescolares, comedor o transporte. Es lo que se conoce como la famosa cuota voluntaria que, en estos casos, no lo es.

El informe se ha realizado durante la primavera pasada, a través del teléfono o por videoconferencia con los centros, con la metodología de hacerse pasar por una familia que busca plaza en algún centro concertado. Salvo en el caso de los centros catalanes, a los que se inspeccionó en el mes de noviembre de 2019.

El estudio recoge que un 10 % de la muestra realiza algún tipo de política de discriminación hacia el alumnado cuyos padres no abonan la cuota mensual. Normalmente, tiene que ver con la imposibilidad de que el niño o la niña participe en una actividad concreta (actividades extraescolares en horario lectivo, hora de comedor, etc.), de manera que obligan a las familias a recoger al alumno durante ese tiempo para que no quede sin vigilancia. Cabe destacar, según informan las organizaciones que hacen el estudio, que en la Comunidad de Madrid, este porcentaje es realmente del 28 % de centros que ejercen algún tipo de exclusión. En el resto de las autonomías, los porcentajes son muy bajos (un 2 o un 3 %) o inexistentes.

A este porcentaje se suma un 35 % que no excluye, pero que informa a las familias de que el pago de esta cuota, no adscrita a una actividad concreta, no es voluntaria, sino obligatoria, pues de ella se detraen fondos para pagar la actividad cotidiana del centro. En este grupo de centros, también hay importantes diferencias autonómicas. Mientras que en Cataluña o País Vasco esta obligatoriedad se da en más del 80 % (95 y 81 % respectivamente), en Aragón solo ocurre en el 11 % de los centros consultados.

Frente a estos datos se encuentra el 44 % de los centros que, preguntados por la obligatoriedad de este pago, informan a las familias de que no es condición *sine qua non*, aunque se agradece y ayuda a sostener el proyecto educativo concreto del centro. Según explica Amparo Núñez, directora del estudio en Garlic, estos mismos centros ejercen posteriormente algún grado de presión para que las familias acaben por pagar lo que se les pide. Nuevamente, las diferencias territoriales son muy importantes. Mientras que en Cataluña solo el 2 % de los centros asegura que no hay problema si no se paga la cuota, en Aragón lo hacen el 67 % de los colegios.

Quedaría un 11 % hasta la totalidad de centros investigados. En este caso, no informan a las familias de ninguna manera sobre las consecuencias o no que tendría el no pago de estas cuotas.

Una de las mayores diferencias con respecto a los estudios de años anteriores, además de incluir a varias comunidades autónomas en esta edición, es el aumento, al menos en el caso de Madrid, de la voluntariedad de pago de estas cuotas. En la edición del año pasado, el estudio puso el foco en lo que se conoce como «nueva concertada» y que, fundamentalmente, está sustentada por empresas sin ninguna o muy poca experiencia en el sistema educativo pero que han conseguido importantes conciertos en esta comunidad autónoma. Cuando este año, la muestra ha tocado la puerta de centros concertados sustentados por entidades de mayor trayectoria, la voluntariedad en el pago ha aumentado.

Transparencia

Además de la recogida de información sobre las cuotas «voluntarias» que se cobran en la totalidad de los centros concertados consultados, CEAPA y CICAIE han querido destacar en su informe la falta de transparencia de la información que, en general, aportan los centros a las familias en relación a pagos por servicios.

Los colegios no se lo ponen nada fácil a las familias. O bien nunca terminan de dar toda la información que se les pide, o no la recogen en un documento que les hagan llegar. O, incluso, cuando sí lo hacen, este no tiene membrete ninguno del centro educativo.

De hecho solo el 45 % de los 336 centros ha facilitado documentación relativa a la cuantía de las cuotas complementarias, aunque muchos no han actualizado la información con respecto a la del curso 2019-2020.

A esto se suma que buena parte de la muestra no facilita información clara sobre horarios o qué tipo de actividades se realizan bajo el paraguas de estas cuotas complementarias, de manera que solo el 22 % especifica qué, cuándo y a qué precio.

Enorme variedad de precios

Los precios de estas cuotas, como no podría ser de otra manera, son muy dispares de unos territorios a otros. El precio más elevado de la cuota complementaria lo han encontrado los investigadores en Cataluña, en el colegio St. Paul's que, según explican, cobra 950 euros al mes por diferentes servicios (el año pasado era de 860 según los datos del mismo estudio). En las antípodas están los centros concertados en los que esta cuota complementaria es de cero euros mes.

De cualquier manera, según han recabado CEAPA y CICAIE, el 90 % de los centros consultados cobran algo de dinero, siendo Madrid, Cataluña y País Vasco comunidades en las que ese porcentaje es del 100 %.

La cuota promedio de lo que se cobra, está más o menos cerca de los 60 %, una cifra que esconde importantes diferencias, ya que, por ejemplo, en Cataluña, el promedio mensual es de 225 %. Y, en cualquier caso, en todas las comunidades hay centros que cobran más de 100 % mensuales a las familias.

Los centros que más cobran, sostienen las organizaciones que han contratado el estudio, además, limitan la posibilidad de no pagar o reducir lo que pagan a través de una más o menos compleja estructura de cobros. Por ejemplo, la cuota se condiciona a los servicios contratados. Es decir, que si yo no quiero que mis hijos vayan al comedor, la cuota será igual porque el previo de los otros servicios que sí quiero que utilicen, como las extraescolares, ascienden. A esta fórmula se le unen otras como la creación de packs para cobrar varias actividades en un conjunto. Si estas mismas actividades se quieren pagar por separado su precio asciende por encima de la cuota.

Finalmente, en Cataluña y País Vasco, ebn no pocos centros también se cobra una cuota a la entrada de los estudiantes en los centros. Un pago que puede ir desde los 100 euros hasta los 3.000.

Aquí puede consultarse el [resumen ejecutivo del informe](#) de CEAPA y CICAIE.

La mala calidad del aire en los centros educativos

Hace unas semanas se presentó un informe que ha monitorizado la calidad del aire en las aulas de los centros educativos. De media, solo el 16 % del tiempo que pasa el alumnado y el profesorado tiene la calidad óptima. Para determinar esta proporción se han tenido en cuenta la temperatura en el interior de clase, la humedad relativa y la cantidad de CO2.

Pablo Gutiérrez de Álamo. 12/11/2020

En los últimos meses todo el mundo (o casi) ha oído hablar de los filtros HEPA, de la concentración de CO2 en el ambiente, de la importancia de la ventilación (cruzada, sobre todo) para mantener a raya el aire respirable o lo que son los aerosoles y lo «peligrosos» que pueden ser en el contagio de la Covid-19.

Pero nada de esto es nuevo. Prueba de ello es Proyecto de monitorización de colegios, realizado y publicado por la asociación PEP. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que responde a Plataforma Edificación Passivhaus. ¿Y? Este **passivhaus** hace referencia a un estándar de construcción o rehabilitación de edificios y, dicen sus defensores, que es uno (si no el más) estricto de los estándares.

El caso es que durante el curso escolar 2017-2018, estuvieron recogiendo muestras de centros educativos públicos y concertados, de casi todas las provincias (fueron 36 centros en total); una muestra que, asegura su presidente, Bruno Gutiérrez, no es del todo aleatoria y ha pretendido responder a diferentes tipologías. Además de las comentadas, también hay centros más o menos antiguos y más o menos modernos, de grandes ciudades y de poblaciones pequeñas, en climas fríos y cálidos. Ninguno aprueba en todo el país, da igual en qué lugar se encuentre.

El estudio, que cuenta con 700.000 mediciones tomadas, se ha centrado en tres factores clave para el confort en las aulas: temperatura interior, humedad relativa en el aula y niveles de CO2 en el aire. La primera debe

encontrarse entre los 20 y los 25 °C; la segunda, entre el 40 y el 60 % y, en el último caso, la medición óptima es de 800 ppm (partes por millón), aunque no sería un problema que alcanzasen las 1.000 ppm. Es en este punto en el que solo el 16 % del tiempo en el aula (en la media) es de auténtico confort. El resto, o fallan temperatura y humedad o falla el CO2.

Entre los datos más relevantes se encuentra que, de media, solo el 16 % del tiempo todos los factores están en el lugar óptimo. Si solo se atiende a la temperatura y la humedad relativa, este porcentaje sube al 68 %; si se mira únicamente al nivel de CO2, este porcentaje se reduce al 32,4. Los porcentajes de calidad óptima del aire oscilan, según los climas del territorio, entre el 11,49 % y el 20,54 %.

Cuando a primeras horas de la mañana todavía la calefacción no ha obrado el milagro, hay centros en los que en ciertos meses las clases comienzan a 15 °C. Con una buena medición de humedad relativa y, desde luego, muy por debajo de los 800 o 1.000 ppm de CO2.

A lo largo de la jornada, cuando la temperatura en el aula se va volviendo vivible gracias a la calefacción y a la ocupación de las aulas por alumnado y profesorado, los niveles de CO2 comienzan a subir, más o menos rápidamente, hasta que se alcanzan niveles muy superiores a las 1.000 ppm. Por encima de los 3.000 y, en algunos casos, de los 4.000 ppm.

Falta de concentración, cansancio, dispersión o, incluso, cefaleas se encuentran entre los problemas causados por un excesivo nivel de CO2 en el aire en un interior. Da igual que sea un aula o una oficina. Enrique Bassat, pediatra y epidemiólogo asegura que la exposición a este gas tendría que ser mucho mayor para provocar problemas importantes a medio o largo plazo en chicas y chicos, para ser realmente tóxico. Pero, esos síntomas primeros, dice, «impactan a largo y medio plazo en el rendimiento de los niños». Aunque asegura que no existen estudios sobre la relación causal entre estos niveles de CO2 y los resultados académicos.

La medición del CO2, recomendada por el Ministerio de Sanidad y que algunas comunidades autónomas se plantean realizar en los centros educativos de sus territorios, no solo es un buen indicador sobre el nivel existente de este gas en el aire que respiramos, sino que en general, nos da una foto de la necesidad de ventilación de un espacio. Ventilación que puede ayudarnos a quitarnos de enmedio a la Covid-19, al CO2 y a una larga lista de partículas que flotan en el aire y que pasan desde el polvo hasta los adhesivos o barnices utilizados en la fabricación del mobiliario escolar. De ahí la importancia de conocer estos niveles.

Qué recomiendan

Desde la plataforma PEP apuestan por una importante inversión en la rehabilitación de los edificios educativos. Existen en el registro de centros unos 28.000 en todo el país, entre públicos y privados. Tienen claro que esta acción no puede hacerse de golpe y que supone una intensísima inversión que no es posible en todos los casos. Pero si se plantea a medio y largo plazo, supondrá importantes ahorros en costes como el de las calefacciones. Además, significaría un gran ahorro en la emisión de CO2 a la atmósfera. Y, en definitiva, mejoraría, por lo menos, la calidad del aire que respiran alrededor de 8 millones de estudiantes de todas las etapas educativas.

En estas rehabilitaciones totales, el presidente de PEP, afirma que habría que realizar acciones de aislamiento de los edificios con el exterior (paredes, carpintería, etc.) e instalación de mecanismos de ventilación mecánica con recuperación de energía (de calor o frío en cada caso), principalmente.

Se pueden hacer algunas de estas acciones por separado, asegura Bruno Gutiérrez, pero tendría una menor efectividad y podría generar efectos no deseados. Ejemplifica con la posibilidad de instalar aislamientos en las fachadas y no intervenir en la carpintería y la cristalería de las ventanas y las puertas. Explica la posibilidad de que, haciendo esto, se genere un mayor nivel de condensación, lo que podría provocar la aparición de moho, cuyas esporas no deben ser respiradas.

Quitando las posibilidades más peligrosas, lo que pretende explicar es la importancia de poner estos proyectos globales en marcha por las ventajas que suponen. Según los cálculos que han realizado mejoraría la eficiencia energética de los edificios hasta el punto de que el coste por metro cuadrado de la calefacción sería de un euro. En palabras de Pedro Mariñelarena, vicepresidente de PEP, en la rueda de prensa de presentación del informe, podría suponer ahorros de unos 30.000 euros anuales para los centros educativos. Solo hay que multiplicar esta cifra por los 28.000 centros existentes. Cientos de millones de euros que podrían invertirse en otra cosa.

Desde PEP propugnan por la utilización de ventilación mecánica con recuperación de energía (de calor o frío, según el caso). Se trataría, por una parte, de obtener aire del exterior del edificio, por un solo conducto, que se repartiría por todas las estancias. Al mismo tiempo, el aire de los interiores haría el viaje inverso, renovándolo y haciendo que las partículas más o menos problemáticas (en estos tiempos, la Covid-19) salieran. En un punto del camino de entrada y salida, explica Bruno Gutiérrez, ambos flujos se cruzarían (sin mezclarse), de manera que el de salida aportara calor al de entrada. Este sistema, asegura, supone la recuperación de entre un 80 y un 90 % de la energía (calor o frío).

Bassat tiene claro que acometer estas transformaciones es complicado y caro, y plantea la posibilidad de que las administraciones realizasen programas relativamente similares al renove que muchas ciudades han realizado a lo largo de los años para la rehabilitación de fachadas y edificios antiguos.

En este sistema de ventilación mecánica es posible instalar filtros de aire con los que eliminar, en su caso, partículas y agentes infecciosos y sería más eficiente que la colocación de filtros HEPA en todas las aulas.

Estos funcionan haciendo circular el aire continuamente en una estancia y filtrándolo lo que, según los defensores de la ventilación mecánica, podría dar lugar a que no se filtrase todo el aire.

Experiencia

En España, el colegio El Garrofer, en Viladecans (Barcelona) ha realizado una rehabilitación siguiendo las prerrogativas de **passivhaus**. No solo eso, el Ayuntamiento de la localidad pidió un monitoreo de la calidad del aire después de la obra, y también del nivel de consumo de electricidad y gas.

Los datos, recogidos en la página web de Energihaus son impactantes. Se ha realizado en seis de los espacios: cuatro aulas, la biblioteca y el comedor de la escuela. Según sus mediciones, anteriores y posteriores, se ha conseguido un ahorro de un 90 % en el consumo de gas para calefacción tras las obras de rehabilitación. Eso sí, con un ligero aumento del consumo eléctrico, de un 5 %, debido al sistema de ventilación controlada instalado, aunque insisten en que con algunas calibraciones se pueden conseguir importantes ahorros también.

ESCUELA

Aprovechar la FP para hacer frente a la pandemia. EDITORIAL

Apostar por la Formación Profesional (FP) nos hará un país más competitivo. De hecho, la FP Dual (el 50% del curso se desarrolla en la propia empresa) podría convertirse en un instrumento favorecedor de la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico en España, siempre y cuando se potencie y se dote de una financiación suficiente.

Los esfuerzos se están poniendo para crear más familias de títulos y para otorgar el prestigio que se merece esta modalidad formativa, pero los cambios van lentos. España presenta una tendencia de crecimiento constante de la matriculación de alumnos desde el curso 2007-08 a la actualidad. A pesar de la pandemia sanitaria y de haber realizado las prácticas obligatorias de manera telemática, durante el curso anterior el alumnado matriculado en enseñanzas de Formación Profesional se incrementó. De hecho, ha subido en los últimos cinco años un 19,8%, según la Estadística del Alumnado de Formación Profesional para el curso 2018-2019 publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tras la avalancha de universitarios y desempleo existente para los que tienen estudios superiores, la OCDE ha defendido reiteradamente la necesidad de aumentar el número de titulados en FP porque las previsiones de empleo indican que cerca de dos tercios del crecimiento del empleo se producirá en las categorías de técnicos y profesionales para los próximos años.

Aún con la pandemia, la FP sigue siendo una valiosa herramienta para paliar el desempleo juvenil y acercar a los estudiantes el desempeño de su profesión en un entorno de trabajo real

El castellano dejará de ser lengua vehicular: ¿cambio o vuelta a la normalidad?

Mar Lupión

El proyecto de ley de la LOMLOE avanza en trámite parlamentario y se someterá esta semana al escrutinio de las Cortes. A su paso, va generando fobias y filias por igual. La última, en relación con el idioma: la llamada «Ley Celaá» no incluye en su texto que el castellano sea la lengua vehicular de la enseñanza. Se establece que las administraciones tienen la obligación de garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza «en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable». Es decir, cabe la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan cuál es la lengua vehicular de la región en el ámbito de la educación.

Esto supone un cambio con respecto al texto inicial, donde se indicaba que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios». Además, señalaba que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». Unas definiciones que ahora no aparecen.

La enmienda sobre el castellano ha recibido 26 votos a favor, los de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña; 16 en contra, los del Partido Popular, Ciudadanos y Vox; y la abstención del Partido Nacionalista Vasco.

Aquellas formaciones políticas que se han manifestado su oposición a este punto han anunciado que interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional. Consideran que se pone en peligro el uso del castellano en las aulas. Es más, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que la formación va a impulsar una campaña de recogida de firmas contra la LOMLOE. Defiende que el texto «no garantiza la libertad de elección por parte de los padres, la calidad de la educación, ataca a la concertada y a la educación especial, a la vez que sepulta el valor del esfuerzo».

Lo cierto es que fue en la ley actual, la LOMCE o «ley Wert» donde se incluyó, por primera vez en democracia, que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable». Antes de esta ley, tampoco se concretaba que el castellano fuera la ley vehicular de la enseñanza.

Preocupación en ciertos sectores de la comunidad educativa

Pero, ¿qué es una lengua vehicular? Si consultamos con el Instituto Cervantes, es aquella «que se emplea como vehículo de comunicación en una comunidad de habla donde existe más de una lengua posible. Dicho de otro modo, es la lengua de intercomunicación entre distintos colectivos lingüísticos».

Sea por un motivo u otro, esta enmienda de la LOMLOE no ha dejado indiferente a nadie y, en los últimos días, se han escuchado voces tanto a favor como en contra de la medida.

El sindicato ANPE ha sido uno de los colectivos que han expresado su rechazo a la enmienda. Ramón Izquierdo, secretario estatal de Política Sindical nos explica que la ausencia del castellano como lengua vehicular en el proyecto de ley «es negativa y no la terminamos de entender. Es algo que se incluía y aparecía en el documento original de la LOMLOE y no llegamos a entender que ahora no se asegure. Estamos hablando de un derecho constitucional que se va a contemplar aparezca o no en la Ley, pero no entendemos por qué se ha quitado. Consideramos que esto puede dar pie a que el castellano desaparezca como lengua vehicular en las autonomías en las que se hablan dos idiomas y solo se use la lengua cooficial de dicha región». Señala, además, que esto puede suponer un perjuicio para familias y profesores: «va en contra de la movilidad del cuerpo docente. Somos un cuerpo estatal, tenemos movilidad por todo el país. Lo vemos con mucha preocupación».

Sobre la posibilidad de emprender medidas legales en contra de esta medida, Izquierdo señala que primero «queremos que el Ministerio nos informe de estas medidas y queremos ver también el desarrollo de la Ley Orgánica. Cuando tengamos los reales decretos de currículo, que marcan el currículo básico para todo el Estado, veremos si esta cuestión se termina desarrollando o no. También hay que ver lo que haga cada Comunidad Autónoma al respecto. Si no se respeta la Constitución es perfectamente recurrible ante el Tribunal Constitucional», advierte.

Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) tampoco ve con buenos ojos que no se hable del castellano como lengua vehicular. A través de un comunicado, señalan que esta alteración «no es menor» y señala que los partidos que han votado a favor de la enmienda «son los mismos que en su día aprobaron la Ley de Educación de Cataluña en la que, con detalle, se dispone explícitamente que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo».

Insisten en que a PSOE, UP y ERC «les incomoda que la perseverancia de muchos padres y madres haya hecho posible que los Tribunales reconozcan también el carácter de lengua vehicular de enseñanza al castellano en la escuela catalana y quieren acabar con la posibilidad de que los alumnos reciban las enseñanzas en este idioma también». Los acusan tener «empeño en achicar el régimen de bilingüismo integral en la escuela» y de querer «reducir el espacio de esta lengua a simples enseñanzas» ya que, según defienden, «la reforma, en los términos propuestos, pretende acabar con el modelo de conjunción lingüística y perpetuar el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán».

Una enmienda que supone «la vuelta a la normalidad»

En FeSP-UGT contemplan con cierta incredulidad el revuelo generado en torno a este asunto. Consideran que la medida aprobada es «un tema polémico que no interesa demasiado en los centros educativos», nos dice la secretaria del sector de enseñanza, Maribel Loranca. Creen que «los centros y los trabajadores de educación en general están esperando una ley que cambie, que proporcione más medios materiales y humanos». Loranca señala que la aparición del castellano como lengua vehicular «se dio en la LOMCE. Es una polémica sobre algo que para nada va a afectar a la situación actual. La Constitución y los Estatutos de Autonomía son muy claros al respecto. España es una realidad plurilingüística y de lo que se trata es que los estudiantes de las comunidades con más de una lengua oficial acaben la etapa obligatoria con competencias en ambas lenguas al mismo nivel, que sean bilingües. Eso es lo que hay que garantizar». También nos cuenta que «los compañeros de territorios con lenguas cooficiales hablan de que esto es una vuelta a un modelo que lleva funcionando 40 años y, en su mayoría, no ven el problema, es una vuelta a lo que indicaba la LOE. La situación en las escuelas no va a cambiar».

En la misma línea se expresan desde la Confederación Sindical Galega CIG-Ensino. Suso Bermello, secretario nacional tiene claro que la LOMLOE «recoge lo que en Galicia debería ser una realidad. Entendemos la polémica únicamente desde la perspectiva partidista de la derecha y la ultraderecha. En realidad, lo que dice simplemente es que, en aquellas comunidades con lengua cooficial, decidan cómo deben garantizar el derecho

de todos los ciudadanos a expresarse en los dos idiomas. Creo que es algo que a nadie le debería resultar chocante, sino más bien lo contrario. Es un ejemplo de la riqueza cultural que hay en nuestro país».

Bermello incide en que «lo que queda tras la eliminación del castellano como lengua vehicular es una realidad que en Galicia está vigente desde 1985, con la Ley de Normalización Lingüística de Galicia. Lamentablemente, en nuestra comunidad, la escuela no es un elemento de galleguización». Lamenta que el gallego, actualmente «es una lengua minorizada, que no minoritaria. El propio Consejo Europeo, es decir, no hablamos de una posición partidista ni nacionalista, recriminó a la Xunta las limitaciones que nuestra legislación tiene sobre el gallego. Se ha prohibido, incluso, que se emplee este idioma en las clases de Matemáticas, de Física y Química y de Tecnología en Secundaria; y de Ciencias Naturales en Primaria. Esto ha supuesto que solamente un 25% del alumnado menor de 16 años afirme tener capacidad para expresarse correctamente en gallego. Hablamos de una cuarta parte de los estudiantes que deberían tener, como mínimo, la misma capacidad para hablar en los dos idiomas y, a partir de ahí, puedan elegir en qué idioma expresarse».

Tranquilidad también en la Federación d'Associacions de Mares y Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), la federación con más representación en esta Comunidad Autónoma. Lidón Gasull, su presidenta, cree que «ha habido un poco de confusión y creo que se ha interpretado mal. Lo que se plantea es volver a lo que teníamos antes de la LOMCE». Aclara que «el hecho de que el catalán sea la lengua vehicular en la enseñanza no significa que no se enseñe castellano, eso es una obligación que hay en el currículo y es una competencia que todos los estudiantes han de adquirir para finalizar la etapa educativa obligatoria. Esto es solo volver a la situación que teníamos antes de la Ley Wert».

Desde la FAPAC ven bien lo que recoge la LOMLOE al respecto puesto que, a su juicio «es un sistema que siempre habíamos seguido desde que se inició el proceso de inmersión lingüística, los acuerdos que hubo en los años 80 y que han funcionado bien. Los alumnos terminan con la competencia de castellano sin ningún problema, es más, el problema se generó con la LOMCE que, de alguna forma, creó muchísima tensión. Quiero insistir en esto, que el catalán sea la lengua vehicular en la escuela no significa que no haya una obligación de enseñar castellano. Hay que salir con plenas competencias. Es volver a una situación anterior que nunca había generado problema».

El modelo de País Vasco y Navarra

En el País Vasco y Navarra existe un sistema lingüístico por el que en las escuelas se aplica uno de estos tres modelos: el A, en el que el español es la lengua vehicular de la enseñanza; el B, en el que existe la misma proporción de euskera que de castellano; y el D, en el que el euskera es la lengua vehicular. Con esta información presente, Ana Pérez, portavoz de STEILAS Euskadi, nos asegura que «todas las evaluaciones dicen que, a los 16 años, tanto los alumnos del modelo D como de los otros modelos salen de la obligatoria con las mismas competencias en cuanto al conocimiento del castellano».

La enmienda de la LOMLOE aprobada no genera mayor problema. Nos cuenta que «lo que pedimos aquí desde hace mucho tiempo es que se superen los modelos lingüísticos. Está demostrado que el mantenimiento del modelo A en la pública sigue siendo un elemento segregador. En los centros con este modelo se puede ver claramente que terminan siendo centros segregados. La propia comunidad educativa pide que se supere el A y se pase al B o al D. Así garantizamos una escuela mucho más inclusiva y una competencia lingüística equilibrada». Añade que «en las evaluaciones se dice que la competencia en castellano no se pierde, aunque no sea lengua vehicular porque hablamos de un entorno en el que el empleo de esta lengua tiene un nivel de superioridad con respecto al euskera».

Los PGE recogen 6.000 millones de euros para educación

Daniel Martín

En unas agitadas semanas marcadas en lo educativo por las numerosas polémicas generadas por el contenido de la Ley Celaá, que irrita a diversos sectores de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha anotado un punto con la partida destinada a Educación dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Congreso debatió este miércoles las siete enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, que fueron rechazadas, por lo que se podrá continuar con la tramitación parlamentaria de las Cuentas. «El proyecto presupuestario es magnífico, son presupuestos para la transformación que van a apuntalar el Estado de bienestar, modernizar el sistema productivo y merecen el respaldo de todas las fuerzas políticas», defendió al respecto la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, el miércoles en la Cámara Baja. En ese foro, la titular de la cartera educativa también consideró que «el presupuesto es merecedor, por sí mismo, de enmiendas parciales, pero la educación merece un respeto, es autónoma, ese es el ambiente en el que tenemos que trabajar y no tiene mucho que ver con lo que significa el debate presupuestario», en referencia a las críticas de la oposición.

Celaá: El Ministerio está «liderando un proceso de modernización y transformación»

El apartado de Educación del proyecto de presupuestos del MEFP crece un 139% respecto a enero de 2020, lo que supone el mayor incremento de la historia.

En total, la partida contempla 5.697 millones de euros. Esta cantidad supone 3.317 millones de euros más que los 2.380 de los que se partía en 2019. Esta inversión incluye, además, 1.853 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por lo que el Estado aporta directamente solo los 3.845 millones de euros restantes, de ahí el crecimiento tan abultado.

La de Educación es la quinta área más beneficiada dentro de estos presupuestos, según la documentación del Gobierno, que le otorga un 6,8% del total del PGE, solo por detrás de la Industria y Energía, el I+D+i y la digitalización, las infraestructuras y los ecosistemas resilientes y la sanidad. Además está por encima de otras áreas como el acceso a la vivienda y la edificación, el comercio, el turismo y las Pymes o el fomento del empleo. Por Ministerios, también el de Educación es el quinto mejor parado dentro del reparto de los fondos europeos, solo por detrás de los de Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para Celaá, «el Ministerio de Educación y FP está liderando un proceso de modernización y transformación del sistema educativo», según apuntó en otra comparecencia hace unos días, en la que incidió en que para ello cuenta con «un incremento presupuestario sin precedentes que convierten los compromisos en realidades».

«Nunca había existido un incremento de esta magnitud. La prioridad que este Gobierno da a la educación está en las antípodas de los recortes y el abandono que sufrió el sistema educativo tras la crisis financiera de hace una década», abundó la ministra.

Equidad, 0-3 y becas, las claves educativas de los PGE

De este importe de casi 6.000 millones de euros en Educación, la mayor parte se destinará a un triple objetivo, según el Gobierno: la promoción de la equidad, —a través de las becas y ayudas al estudio, la ampliación de la educación de 0 a 3 años y la prevención del abandono escolar—; la digitalización de la educación; y el impulso a la Formación Profesional, tanto del sistema educativo como para el Empleo. «Una parte importante de este esfuerzo corresponde a las becas y ayudas al estudio, para las que se destinarán 2.090 millones, el mayor presupuesto habido hasta ahora. Con esta inversión, que supone un incremento de 515 millones, el Gobierno sigue adelante con su reforma del sistema para garantizar la igualdad de acceso a la educación», avanzaba el Ministerio en una nota de prensa. Respecto a la etapa de 0 a 3 años, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de los PGE, señalaba hace unos días que se destinan otros 200 millones de euros para impulsar la educación de 0 a 3 años, «imprescindible» para la conciliación y el «desarrollo de los niños y niñas al máximo de su capacidad». Con estos 200 millones se crearán 21.794 plazas de Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública. «Está demostrado que cuanto antes se incorpora el alumno al sistema educativo, mayor capacidad de rendimiento tiene a lo largo de su vida académica», apuntó Montero.

REPARTO FONDOS EUROPEOS POR MINISTERIOS

| Secciones | IMPORTE |
|---|----------|
| Mº DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 127,62 |
| Mº DE JUSTICIA | 27,74 |
| Mº DE DEFENSA | 25,00 |
| Mº DEL INTERIOR | 6,25 |
| Mº DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 4.982,35 |
| Mº DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | 1.852,55 |
| Mº DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 1.167,48 |
| Mº DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 1.708,00 |
| Mº DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 406,50 |
| Mº DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA | 239,87 |
| Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 6.805,22 |
| Mº DE CULTURA Y DEPORTE | 206,29 |
| Mº DE SANIDAD | 2.943,99 |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | |
| Ayuda a la Recup. Para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) | 507,99 |
| Mº DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 2.436,00 |
| Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN | 3.653,69 |
| Mº DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | 1.101,73 |
| Mº DE IGUALDAD | 916,85 |
| Mº DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | 48,59 |
| Mº DE UNIVERSIDADES | 183,67 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 203,90 |
| TOTAL MRR+REACT-EU | 27,00 |
| TOTAL MRR | 26.634 |
| TOTAL REACT-EU | 24.198 |
| | 2.436 |

Por su parte, el departamento dirigido por Celaá también tiene a la equidad como un objetivo clave, por lo que anunció en una nota de prensa que se destinarán 2.407 millones de euros para tratar de fomentarla. Asimismo, incidió en que el objetivo de equidad supone también seguir trabajando en la prevención del abandono escolar, por lo que se destinarán 30 millones de euros a la creación de 618 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable, con el objetivo de luchar contra el abandono y mejorar los resultados educativos.

Reducción de la brecha digital en tiempos de coronavirus

Otro de los puntos clave para el Ministerio, la digitalización de la educación, más si cabe en tiempos de pandemia, que requiere un necesario refuerzo de la educación online, tendrá un presupuesto de 1.018 millones de euros.

Se otorgará «en colaboración con las Comunidades Autónomas», a las que se entregará 250.000 dispositivos móviles adicionales, que se suman a los 500.000 equipos previstos por el Plan de Educa en Digital, «con el fin de reducir la brecha digital de acceso del alumnado, y que contará con una inversión de 150 millones de euros». Asimismo, el Ejecutivo plantea 827 millones para la instalación de 236.318 Aulas Digitales Interactivas y otros 31 millones para la capacitación y soporte para el uso de los Sistemas Digitales Interactivos (SDI) en las aulas. En este sentido, en el último informe PISA, de 2018, se reflejaba que en nuestro país hasta un 9% de los estudiantes (unos 543.000) no contaban con ningún ordenador en casa. Asimismo, la Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros educativos no universitarios, elaborada por el departamento de Celaá durante el curso 2018-2019, reflejaba que en los centros escolares había solo un terminal destinado a tareas de enseñanza por cada 2,7 alumnos matriculados, por lo que el Ejecutivo ve imprescindible este refuerzo tecnológico.

Acción contra la «emergencia educativa»

Este mismo martes, el Consejo de Ministros validaba los criterios de distribución acordados por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 21 de octubre, por los que el Ministerio distribuirá otros 20 millones de euros entre Comunidades Autónomas del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, PROA+, «en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia de la covid-19», como destacaba el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez en un comunicado.

Estos fondos, «destinados a ayudar al alumnado más vulnerable», se suman a los 40 millones ya aprobados por el Gobierno central en julio. La ministra de Hacienda detalló que casi 1.000 millones se destinan al Plan Educa Digital, para «reducir la brecha digital y capacitar al profesorado en estas competencias». Asimismo, el Gobierno prevé invertir otros 125 millones de euros en 1.800 centros «de especial complejidad educativa», a través de este mismo programa. «Que todo aquel que tenga talento pueda estudiar y que no tenga requerimientos añadidos sobre su situación de renta, que los profesores tengan las competencias correspondientes para ir adaptando el sistema educativo a la digitalización, y que seamos capaces de hacer un seguimiento abandono escolar para que sea una cifra que vaya reduciéndose de forma paulatina», defendió Montero.

La inversión dentro de PROA+ será distribuido entre las comunidades autónomas «para que puedan atender las necesidades educativas del curso escolar 2020-2021, consecuencia de la emergencia sanitaria, en función de la evolución de la pandemia y de las características y singularidades de los centros educativos, del profesorado y del alumnado», según informó a su vez Educación, que especificó en un comunicado al respecto que el criterio de distribución entre las autonomías se ha establecido atendiendo al «número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ponderación de 50%); el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (20%); la tasa de idoneidad a los 15 años (20%) y la dispersión de la población (10%)». En el reparto por autonomías, Andalucía será la más beneficiada, con más de 2,6 millones de euros, seguida de Cataluña, con casi 2,3 millones, y la Comunidad de Madrid, con casi 2, las más pobladas. Sin embargo, otras regiones mucho menos pobladas se llevan un buen pellizco que proporcionalmente es muy superior a su peso poblacional, como puedan ser Asturias, Cantabria o La Rioja, con inversiones entre los 700.000 y los 800.000 euros. «La financiación de la aplicación de este programa en el País Vasco se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico», añade un comunicado de Educación, sin entrar en más detalles sobre lo que irá a parar a las arcas vascas.

Impulso a la FP

Dentro de un contexto de digitalización de la educación, los PGE contarán para la Formación de docentes de FP una inversión de 2,5 millones de euros para aplicar «digitalización aplicada a los sectores productivos».

Precisamente, esta orientación de la FP a la economía y la generación de empleo es otra de las claves del Ejecutivo de cara a modernizar el sistema educativo. «La política del Ministerio sigue con su objetivo de impulsar la FP, garantizando su papel como eje vertebrador de la economía y del estado de bienestar. Este año, su presupuesto incluye por primera vez las partidas correspondientes a la Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyas competencias asume en esta legislatura el MEFP», señala Educación.

La partida para FP será de 1.628 millones de euros en total, de los cuales 974 millones corresponderán a la FP para el empleo. A la FP del sistema educativo se destinarán otros 654 millones, lo que supondrá un incremento del 349% respecto a enero de 2020, como detalla el departamento liderado por Celaá. Desde el mismo desgranar que «127 millones de euros permitirán la acreditación de las competencias básicas y profesionales de unas 532.800 personas; 64 millones se destinarán a la creación de 47.400 plazas nuevas de FP (con el objetivo de alcanzar las 200.000 plazas en cuatro años); se invertirán 170 millones para la conversión de Ciclos

Formativos de Grado Medio y Grado superior en bilingües; y 30 millones irán a la oferta modular formativa en empresas de la que se beneficiarán 125.000 trabajadores ocupados y desempleados».

Finalmente, el apartado de Educación dentro de los PGE concluye que se destinarán 225 millones de euros a la actividad educativa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Ejecutivo central. El presupuesto para las ciudades españolas en el Magreb se incrementará un 11,7% respecto a enero de 2020. Además, la acción educativa en el exterior contará con una partida de 119 millones de euros «para difundir la educación, la lengua y la cultura españolas» a más 40.000 alumnos en 27 países. Asimismo, a la formación permanente del profesorado se destinarán 3,8 millones de euros, lo que equivale a 2,25 millones más respecto al presupuesto de 2020, concluyen desde el Ministerio.

La oposición tacha de irreales los números para Educación

El pasado viernes, en la Comisión de Educación del Congreso, la oposición tachó de irreales los PGE destinados a Educación. La diputada del Partido Popular Sandra Moneo señaló la preocupación de su partido ante «la falta de un proyecto educativo», y criticó que el Ministerio, a su juicio, «se va a convertir en un museo porque ha renunciado a sus competencias».

Desde Ciudadanos, Marta Martín criticó al Gobierno de intentar «trampear las cifras», al sumar en los PGE la cantidad aportada por los fondos europeos. La diputada de Vox Georgina Trías insistió, a su vez, en conocer si se van a reducir los requisitos académicos para acceder a estas ayudas o si se van a eliminar. «Una persona puede estudiar porque tiene dinero, pero el que no lo tiene debe poder estudiar también sin condiciones», replicó, por su parte, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, quien consideró que no se trata de «regalar becas», sino de «igualdad de oportunidades».

El responsable educativo indicó, además, que «es erróneo» decir que estén demoliendo el sistema educativo y que se haya roto el pacto constitucional. Tiana aseguró que las cuentas eran «creíbles», «razonables» y «coherentes», y que permitirán transformar el modelo educativo español. Asimismo, calificó las críticas como «erróneas», «fuera de lugar» y «no ciertas» y pidió a la oposición que no obstaculizaran la tramitación de las Cuentas. «Que ciertos partidos políticos no se dediquen a poner ruedas en Europa», apuntó el secretario de Estado, que pidió a estas fuerzas políticas que «remen a favor del país». «No digo que seamos angelicales, pero sumemos esfuerzos con las discrepancias que haya», abundó Tiana, que consideró el incremento en becas «el mayor de la historia».

La educación privada, «aliviada» por la exención del IVA

Por otra parte, los representantes de la educación privada ya respiran aliviados tras el anuncio del Gobierno de no eliminar finalmente la exención del IVA al sector, como figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Así lo expresaron los firmantes de un comunicado que engloba a varias de ellas. A saber, Juan Santiago, de ACADE, Alfonso Aguiló de CECE, Elena Cid, de CICAIE, Manuel González, de CONCEE, y Juan Cayón, del Foro Emilia Pardo Bazán. «El anuncio del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado ha despejado una de las dudas que sobreolaba sobre el debate político y económico en las últimas semanas. El Gobierno no eliminará la exención del IVA a la educación privada, por lo menos de momento. Esta noticia nos permite respirar aliviados a las organizaciones que representamos al sector, pero, por desgracia, tenemos que seguir manteniendo la tensión y la atención por lo que pueda ocurrir en el futuro», advertían en el texto, en el que se mostraban preocupados porque «los debates suelen quedar ensombrecidos por una cuestión subjetiva que tacha a la educación privada como elitista, dejando al margen y minusvalorando el importante servicio educativo que ofrecen a tantísimas familias».

«Seguramente muchas personas no habían tenido en cuenta el verdadero alcance de la educación privada y cómo podría afectar a sus vidas y a sus bolsillos la eliminación de la exención del IVA a estos servicios. Utilizando los cálculos sobre los costes educativos, podemos cifrar el impacto de la medida en un aumento del gasto medio familiar por cada hijo, que puede oscilar entre los 1.200 y los 1.400 euros, una inversión extra significativa en una situación de crisis como la actual», consideraron desde el lobby de la privada. Sobre este tema se pronunció la ministra Celaá en el debate de los PGE en el Congreso de los Diputados, donde señaló que su futura Ley «no empuja un debate sobre el deslinde entre pública y concertada, para nada es el objetivo de la ley, sino impulsar un debate sobre la calidad de la educación y la excelencia para que todos lleguen al máximo de su talento y con equidad». Unas palabras que no convencen a los representantes de la educación privada, que consideran que están siendo tratados de manera injusta por el Ministerio.

«Gracias al impulso de los equipos directivos, las escuelas son de los lugares más seguros de España a día de hoy»

Charlamos con Alfonso Sánchez, CEO de Vanadis Group, sobre educación, pandemia y tecnología. «Hace falta más profesorado para poder reducir ratios»

Según datos de Vanadis Group, consultora tecnológica española, el 91% de los padres quedaron preocupados o muy preocupados después de la experiencia de la formación a distancia impuesta por la situación excepcional del Estado de Alarma.

A pesar del esfuerzo de los centros educativos por utilizar plataformas de videoconferencia para conectar con todos los alumnos, se echaron en falta recursos y herramientas específicas para facilitar la formación a distancia. La mayoría de las familias se vieron obligadas a supervisar cada clase **online** de sus hijos, especialmente los de edades más tempranas.

Además, los centros educativos tuvieron serios problemas para organizar y evaluar el material didáctico. El 83% de los educadores reconoce haber sufrido mucho estrés para adaptar su materia al formato digital.

¿Cómo ha de reinventarse el sector educativo tras la era post Covid-19?

El sector de la educación debe asumir que el nuevo mundo al que vamos no es el mundo del que venimos, hoy es el COVID, pero el cambio climático también amenaza con nuevas pandemias y nuevas dificultades que hacen que el modelo más clásico de alumnos aula y clase magistral haya llegado al final de su era.

Desde nuestro punto de vista el modelo que se terminará imponiendo, y tiene todo el sentido del mundo, es un modelo semipresencial, donde los alumnos puedan asistir al centro a realizar las tareas que sean más prácticas e implantar los conocimientos más teóricos a través de la formación a distancia u online.

Este modelo permite esencialmente ser flexible, ya que permite pivotar entre un modelo más presencial o más online en función de lo que las circunstancias lo necesiten. Desde nuestra experiencia de años en formación profesional presencial y a distancia, sabemos que las dos modalidades permiten una enseñanza de calidad basada en el aprendizaje de competencias profesionales, conjugando lo mejor del presencial y lo mejor del online, podemos tener una enseñanza semipresencial que se adecua a los nuevos tiempos.

¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que suelen existir en el aula y cómo se pueden solucionar?

En el aula las dificultades son claras, hacen falta más metros cuadrados y eso se soluciona con más espacios, hace falta más profesorado para poder reducir los ratios de alumnos por aula. A partir de ahí se puede usar la tecnología para optimizar, por ejemplo, si se dispone de aulas pero no de profesorado, se pueden hacer aulas espejos donde con un profe y 2 aulas tengamos a 10 alumnos por aula. Si ponemos cámaras en las aulas y damos equipos a los profesores, podríamos pivotar al profesorado entre formación en las aulas y formación en remoto.

¿Cómo ha visto la vuelta a las aulas?

Totalmente desamparada por parte de todas las administraciones y a la buena suerte del buen criterio de los mandos directivo de cada escuela en cada comunidad. El ministerio ha legislado sabiendo que ellos no lo van a implementar, y en el caso de la Comunidad de Madrid (CAM), se hizo un borrador con los 4 escenarios antes de las vacaciones de verano y ya. Hacer un borrador, donde se dice que hay que estar preparado para cualquier escenario es lo mismo que no decir nada, porque sí define el qué pero no define el cómo, y el cómo es lo que era necesarios antes de verano, para estar este año todo el verano trabajando preparando este curso.

Lo totalmente desolador, fue cuando la reunión para determinar cómo se hace el comienzo de curso se celebró a menos de una semana para su inicio, en resumidas cuentas, una falta todas de previsión, preparación y liderazgo por parte de la administración.

¿Cree que las comunidades autónomas están actuando bien?

No, realmente no se han hecho los deberes por parte de la Comunidad, hay mucho slogan, mucho postureo, pero en el caso de la CAM no se está resolviendo.

¿Cómo deben compartirse las aulas, recreos y espacios comunes para evitar contagiarse del Covid-19?

De forma alterna y escalonada, asumiendo que se van a producir cuarentenas y pivotando con un modelo de semipresencialidad para seguir aportando valor a nuestros alumnos.

¿El confinamiento ha producido un impacto negativo en los alumnos?

En su formación no.

¿Cómo viven los alumnos el miedo al contagio? ¿Y los docentes? ¿Familias?

Todos vivimos con miedo, lo que hace que en la escuela se extremen las precauciones, seguramente y gracias al impulso de los equipos directivos, las escuelas sean de los lugares más seguros de España a día de hoy.

¿Qué importancia tienen las metodologías de aprendizaje (experimentos, trabajo por proyectos, etc.) en el fomento de las vocaciones científicas?

Ahora mismo las metodologías son la piedra angular del cambio en la educación, hay que tener en cuenta que en cualquier proceso de transformación, hay que analizar los procesos a cambiar, de ahí ver qué personas están implicadas en dichos procesos y de ahí ver con qué tecnología podemos hacer posible dicho cambio. La tecnología siempre es lo último y al servicio de las personas y los procesos.

¿Qué pasos deben darse para pasar de ese sistema educativo propio de la era industrial a otro que se adecue al mundo digital?

Los pasos están claros, y pueden resumirse en varios grandes bloques:

Análisis del diseño instruccional de cada ciclo formativo para adecuarlo al siglo XXI, trabajando por proyectos, con entregas y feedback iterativo y con formato semipresencial.

Diseño de un plan de acción para la transición al nuevo modelo, teniendo primero en cuenta los procedimientos a cambiar, las personas implicadas en el cambio y la tecnología a usar.

Formar a las personas (personal docente y alumnos) en los nuevos procesos y la nueva tecnología.

Implementar el cambio como parte de un proceso de mejora continua.

¿Cuáles son las profesiones que aún no están inventadas? ¿Cuál es el papel de la tecnología en la innovación educativa?

Las profesiones que aún no están inventadas, por definición, van a ser profesiones asociadas a la tecnología que aún no ha llegado y los cambios derivados de la misma.

Os pongo un ejemplo de tecnología Early Adopted, las gafas de Realidad Aumentada, este nuevo gadget, va a ser la continuación natural de los dispositivos móviles. El año que viene Apple tiene planificado lanzar las suyas, y a día de hoy hay todo un ecosistema incipiente a punto de eclosionar, cuando eso ocurra, habrá nuevos proveedores de hardware, nuevos desarrolladores, nuevos servicios sobre este gadget, nueva formación para que las personas puedan dar ese servicio, etc...

Con respecto al futuro, ¿podrías augurar cómo será la educación el día de mañana con las nuevas tecnologías? ¿Qué valores, conocimientos, destrezas o habilidades deberían tener los estudiantes al finalizar su etapa formativa para poder hablar de un sistema educativo adecuado?

Valores los mismos, destrezas aumentadas en competencias digitales, un modelo educativo semipresencial con parte en remoto y las escuelas convertidas en grandes laboratorios, salas prácticas donde aprender haciendo.

¿Cuál es la solución para la alta tasa de repetidores en España?

Aumento del seguimiento del camino del aprendizaje del alumno por parte de los profesores, tutores y coordinadores. Se ha demostrado que un mayor seguimiento incide directamente en una reducción del abandono y fracaso escolar.

Adicionalmente, si usáramos la tecnología, podríamos usar IoT combinado con big data y con algoritmos predictivos de Machine Learning para poder prever estadísticamente que alumnos están en situación de dejar los estudios o fracasar y articular una acción temprana sobre esos alumnos.

Estructuras y coyunturas: salud mental y sistema educativo, una ecuación sin resolver

Ana Cobos Cedillo. Presidenta de COPOE. Orientadora IES Ben Gabirol. Universidad de Málaga

La crisis sanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia está generando múltiples efectos en nuestro mundo y consecuentemente en el sistema educativo. Las consecuencias más evidentes son las que afectan a la metodología didáctica pues el estado de alarma obliga a que hayan bajado los ratios para evitar los contagios y a que tenga que recurrirse a que parte del alumnado siga su escolarización a distancia y a través de los medios tecnológicos de los que afortunadamente disponemos. Esta situación propicia una nueva brecha que viene a sumarse a las anteriores, como es la brecha digital. No obstante, a medio plazo esto no será un problema, pues como decía mi tío Germán: todo lo que puede arreglarse con dinero, tiene una solución y deja de ser un problema. Los problemas realmente graves no se solventan con dinero sino con algo mucho más caro: creatividad, inteligencia y capacidad de previsión.

El sistema educativo va paliando las consecuencias escolares de esta pandemia con recursos materiales dotando a los centros de más medios, especialmente de tecnológicos, así como personales al reforzar las plantillas de profesorado, y podemos decir que la respuesta frente a la situación sobrevenida de pandemia y confinamiento ha sido todo un éxito.

Sin embargo, están sucediendo más cosas en el sistema educativo pues, simultáneamente a las brechas sociales y digitales, se están produciendo otras situaciones menos visibles, más sibilinas y que tienen más difícil arreglo como son las quiebras de la salud y del bienestar emocional entre nuestros niños, niñas y jóvenes. Estas problemáticas son mucho más profundas y no se están abordando de forma adecuada en el sistema educativo porque apenas se está teniendo conciencia de su existencia.

Afrontar el bienestar emocional de la comunidad educativa no es tan sencillo como contratar docentes, se trata de una tarea que requiere de medidas estructurales para el sistema educativo, bien reflexionadas y fundamentadas en el criterio de profesionales muy cualificados. Dicho de otro modo, dotar de dispositivos electrónicos a los centros para que el alumnado pueda seguir las clases a distancia es muy fácil, pero prevenir la debacle que se avecina en la salud mental de la próxima generación es mucho más complicado.

Nuestra sociedad y el sistema educativo como parte de él, mientras siga gobernado por políticos de mirada cortoplacista cuya prioridad sea la conservación de «su asiento», no hará avances de calado en la mejora real del bienestar de la sociedad, me refiero a mejoras estructurales y sostenibles, a una inversión de futuro y no precisamente económica.

En un mundo tan complejo y líquido como el nuestro, las estructuras se basan en redes porque la unión y superposición de redes para formar tejidos es una de las pocas formas de poder contener la liquidez de nuestro efímero mundo. Trasladada esta metáfora al sistema educativo y al abordaje desde este de la potenciación del bienestar emocional, nos lleva a considerar imprescindible que de una vez por todas en el siglo XXI comience a ser una realidad la conexión del sistema educativo con el sanitario desde una perspectiva más sólida, estructural y sostenible.

Hace años que sabemos que en el sistema educativo las personas aprenden mucho más de lo que recoge el currículo establecido en cada materia. Programamos actividades desde la orientación y la acción tutorial para que se trabajen más contenidos útiles para la vida e incluso tenemos conciencia de que existen otras enseñanzas que llegan al alumnado sin que tengamos intencionalidad sobre ellas como son las que corresponden al currículum oculto como nos enseñó el profesor Xurjo Torres. Sin embargo, con todo ello, es necesario dar otra vuelta de tuerca al sistema educativo para que sea el que necesita la población en el siglo XXI, una vuelta que suponga un giro hacia lo humano.

Del mismo modo que para ser capaces de ver las situaciones de desigualdad muchas y muchos nos pusimos las «gafas violetas» que nos muestran los micromachismos por ejemplo, es necesario que en el sistema educativo se incluyan las «gafas emocionales» para detectar al alumnado susceptible de padecer problemas de origen emocional, detectar a medio plazo a la población vulnerable a perder la salud mental. Sin embargo, que estas gafas emocionales lleguen al sistema educativo no es únicamente una cuestión de concienciación como en el caso de las violeta, ya que requiere de nuevos y modernos planteamientos en el sistema educativo y especialmente de la formación de los profesionales.

Nos jugamos mucho cuando en la selección del profesorado no se tiene en cuenta que este tenga formación en Psicopedagogía, así como que para la contratación de orientadores que cuenten con cualificación que garanticen las titulaciones de: Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía. Es inadmisibles que el sistema educativo pretenda conseguir la calidad que todos tenemos en mente, poniendo en manos de personas sin titulación responsabilidades tan cruciales como la valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo que tienen las niñas y niños en edades tempranas, momento tan decisivo en la vida de las personas y de su entorno familiar más próximo.

La pandemia está produciendo cambios en el mundo que explicitan la modernización que necesita el sistema educativo, que es mucho más que la recurrente cantinela de los que escribimos sobre educación, ya que es ahora una necesidad imperiosa, flagrante y urgente, muy urgente, puesto que los profesionales han de saber cómo reconocer al alumnado en situación de riesgo emocional e intervenir, aunque solo sea para detectar y derivar.

Las necesidades de nuestro mundo obligan a la coordinación de los centros escolares con los servicios sanitarios tanto en la prevención como en la intervención. Deberíamos plantear que en el sistema educativo se pongan en marcha campañas de vacunación, screening de agudeza visual y auditiva y programas educativos de prevención de cuestiones tan importantes como la obesidad infantil, los trastornos de alimentación y adicciones, así como el fomento de la actividad física, el sexo seguro y la salud mental.

Sin que aun hayamos salido de la pandemia, podemos afirmar que está dejando un claro agravamiento de los problemas de salud mental, es más, podemos vislumbrar que, en un futuro a medio o largo, este tipo de dolencias será uno de los más graves problemas de nuestro mundo.

La pandemia y el confinamiento está marcando este mundo, nadie puede negar su influencia, aunque a medio plazo a los seres humanos se nos olvide el sufrimiento y volvamos a las andadas, tal como hicimos tras las guerras mundiales y otras pandemias. Sin embargo, en un futuro habrá una generación marcada por una adolescencia con coronavirus, y justo afectará a los bisnietos de quienes fueron los jóvenes marcados por la guerra.

El sistema educativo ha sabido adaptarse pronto a las tecnologías y a que pueda seguirse el ritmo del curso mínimamente y desde casa, a «salvar los muebles», si bien todas estas acciones distan mucho del aprendizaje que se produce en el alumnado en condiciones normales y naturales, por no hablar de los niveles de satisfacción generales en las comunidades educativas. Sin embargo, sigue pendiente resolver las secuelas que sabemos que se están produciendo en salud mental porque aun no existe la formación adecuada ni las estructuras de coordinación, otra ecuación más por resolver para el sistema educativo no ya del futuro, sino del más eminente presente.